

✓
JOSÉ BORRELL Y MACIÀ

Ingeniero Industrial

El intervencionismo del Estado en las actividades económicas

SU EXTENSIÓN Y LÍMITES



BOSCH, Casa Editorial / Apartado 928 / BARCELONA

JOSÉ BORRELL Y MACIÀ

Ingeniero Industrial

El intervencionismo del Estado en las actividades económicas

SU EXTENSIÓN Y LÍMITES



BOSCH, Casa Editorial - Apartado 928 - BARCELONA

ES PROPIEDAD

PRINTED IN SPAIN

Imprenta Clarasó, Villarroel, 17. — Barcelona. — 1946

DEL MISMO AUTOR

Reorganización de Empresas Industriales. Barcelona,
Gustavo Gili, 1939.

Instalación y Modificación de Industrias. Barcelona
Bosch, 1943.

Economía y Organización Industrial. (Premio Agell, 1943.)
Barcelona, Bosch, 1944.

Valoraciones Industriales. Barcelona, Bosch, 1945.

En prensa:

Organización de Talleres. Barcelona, Labor.

**La organización Científica del Trabajo en épocas de
Depresión.** Madrid, A. N. I. I.

EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO
EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

OBISPADO DE BARCELONA

Nihil obstat

El Censor,

Dr. Cipriano Montserrat, Canónigo

Barcelona, 15 de abril de 1946

Imprimase

† GREGORIO, Obispo de Barcelona

Por mandato de Su Excia. Rvma.,

Dr. Luis Urpi Carbonell, Maestrescuela

Canciller-Secretario

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN. — Plan de este ensayo	5

PRIMERA PARTE

<i>Capítulo Primero:</i> OBJETIVOS SOCIALES DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL. — Defensa del débil frente al fuerte: Legislación social, Policía industrial, Intervenciones en cajas de ahorros, entidades bancarias, compañías y mutualidades de seguros, entidades emisoras. Regulación de las concentraciones industriales, de los grandes almacenes y de la competencia. Legislación contra la usura y defensa del deudor en general. Tasas y racionamientos. — Lucha contra el paro forzoso: Subsidios, Seguro obligatorio, Obras públicas, Regulación de despidos y admisiones forzosas, Estímulos a la construcción y a la industria privada, Reducción de jornada, Suspensión de los progresos técnicos, Regulación de las migraciones, Reeducación profesional. — Disposiciones contra el pánico: Cierre de Bolsas, Moratorias, Circulación forzosa del papel-moneda. — Limitación del lucro: Impuestos progresivos, Reservas obligatorias y limitación de dividendos	15
<i>Capítulo II:</i> OBJETIVOS ECONÓMICOS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL. Protección a la producción nacional: Aduanas, Contingentes, Impulso a las nuevas industrias (Subvenciones, Préstamos, Exenciones tributarias, Garantía de consumo de sus productos, Propiedad industrial). — Regulación de la competencia: Acuerdos obligatorios. Autorización previa para nuevas industrias. Monopolios. — Incremento de rendimientos: Centros de estudio e investigación, Organización científica, Prescripciones y normas. — Dirección de las capitalizaciones: Fomento del ahorro, Limitación de gastos superfluos, Autorización previa para inversiones	42
<i>Capítulo III:</i> OBJETIVOS FINANCIEROS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL. — Consecución de recursos para el Tesoro: Impuestos, Empréstitos, Anticipos del Banco de Emisión, Monopolios fiscales. — Política monetaria: Contingentes, Licencias de importación y exportación, Intervención en los cambios, Monopolio de divi-	

	Págs.
sas. — Medidas antiinflacionistas: Regulación de la circulación fiduciaria, Regulación del crédito	63
<i>Capítulo IV: OBJETIVOS POLÍTICOS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL.</i>	
— La Economía al servicio de la política del Estado. — Finalidades a conseguir: Potenciamiento militar (Autarquía, Industrias de armamento), Independencia del Estado (Nacionalización de determinadas actividades, Depuración política de elementos directivos, Estatificación o socialización), Expropiaciones por utilidad social (Reformas agrarias, Utilización de solares, Colectivización industrial).	81
SEGUNDA PARTE	
<i>Capítulo V: VENTAJAS E INCONVENIENTES.</i> — Aspecto general del asunto. Dificultad de encontrar el organismo interventor, Burocratismo, Economía autodirigida, Decadencia de la iniciativa individual. — Autarquía. Zonas autárquicas.	103
<i>Capítulo VI: VENTAJAS E INCONVENIENTES (continuación).</i> — Legislación social. — Fijación de salarios y condiciones de trabajo. Seguros sociales. — Policía industrial. Reglamentación de determinadas industrias. — Protecciones al ahorro y al deudor. — Política de tasas y racionamientos. — Lucha contra el paro forzoso	121
<i>Capítulo VII: VENTAJAS E INCONVENIENTES (continuación).</i> — Protección a la industria nacional. — Regulación industrial. — Mejora de rendimiento industrial. — Política de capitalización.	144
<i>Capítulo VIII: VENTAJAS E INCONVENIENTES (conclusión).</i> — Ingresos del Estado. — Defensa de la cotización de la moneda. — Defensa del valor interno de la moneda	171
<i>Capítulo IX: LÍMITES DEL INTERVENCIONISMO.</i> — Consideraciones generales. — Aplicaciones a la política industrial	186
BIBLIOGRAFÍA	201
ÍNDICE ALFABÉTICO	207

INTRODUCCIÓN

La intervención del Estado en las actividades económicas, creciente en extensión y en intensidad desde la guerra europea de los años 1914-1918 es tema, desde entonces, de actualidad permanente, ya que, como dijo FUENTES IRUROZQUI ante la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, en el Aula Magna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ⁽¹⁾, “actualmente el mundo entero, por acción y reacción de distintas medidas de tipo económico, se ha deslizado por la pendiente del intervencionismo, con intensidad tan creciente que todos los países y todas las actividades de lo material están regidos por la Administración pública en cuanto a la realización de funciones económicas”.

No olvidemos, sin embargo, que las circunstancias excepcionales y transitorias en que nos hallamos, conducen — con palabras de FRANCO ⁽²⁾ — a la dirección de la economía por el Estado, como “exigencia ineludible de los tiempos difíciles y de las economías enfermas”. Pero como otros autores pretenden perpetuar, aun en circunstancias normales, la dirección estatal de la economía, sea por medio de organismos burocráticos del Estado, sea mediante una autodirección de los propios productores agrupados en sindicatos, nos proponemos estudiar en las páginas que siguen — del modo más objetivo posible y fundamentando nuestras afirmaciones — las diversas modalidades que el repetido intervencionismo ha revestido, así

⁽¹⁾ *Diario de Barcelona*, 18 de abril de 1944.

⁽²⁾ *Discurso en el acto de clausura del III Consejo Sindical Industrial, Diario de Barcelona*, 24 de enero de 1945.

como sus ventajas e inconvenientes y los límites a que — a nuestro juicio — debería reducirse; sin llegar, no obstante, como recomienda RAS ⁽³⁾, a examinar los fundamentos de cada intervención y comparar los resultados que se buscaban con los que realmente se produjeron.

Y empecemos por recordar, con GUAL VILLALBÍ ⁽⁴⁾, que por más que el intervencionismo del Estado en el orden económico se tenga por cosa reciente, “cuando hoy hablamos de economía libre o de economía autoritaria, no hacemos más que decir con expresión actual, o reproducir, los términos de un problema planteado de antiguo, y que quizá está mejor expresado, para que sean más descriptivos los términos y más ajustados a la realidad, hablando de una sistematización combinada o de una sistematización subordinada de la economía. Una y otra se alternan, se suceden con una sucesión casi rítmica, que sorprende cuando se estudia la evolución de las unidades económiconacionales”.

Y no se olvide, como dice el propio GUAL VILLALBÍ ⁽⁵⁾, que “de tal modo lo económico siempre ha estado subordinado a lo político, que incluso cuando la economía se deja en un régimen de libertad, es porque la política entiende que este sistema liberal era lo que convenía a los intereses sociales y cuando la política ha entendido que debía sujetarla, lo ha hecho sin dificultad mayor”.

“Se dice a veces — se lee en ROBBINS ⁽⁶⁾ — que el liberalismo niega todas las funciones de gobierno. Se supone que el fundamento de la filosofía social liberal es la creencia ingenua de que el interés propio conduce necesariamente al beneficio público y de la colectividad. Se condena así con cierta razón a un sistema que se considera, sin motivos, basado en tal superstición.”

(3) Reflexiones sobre la Economía, página 30.

(4) Ante una transformación del concepto de mercado, página 16.

(5) Ídem, página 14.

(6) La Planificación económica y el Orden internacional, páginas 116 y siguientes.

“Sin embargo — prosigue más adelante — y a pesar de lo que se haya afirmado en contrario, es enteramente erróneo suponer que los gobiernos y los poderes públicos no juegan un papel importante e indispensable en el plan de cooperación liberal. Las instituciones características de una sociedad liberal son inconcebibles sin un gobierno.”

“Dichas instituciones — continúa — no pueden sobrevivir sin la seguridad política y jurídica. Si no existe una autoridad armada de poder coactivo, es indudable que los planes de los diferentes ciudadanos pueden frustrarse mutuamente... No puede haber una división internacional amplia del trabajo, ni una acumulación de recursos, ni una organización estudiada de la producción, si no se hace frente a la fuerza arbitraria, con otra más poderosa, pero no arbitraria.”

Es por este motivo que, como diversos autores han afirmado, el liberalismo económico absoluto no ha existido nunca. No son, en efecto, otra cosa que intervenciones estatales la promulgación de ordenanzas o reglamentos para la implantación o explotación de determinadas industrias (peligrosas, insalubres, etc.), la creación de monopolios, la política aduanera y de limitaciones a la importación y exportación, los tratados de comercio, las contribuciones industrial y de utilidades, la legislación social, la de aguas, la de obras públicas y transportes, la política monetaria, el Código de comercio y hasta los Códigos civil y penal.

Prescindamos de las industrias que sólo pueden subsistir al amparo del arancel, prescindamos de las que sólo exportan con primas, prescindamos de las que se instalan en países o regiones donde la legislación social es menos severa o puede burlarse más fácilmente. Un régimen favorable acerca de sociedades y ventajas tributarias en contribuciones e impuestos, no pueden menos de ejercer su influencia. No por otro motivo se han domiciliado en un reducido número de países la casi totalidad de los cartels y holdings internacionales; y no es aventurado afirmar que las ventajas tributarias concedidas en

30 de septiembre de 1932 a la Firestone Hispania S. A. por parte de la Diputación Provincial de Vizcaya (7) no dejaron de contribuir a la elección de emplazamiento para la fábrica de la sociedad.

Pero no siempre el intervencionismo estatal ha sido el resultado de planes de gobierno, pues, a menudo, ha venido impuesto por las circunstancias o solicitado por los mismos intervinientes, viéndose obligado el Estado a asumir funciones económicas aun contra su voluntad. "Durante los últimos años — decía ya en 1933 LUCAS BELTRÁN (8) — todo aquel que se ha encontrado con una dificultad económica ha acudido a pedir protección al Estado; los productores le han pedido precios remuneradores; los exportadores, estímulos a la exportación; los Bancos que les salve de una bancarrota; los obreros salarios elevados; los sin trabajo, subsidios. Y al Estado, en la mayoría de los casos, no le quedaba otro remedio que acceder a las peticiones, con lo cual ha ido tomando la suprema dirección de todos los asuntos."

Y es que — como el citado ROBBINS pone de manifiesto (9) — "si el Estado asumía el control de una pequeña sección de la industria, se veía rápidamente obligado a extenderlo a todas las demás ramas conectadas con ella, aunque fuera remota la relación", pues "la aplicación completa del plan en industrias determinadas, implica, más o menos tarde, la planificación de las demás".

Por esto, como dice PEREIRA (10), "del liberalismo más exaltado hemos venido a caer en un intervencionismo que cada día se quiere sea mayor", señalándose claramente en él, y "en oposición al capitalismo liberal — dice PARÍS EGUILAZ (11) — dos grandes tendencias: la de estatificación de los instrumentos de producción y cambio, imponiendo una reglamentación

(7) *Diari Mercantil*, 2 de octubre de 1932.

(8) *Diario del Comercio*, 13 de diciembre de 1933.

(9) l. c., páginas 40 y 41.

(10) *La batalla del futuro*, página 135.

(11) *El Estado y la Economía*, página 134.

autoritaria sobre la obtención de productos, su cantidad y precio, característica general de los sistemas que total o parcialmente siguen las directrices del marxismoleninismo, y otra, la de aquellos que, manteniendo la libertad de iniciativa particular y la propiedad privada, intervienen fundamentalmente en la regulación de la forma en que se reparte la renta nacional, actuando sobre los instrumentos de distribución, para constituir una participación proporcionada y armónica de todos los sectores sociales en el volumen de la renta global”.

“Frente a la posición abstencionista en relación con los precios — continúa — adoptada por el liberalismo, y frente a la planificación estatal autoritaria, que conduce más o menos rápidamente a la regulación por el Estado de la producción y el consumo y, prácticamente, a la abolición de la propiedad privada, cabe una posición más científica y en definitiva más de acuerdo con la realidad, y es la intervención estatal indirecta, que consiste, no en la fijación oficial de los precios, sino en actuar en forma indirecta a través de los factores causales en sus fuertes oscilaciones, con lo cual no obtendremos una planificación arbitraria que sólo puede mantenerse temporalmente y que con frecuencia resulta perturbadora, pero sí una limitación en los límites de las variaciones, reduciendo la amplitud de las mismas.”

Porque, como dice VITO ⁽¹²⁾, “la economía de concurrencia puede muy bien superarse sin recurrir a la socialización. Conservándose la iniciativa individual y la propiedad privada, los desórdenes de la concurrencia pueden obviarse instaurando un sistema de disciplina de la producción instaurado por el corporativismo. Desde el momento en que la corporación es llamada a realizar la “disciplina unitaria, orgánica y totalitaria de la producción” se le encomiendan tareas que pertenecían antaño exclusivamente a los sindicatos, a saber: robustecimiento de la eficacia productiva de las empresas (gru-

(12) *Las Uniones de Empresas en la Economía fascista*, página 13.

pos) y disciplina del mercado (consorcios). Ejerce, sin embargo, estas tareas, no ya en interés egoísta de algunos productores, como sucedía con los sindicatos industriales, sino que las ejerce, por el contrario, en forma orgánica y continuada y en armonía con la visión superior de los intereses de toda la economía social, elevándolos, por decirlo así, a un plan superior, y sin hacer superfluos, por ello, los sindicatos industriales”.

“La función del empresario — prosigue ⁽¹³⁾ — diferenciada y separada, poco a poco, de la del capitalista, y que reclama aún esa suma de aptitudes y de atribuciones que se encuentran en el moderno capitán de industria, ha cedido, sin embargo, espontáneamente una porción de su esfera al organismo económico superior (sindicato) para tutelar sus propios intereses; y otra le ha sido sustraída por el Estado, que siente la necesidad de defenderse frente al poderío de los grandes organismos económicos y de los grandes agregados de empresas.”

Como se ve, el Estado, puesto a director de la economía nacional, puede adoptar posiciones diversas, de intervención más o menos intensa, según sean las directivas políticas imperantes y las circunstancias del caso; y por ello pudo decir MARIANO MARFIL en la Cámara de Comercio de Madrid ⁽¹⁴⁾ que “la economía dirigida de la postguerra unas veces ha querido producir mucho, otras limitar la producción; ha ensayado el sistema de los salarios altos para aumentar la capacidad de consumo, el de los bajos para disminuir el precio de producción, el de las jornadas escasas para reabsorber a los parados; el de ligar las monedas al oro para darles un valor estable, el de desligarlas para influir en el comercio exterior”. Y es que, como dice ABOLLADO ⁽¹⁵⁾, no hay que “forzar las necesidades de la realidad a un programa preconcebido, ya que está en pugna con la esencia misma de los regímenes totalitarios, cuya

(13) Ídem, páginas 17 y 18.

(14) *Diario del Comercio*, 24 de mayo de 1930.

(15) *El Español*, 13 de enero de 1943.

principal característica es la de desechar toda posible norma programática, actuando en cada momento según las especiales características del mismo”.

A esta elasticidad de la economía dirigida, en contraposición a la rigidez de las normas programáticas, se refiere FERRANDIZ ⁽¹⁶⁾ cuando dice que “los viejos constitucionalismos sólo son convenientes en las épocas de prosperidad, cuando el bienestar de todos los ciudadanos o de sus grandes mayorías es conciliable con las imprevisiones o inocuidades del libro grande; pero que, cuando las cosas van mal y hay que disciplinar y coaccionar y operar como convenga al interés público, la Constitución, más que un instrumento de gobierno, es un estorbo”.

Volviendo a nuestro tema, “las evidentes perturbaciones que, en los últimos decenios, se han observado en el funcionamiento de la economía liberal — escribe TALLADA ⁽¹⁷⁾ — la rigidez y falta en sus reacciones correctoras que se nota en sus instituciones, las consecuencias de la gran guerra y de la crisis de 1929, la expansión de las ideas socialistas y socializantes, y la influencia mítica de la revolución soviética y de sus planes quinquenales, todo ha contribuido a acrecentar la intervención del Estado en el terreno de la vida económica. De actuaciones esporádicas hemos pasado a una política económica de carácter permanente que abarca todos los órdenes de la vida económica; así, hoy vemos por doquier una política comercial que llega a regular las cantidades que se pueden importar y exportar, una política industrial que fija al empresario, no sólo las condiciones que deben reunir las instalaciones industriales, sino que le limita el aumento de la capacidad de producción; una política monetaria que, en el exterior, fuerza los tipos del cambio de la moneda y en el interior fija las condiciones que rigen en el mercado del dinero; que en lo comer-

(16) Prólogo a la traducción de *La Experiencia Roosevelt* de THE ECONOMIST, página 8.

(17) *La política económica en los tiempos de crisis*, página 50.

cial establece tasas en los precios y en lo social no sólo se limita a defender al obrero de los posibles abusos de sus patronos, sino que aspira a modificar la estructura de las clases sociales, alterando la total distribución de la riqueza”.

“Pero — continúa — aun intenta dar un paso más en esta orientación. De intervenir, quiere pasar a dirigir. La política económica se convierte en economía dirigida, y con ella, quiere el Estado moldear, con arreglo a las puras conveniencias colectivas, el organismo todo de la Economía Nacional, acabando más o menos radicalmente con los principios fundamentales que hasta ahora rigieron la economía de empresa. Y así vemos aparecer las tendencias autárquicas en la economía de los Estados, los planes quinquenales ruso y alemán, la política inglesa de dirección de los mercados de productos agrícolas, los organismos de control monetario y la política del New Deal que caracteriza la presidencia de ROOSEVELT en los Estados Unidos. La situación actual del mundo, con multitud de graves problemas planteados y que se influncian y entrecruzan unos con otros, representa un cambio tan profundo en las condiciones que vinieron rigiendo en los principales países del mundo desde principios del XIX hasta el comenzar la guerra de 1914-1918, que sería encerrarse en un ciego idealismo o en estrecheces de teórico creer que la situación actual puede ser resuelta por un retorno puro y simple a los principios preconizados por la economía liberal.”

“La economía dirigida — prosigue, — que no es más que un periodo de la evolución del intervencionismo económico, tiende a substituir cada vez más la libre iniciativa del empresario por la actividad del Estado. De una ciencia económica que aspiraba a reducirlo todo a principios científicos, a leyes generales e inmutables, hemos pasado a actuaciones prácticas en que lo casuístico, lo empírico, la actuación algo desligada e incoherente en cada aspecto de la vida económica tiene primordial importancia. ¿Hasta dónde llegará el mundo en esta dirección? ¿Llegará hasta formas típicamente socialistas, de las

que muchas actuaciones de los Estados son claros antecedentes, o bien hará un alto en el camino y por uno de estos bruscos cambios de orientación tan frecuentes en las sociedades humanas, retornará a direcciones de las que hoy parece alejarse? Terreno éste propicio a políticos y profetas, pero absolutamente vedado al hombre científico, para el que la verdad debe estar siempre por encima de toda aspiración y de todo partidismo.”

Esta última recomendación, por lo demás — que viene a ser no otra cosa que lo que decía CERVANTES de los historiadores, que han de ser “puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor ni la afición no les haga torcer del camino de la verdad ⁽¹⁸⁾ — ha procurado el autor que fuese siempre guía de su actuación profesional; y de un modo particular ha deseado que informase las páginas que siguen, por creer que en un asunto tan debatido como el que nos ocupa, nuestro personal punto de vista no tendrá interés alguno si no estuviese respaldado por las opiniones de personalidades de reconocida solvencia en los campos de la política y de la economía.

Siendo nuestro deseo el ocuparnos de la intervención estatal en las actividades económicas, en toda su extensión, de entre las posibles clasificaciones de la misma, creemos preferible adoptar la fundada en la finalidad que aquélla se propone, finalidad que, para nuestro objeto, puede ser social, económica, financiera o política.

Incluimos entre las intervenciones con finalidad social, aparte de la legislación del trabajo, todas las disposiciones que se proponen proteger al débil frente al fuerte, reducir el paro forzoso o sus efectos, evitar o combatir los del pánico y limitar el lucro en empresas y particulares.

Englobamos en el concepto de objetivos económicos las

(18) *Don Quijote de la Mancha*, capítulo IX.

disposiciones encaminadas a proteger la producción nacional, incrementar su rendimiento, fomentar el ahorro e influir en las capitalizaciones.

Intervenciones con objetivo financiero son, en nuestro caso, por un lado las que tienden a incrementar los ingresos estatales, y por otro, las que se proponen reducir o regular los pagos al extranjero o defender la cotización de la moneda nacional.

Finalmente, calificamos de intervencionismo por motivos políticos el que, aun comprendido en alguno de los casos anteriores — cuya delimitación, por lo demás, no siempre está exenta de posibles discusiones — tiene su principal razón de ser en el afán de someter la economía del país a las directrices de una política totalitaria; sin olvidar que, como dijo TALLADA ⁽¹⁹⁾, “la economía dirigida es diferente en cada país”, según sean las “características especiales de la orientación de la dirección que los Gobiernos quieran marcar a la evolución de su propia economía”.

Una vez terminada la exposición de lo anunciado, pasaremos a estudiar — del modo más objetivo posible y fundamentando nuestras conclusiones en opiniones autorizadas — las ventajas e inconvenientes de cada grupo de intervenciones, para deducir en consecuencia los límites a que — a nuestro juicio — debería circunscribirse cada uno de ellos.

Este es el plan que nos proponemos desarrollar en las páginas que siguen.

⁽¹⁹⁾ Conferencia en la Asociación de Contables de Barcelona. Dyna, abril de 1941, pág. 148.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETIVOS SOCIALES

Los principales objetivos de carácter social que puede proponerse el intervencionismo del Estado en materia económica, están constituidos por la llamada legislación social o del trabajo, cuyo objeto es proteger al trabajador frente a los posibles abusos de que puede ser objeto por parte del patrono que utiliza su servicio. No siendo, en efecto, la misma la capacidad de resistencia económica de uno y otro, puede el primero verse forzado por las circunstancias a aceptar, como mal menor, condiciones injustas para no morir de hambre, ya que casi siempre — a diferencia del segundo — cuenta sólo con el producto de su trabajo para atender sus más perentorias necesidades.

Pero si el objeto de la legislación social no es otro — en principio — que defender al débil frente al fuerte, a fin de implantar la justicia en las relaciones económicas de los hombres, impidiendo que se desarrollen los intereses de los unos en perjuicio de los intereses de los otros, la intervención más o menos moderada del Estado dentro de las funciones económicas que dicha defensa involucra, se ha extendido en el curso de los tiempos en favor de otros “débiles” a quienes otros “fuertes” pueden oprimir.

Tal es el caso de las disposiciones legales y administrativas que limitan, en garantía de sus cuentacorrentistas e imponentes, la composición y liquidez del activo en los Bancos y

Cajas de Ahorros, lo mismo que en las Compañías de Seguros, y las que exigen determinadas formalidades por parte de las empresas emisoras de acciones y obligaciones.

Débil es, también, el pequeño industrial o comerciante frente a la gran empresa y a las agrupaciones industriales; y por esto deben incluirse en este grupo las disposiciones limitativas o reguladoras de sus actividades, así como todas las que tienden a evitar la competencia desleal.

Débil es, asimismo, en general, el deudor frente al acreedor; y a evitar los abusos de este último tiende la legislación contra la usura, la encaminada a desarrollar el crédito, y la creación de instituciones que facilitan préstamos con la garantía de la honradez y laboriosidad del deudor.

Débil es, finalmente, en términos generales, el consumidor frente a sus proveedores; y para evitar los perniciosos efectos de esta inferioridad se han dictado — generalmente en circunstancias excepcionales — múltiples disposiciones bajo el concepto general de tasas y racionamientos.

Otro grupo de intervenciones de carácter social son las que tienen por objeto — también en circunstancias especiales — reducir el paro forzoso o sus efectos, por medio de medidas directas o indirectas.

La concesión de subsidios, el seguro obligatorio, la realización de obras públicas, la limitación de despidos y las obligadas admisiones o readmisiones de obreros parados, son distintas modalidades de las primeras; y son medidas indirectas los estímulos a la construcción y a la industria privada, la suspensión de los progresos técnicos y la reeducación profesional.

Son también de carácter social, y a la vez medidas transitorias, las que se proponen evitar el pánico o combatir sus efectos: cierre de Bolsas, moratorias, circulación forzosa del billete.

Finalmente, de carácter social son las disposiciones que tienden a limitar el lucro en empresas y particulares — aun-

que no estén siempre exentas de motivaciones económicas y financieras — y en especial los impuestos progresivos sobre la renta, las utilidades y las herencias, y los que gravan los beneficios extraordinarios o de guerra, como también las que regulan las reservas obligatorias.

De todo ello, aunque sin descender a detalles para no alargar desmesuradamente este capítulo, nos ocuparemos a continuación, de acuerdo con el siguiente esquema :

Defender al débil frente al fuerte.	Trabajadores .	{ Legislación social pro- piamente dicha. Regulación industrial en sus relaciones con la seguridad e higiene.
	Pequeños capi- talistas.	{ Garantías a los cuenta- correntistas bancarios e imponentes en Ca- jas de Ahorros. Garantías a los asegu- rados. Garantías a los accionis- tas y obligacionistas.
	Pequeños in- dustriales.	{ Legislación antitrust. Regulación de grandes almacenes. Disposiciones contra la competencia desleal.
	Deudores.	{ Legislación contra la usura. Defensa del deudor hi- potecario y pignora- ticio. Préstamos sin garantía prendaria.
	Consumidores.	{ Disposiciones sobre ta- sas. Ídem sobre racionamien- tos.

Reducir el paro forzoso o sus consecuencias.	Directamente	- Concesión de subsidios. - Seguro obligatorio. - Realización de obras públicas. - Limitación de despidos. - Admisiones y readmisiones obligatorias.
	Indirectamente	- Estímulos a la construcción y a la industria privada. - Reducción de jornada. - Suspensión de progresos técnicos. - Política migratoria. - Reeducación profesional.
Evitar el pánico o combatir sus efectos.		- Cierre de Bolsas. - Moratorias. - Circulación obligatoria del billete.
Limitar el lucro en empresas y particulares.		- Impuestos progresivos sobre renta y utilidades. - Ídem sobre herencias. - Ídem sobre beneficios extraordinarios y de guerra. - Reservas obligatorias.

I. DEFENSA DEL DÉBIL

Trabajadores

LEGISLACIÓN SOCIAL. — Si bien la legislación social en defensa del trabajador puede decirse que no ha sido sistematizada hasta estos últimos decenios, no puede negarse que, más o menos esporádica y tímidamente, ha venido inspirando, desde hace siglos, multitud de fueros, ordenanzas y leyes. Sir-

van de ejemplo, aparte de las Ordenanzas gremiales — en lo que les es aplicable — la de 1414, de FERNANDO DE ANTEQUERA, que limita la jornada de trabajo de los obreros del campo, y los *Ordenamientos de Menestrales* de PEDRO EL CRUEL y las *Ordenanzas Reales* de los Reyes Católicos, que pueden considerarse como tratados de protección general obrera.

Pero circunscribiéndonos al siglo XIX, que, al menos en sus primeros decenios, ha sido considerado como época clásica del liberalismo, no llevaba muchos años de vida el industrialismo moderno, cuando ya en 1802, como recuerda LASPLAZAS ⁽¹⁾, fué reglamentado en Inglaterra el trabajo de menores, punto éste del que se ocuparon más tarde Alemania (1839), Francia (1841), España (1873) y otros muchos países, sin descuidar otros aspectos del problema más general.

Según ANTOINE ⁽²⁾, las leyes sociales pueden clasificarse en cuatro categorías, según que su objeto sea:

- a) proteger las fuerzas y la vida del trabajador,
- b) regular el contrato de trabajo,
- c) mejorar, moral o materialmente, la vida del trabajador,
- d) hacer frente a los infortunios derivados del ejercicio del trabajo o de la misma vida del trabajador.

Se incluyen en el primer grupo las disposiciones acerca del trabajo de la mujer y del niño, jornada de trabajo, descanso dominical, vacaciones retribuidas y otras análogas.

El segundo grupo comprende el contrato de trabajo y disposiciones complementarias acerca de colocación obrera, sindicatos profesionales, salario mínimo, despidos, conciliación y arbitraje o magistratura del trabajo, etc.

Las disposiciones del grupo tercero constituyen — puede

⁽¹⁾ La actual legislación social de España y su posición en el derecho social internacional. *Diario del Comercio*, 2 a 5 de marzo de 1933.

⁽²⁾ *Cours d'Économie Sociale*, pág. 514.

decirse — un perfeccionamiento en las relaciones laborales. Su base son las obras sociales patronales instauradas, en un principio, graciosamente por algunas empresas de importancia o por patronos al estilo de OWEN o de HARMEL, y generalizadas más tarde con carácter obligatorio. Tales son el subsidio familiar, las habitaciones baratas, las escuelas de aprendizaje, los campos de deportes, las bibliotecas, los economatos, los comedores económicos, la participación en los beneficios, etc.

En el último grupo, finalmente, se comprenden por un lado los seguros contra accidentes y enfermedades profesionales, y por otro los de vejez, imposibilidad física para el trabajo, enfermedad no profesional, maternidad, paro forzoso, etc., o sea, en junto, toda la gama de seguros sociales, cuyo estudio, por conciso que fuere, exigiría mucho más espacio del que podemos disponer.

No nos es tampoco posible extendernos en el estudio de las demás disposiciones sociales, aunque es bueno recordar con GALLART ⁽³⁾ que “los principales propulsores de la legislación de trabajo protectora y emancipadora del obrero han sido aquellos partidos socialconservadores de espíritu más abierto, de sentido comprensivo, que no han faltado nunca en los países normalmente constituidos”, al paso que “los partidos ochocentistas de izquierda, imbuídos de prejuicios de ultraliberalismo revolucionario, son los que más se han resistido a entrar por los caminos del reformismo social basado en la acción legislativa”.

Y terminaremos este apartado diciendo, con el propio GALLART ⁽⁴⁾, que el derecho social es un “sistema de normas jurídicas que rigen la relación laboral”, y con AUNÓS ⁽⁵⁾ que política social es el “arte de hacer lo posible para remediar las necesidades sociales”.

⁽³⁾ *La Veu de Catalunya*, 10 de noviembre de 1933.

⁽⁴⁾ Conferencia en el *Colegio de Notarios de Cataluña* (20-I-35).

⁽⁵⁾ Conferencia en el *Centro Cultural del Ejército y la Armada* de Barcelona (28-II-41).

POLICÍA INDUSTRIAL. — Complemento indispensable de las disposiciones acerca del seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son las que se proponen prevenir o evitar que unos y otras se produzcan. Es en este sentido que pueden considerarse en gran parte como protectores del trabajador y, por tanto, como de carácter social, los reglamentos de policía aplicables a las industrias, minas, ferrocarriles, etc.

Sabido es que “la libertad consiste en hacer todo aquello que no perjudica a otro”, de manera que “el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre sólo tiene por límites aquellos que aseguran a los otros miembros de la sociedad del disfrute de aquellos mismos derechos” ⁽⁶⁾, o, en otras palabras, “la libertad sólo es posible dentro de un orden”. Es por ello que el conde de TORENO en su célebre Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813, al disponer que “todos los españoles y extranjeros avecindados podían libremente establecer fábricas sin necesidad de permiso de ninguna clase”, añadió, en el propio artículo 1.º, que mientras “se sujetaran a las reglas de policía adoptadas y que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos”.

Esporádicamente al principio en Ordenanzas Municipales o en el cuerpo de disposiciones de otra índole, y de un modo concreto más tarde en Reglamentos especiales, se han señalado las condiciones a que debe sujetarse la instalación y explotación de industrias peligrosas, insalubres y hasta sólo incómodas; las calderas de vapor y aparatos o recipientes sujetos a presión, los ascensores, grúas y montacargas; las centrales eléctricas, líneas de transporte e instalaciones distribuidoras; los ferrocarriles y tranvías; los vehículos terrestres, buques y aviones, etc. Y últimamente, en conexión con el Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, se han dictado disposiciones acerca de la iluminación de las fábricas, talleres, almacenes y oficinas.

(6) Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, artículo 4.º.

Para controlar el cumplimiento de las reglamentaciones expresadas, tanto el Estado como el Municipio cuentan con sus cuerpos de inspectores facultativos; pero, además, se ha propuesto a menudo que las empresas industriales de determinado carácter debiesen contar con uno o más técnicos — de capacidad oficialmente reconocida — responsables de dicho cumplimiento en beneficio no sólo del personal de la empresa, sino también de los vecinos del lugar de trabajo y hasta de quienes han de utilizar sus productos. Y todavía sus funciones pueden ampliarse, como en Alemania ⁽⁷⁾, en el sentido de “velar por el perfecto aprovechamiento de la fuerza de trabajo”.

Precedentes de esta idea, que tantas discusiones — no siempre desinteresadas — ha provocado, como veremos, son entre otros, la obligatoriedad de un arquitecto y un aparejador responsables en la construcción de edificios, la de un farmacéutico en la preparación de fórmulas y especialidades médicas, o la de un ingeniero de minas en las explotaciones mineras.

Pero, aun cuando el Consejo de Industria, para documentarse acerca del asunto, anunció en 10 de octubre de 1934 una información pública para un proyecto de Reglamento sobre los técnicos con título oficial que obligadamente deban dirigir las industrias protegibles, la idea sólo fué llevada a la práctica en una mínima parte cuando por Orden de 10 de mayo de 1937 dispuso el Departamento de Economía de la Generalidad que todas las empresas de la industria química radicantes en Cataluña, con más de 25 obreros o con un capital no inferior a 500.000 pesetas, debían contar, al menos, con un técnico titular responsable.

Pequeños capitalistas

ACTIVO DE LAS CAJAS DE AHORROS Y ENTIDADES BANCARIAS. — La protección al débil cuyos intereses otro más fuer-

(7) *Documentación Económica*, marzo de 1945, página 63.

te puede perjudicar, función del Estado, aunque sólo fuese en calidad de “enderezador de entuertos”, se ha extendido a los más o menos pequeños capitalistas, propietarios de efectos públicos o valores industriales, o bien imponentes en las Cajas de Ahorros o cuentacorrentistas bancarios. De estos últimos nos ocuparemos someramente en este apartado.

Es, en efecto, por motivos más sociales que económicos, que las disposiciones oficiales regulan tanto la constitución y materialización de reservas como la distribución del activo en los Bancos y — de un modo especial — en las Cajas de Ahorros, a fin de que disponga aquél de la necesaria “liquidez” y seguridad para estar en condiciones de atender los pagos derivados del pasivo y, particularmente, las peticiones de reembolso por parte de los acreedores a la vista.

Aunque con carácter más bien financiero — y por ello volveremos sobre el asunto más adelante — en los Bancos de Emisión es quizá donde la intervención en este sentido es más intensa, a fin de que en general los billetes en circulación estén garantizados con reservas metálicas, cartera de valores o créditos contra el Tesoro en proporciones determinadas.

SEGUROS. — Lo que acabamos de decir acerca de las entidades bancarias, puede aplicarse a las aseguradoras, tanto si se trata de Compañías que contraten a prima fija como de mutualidades. Todas ellas, en efecto, deben sujetarse en España a los requisitos que fija la Ley de 14 de mayo de 1908 y disposiciones posteriores — aparte de lo que les es aplicable de los Códigos civil y de comercio — acerca de cuantía y materialización de reservas, liquidez del activo, etc.; deben estar inscritas en un registro especial del Ministerio de Trabajo, han de dar publicidad a sus memorias y balances y están sujetas a una rigurosa inspección por parte de los Poderes públicos.

Debe consignarse, además, que, para ciertos riesgos, el reaseguro es obligatorio; y que en los seguros sociales goza de determinados privilegios el Instituto Nacional de Previsión.

ENTIDADES EMISORAS. — Deben recordarse los proyectos de Decreto estudiados, en 1924, por el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio y por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, sobre intervención del Estado en la marcha de las sociedades anónimas ⁽⁸⁾, el propósito, no cuajado, de investigación en las sociedades cuyos valores se cotizaban en la Bolsa de Madrid ⁽⁹⁾, y la iniciativa de SABATÉS, quien al ocupar, a primeros de 1936, la Consejería de Economía de la Generalidad de Cataluña, propuso que las empresas, al emitir obligaciones, debiesen someterse a un reconocimiento por parte de personal técnico que dictaminase acerca de la existencia y solidez del activo ofrecido en garantía de la emisión que se intentaba lanzar al mercado ⁽¹⁰⁾.

Esta iniciativa — que estudió en algunas de sus sesiones el Consejo de Economía de Cataluña, aunque sin llegar a cristalizar en proyecto de ley o decreto — es mucho menos ambiciosa que la *Securities Exchange Act* que, formando parte del *New Deal* y en substitución de la *Securities Act* del año anterior, fué promulgada en 1934 en los Estados Unidos. A pesar de haberse exagerado mucho acerca de la influencia de la misma con sus disposiciones complementarias, sobre el mercado de valores, una y otras merecen considerarse, en opinión de *The Economist* ⁽¹¹⁾, como uno de los mayores éxitos del *New Deal*. No sólo reglamentó las transacciones de valores y exigió se revelasen, en los anuncios de emisión, numerosos datos acerca de la situación financiera de la empresa, operaciones que realiza, remuneraciones percibidas por sus administradores y altos empleados, etc., sino que creó, además, la *Securities and Exchange Commission* (S. E. C.), encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y de recibir y dar publicidad a los datos suministrados por las entidades emisoras.

(8) *Boletín Industrial*, junio de 1924, pág. 96.

(9) *Diario del Comercio*, 26 de enero de 1935.

(10) *Ídem*, 28 de enero de 1936.

(11) *La Experiencia Roosevelt*, páginas 139 y 140.

También en otros países ⁽¹²⁾ se han adoptado precauciones para que el público pueda conocer la situación de las Compañías nacionales y extranjeras que quieran emitir acciones, obligaciones o títulos de cualquier naturaleza, al propio tiempo que se castiga el dolo y la culpa de los que inducen a engaño para facilitar una emisión. Y últimamente, ha sido en Portugal donde, a base de un Tribunal y de una Cámara de Verificadores, se ha establecido una fiscalización sobre las Sociedades anónimas ⁽¹³⁾.

Aunque tengan relación con este apartado, no son de carácter social y serán, por ello, estudiadas más adelante las autorizaciones, a veces necesarias para la emisión de títulos o aumentos de capital, y para el nombramiento de consejeros, gerentes y directores en sociedades determinadas.

Pequeños industriales y comerciantes

LEGISLACIÓN ANTITRUST. — La protección a los pequeños industriales y comerciantes, considerados débiles frente a grandes agrupaciones por concentración o cartelización, ha tenido su principal exponente en la *antitrust legislation* norteamericana, aunque quizá haya sido también la más ineficaz. Insuficiente la ley de 1888, que creó la *Interstate Commerce Commission* para recibir quejas, vigilar las tarifas y dictar sentencias, en 2 de julio de 1890, la ley Schermann declaró ilegal toda combinación contraria a la libertad de la industria o a la del comercio de unos Estados con otros o con del extranjero. En 1914, esta ley fué substituída por la Clayton, que implantó el régimen preventivo y entresacó de entre la multitud de especulaciones ilícitas, las más típicas y frecuentes para declararlas ilegales; pero el 10 de abril de 1918, la ley Webb declaró que las leyes norteamericanas prohibitivas de los *trusts*, no eran aplicables a las empresas exportadoras.

(12) RAHOLA, *El Trust del capital y el Sindicato obrero*, página 19.

(13) *Diario de Barcelona*, 22 de mayo de 1943.

También en otros países — por ejemplo, en Yugoslavia, en agosto de 1934 — se han prohibido o limitado las concentraciones industriales en cuanto pueden considerarse nocivas para el interés colectivo. Pero, como veremos más adelante, considerado el asunto desde otros puntos de vista, no faltan aquéllos donde han sido favorecidas y hasta declaradas obligatorias en circunstancias determinadas aún prescindiendo de las debidas a instauración de monopolios y a la atribución de ciertas funciones a los Sindicatos o Asociaciones profesionales. Sirva de ejemplo la Ley de 11 de julio de 1941, a cuyo amparo han tenido lugar importantes concentraciones bancarias.

REGULACIÓN DE LOS GRANDES ALMACENES. — Otro aspecto de la protección estatal a los pequeños comerciantes es el dificultar la concurrencia que pueden hacerles los grandes almacenes, principalmente los llamados “a precios únicos”, poniendo restricciones a su establecimiento o ampliación.

Tal fué la finalidad de las Ordenanzas alemanas de 9 de marzo de 1932 y 23 de diciembre de 1933, así como de la Ley de 15 de mayo de este último año; la del Decreto federal suizo de 14 de octubre de 1933; la de la Ley checoslovaca de 22 de diciembre de 1933 y la de los proyectos de ley presentados por la misma época a la Cámara de Diputados francesa.

En España, poco más de un año más tarde, al iniciar sus actividades la Sociedad Española a Precios Únicos (SEPU), cierta campaña de Prensa ⁽¹⁴⁾ en favor de limitaciones análogas no condujo a resultado práctico alguno.

REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA. — La prohibición de la llamada competencia desleal, adquirió gran relieve en los Códigos de la N. R. A., que, formando parte del *New Deal* rooseveltiano, fueron declarados de obligatoria aplicación, en número de 546 con 185 suplementos, entre los años 1933 y 1935. Finalidad análoga se propusieron en Inglaterra, lord MELCHETT con su proyecto de ley llamado *Industrial Reorganisa-*

(14) *Diario del Comercio*, 15, 16 y 17 de febrero de 1935.

tion Bill, presentado en noviembre de 1934 a la Cámara de los Lores; en Francia, FLANDIN con el presentado a la Cámara de los Diputados en enero de 1935; y en Bélgica mediante el Real Decreto del propio mes y año.

A evitar la que también podríamos llamar competencia desleal por parte de países extranjeros, van encaminadas las disposiciones *antidumping* o los recargos en Aduana por moneda depreciada. De ello, no obstante, nos ocuparemos más adelante.

Deudores

USURA. — Si anteriormente hemos considerado débil al acreedor, al tratarse de un imponente en Caja de Ahorros, cuentacorrentista bancario, asegurado o propietario de efectos públicos o valores industriales, hemos de tratar ahora del caso inverso, en que el débil es el deudor frente al prestamista.

La legislación contra las prácticas usuarias, extendida por todos los países civilizados, constituye una intervención del Estado en beneficio del deudor, considerado débil frente a su acreedor. Pero aparte de estos métodos directos, se combate, también, a menudo, la usura indirectamente, haciéndola innecesaria mediante la actuación de instituciones dedicadas a la concesión de créditos o préstamos sin interés o a un interés moderado. Tales son los Montes de Piedad, que disfrutaban de diversos privilegios a cambio de ciertas obligaciones, y algunas Cajas o Institutos de crédito para finalidades determinadas.

DEFENSA DEL DEUDOR HIPOTECARIO O PIGNORATICIO. — Aunque formen parte de las disposiciones contra la usura, merecen destacarse las que limitan, en beneficio del deudor, el alcance de las cláusulas a estipular en los correspondientes contratos de hipoteca o de préstamo con garantía prendaria. Y entre ellas la del artículo 33 de la Ley de 16 de diciembre de 1940, que prohíbe que aquél se haga cargo de las utilidades que por tarifa 2.^a corresponden al acreedor, pago que, satisfecho antes

corrientemente por el primero, equivalía a un 25 por 100 de exceso en la cuantía de los intereses a satisfacer.

PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA PRENDARIA. — Aunque estos préstamos, en toda su crudeza sólo se encuentran en sociedades caritativas o filantrópicas que no persiguen lucro y pueden permitirse, por lo tanto, un porcentaje más o menos elevado de créditos fallidos, no son cosa rara cuando se cuenta con la honradez y laboriosidad del deudor, y con probabilidades de éxito en la operación a que el préstamo ha de destinarse, dándose más importancia a la solvencia moral de aquél que a la material, aunque no se prescinda de esta última.

“La mejor garantía para el acreedor” — afirman los partidarios del *contrôle budgétaire* ⁽¹⁵⁾ — “no son valores que pueden despreciarse ni avales no siempre bastante seguros, sino la certeza, dentro de las previsiones corrientes, de que el crédito será invertido en operaciones remuneradoras que permitirán el puntual pago de intereses y amortizaciones en la forma estipulada”.

Y en España, el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938 afirma, en su Declaración IX, apartado 2.º, que “la honorabilidad y la confianza, basadas en la competencia y en el trabajo, constituirán garantías efectivas para la concesión de créditos”; lo que ha sido llevado a la práctica mediante la Orden Ministerial de 24 de enero de 1946.

Consumidores

TASAS Y RACIONAMIENTOS. — La protección al consumidor tiene su principal exponente en la política de tasas o precios máximos, acompañada o no de racionamiento o cupo. Puede reducirse a los alimentos o extenderse a una parte — y hasta a la totalidad — de primeras materias y productos industriales.

(15) BORRELL, *Reorganización de Empresas Industriales*, página 290.

La tasa sin racionamiento viene siendo de aplicación corriente aun en circunstancias más o menos normales, cuando se temen abusos por parte de productores, almacenistas o detallistas de artículos de primera necesidad. Tal es el caso del pan, cuyo precio de venta hace muchos años que está sujeto a tasa, aunque haya sufrido oscilaciones como consecuencia de las del trigo; y el de los alquileres urbanos, cuya elevación no puede exceder de los límites fijados en el R. D. de 21 de junio de 1920 y disposiciones posteriores. Con carácter más general, un proyecto de ley de primeros de julio de 1936 proponía la creación de una Junta Central Reguladora de Precios de artículos destinados a la alimentación, vestido, habitación y materiales de construcción.

Si hay escasez de los artículos intervenidos, no es, empero, suficiente la tasa que, a menudo, debe ir acompañada de racionamiento. Esto tiene lugar, comúnmente, cuando la producción nacional del artículo es nula o insuficiente y circunstancias externas — y en general transitorias — dificultan o impiden su importación. Éste es el motivo de las tasas y racionamientos que, por efecto de la guerra, han debido instaurarse en la casi totalidad de países. Pero puede también, sin embargo, limitarse la importación a consecuencia de medidas autárquicas o por otras causas políticas o económicas.

Pero como dijo FERRER CALBETÓ en el Fomento del Trabajo Nacional ⁽¹⁶⁾, “la tasa y el racionamiento son medios a arbitrar episódicos y ocasionales en momentos de escasez, ínterin no se logra la normalización que sólo por el aumento de oferta puede venirnos; la tasa y el racionamiento son medios de eficacia inmediata y de característica social más acusada y visible, pero... para actuar socialmente sobre los precios, es de enorme mayor eficacia actuar a largo plazo con el fomento de la oferta que con la coacción que significan las tasas y racionamientos”.

⁽¹⁶⁾ *Capacidad económica de España para superar las dificultades del momento actual*, página 13.

La política de precios puede, pues, variar desde tasar y racionar un número cada vez creciente de artículos alimenticios y materias primas o productos industriales, hasta influir indirectamente en aquéllos en la forma expresada o favoreciendo sencillamente los medios conducentes a una reducción en el precio de coste. De todo ello, así como de precios taxativamente determinados y de escandallos-tipo, podríamos multiplicar ejemplos, que omitimos para no alargar desmesuradamente este apartado.

II. PARO FORZOSO

Remedios directos

CONCESIÓN DE SUBSIDIOS. — El paro forzoso alcanzó, principalmente en los años siguientes a la crisis de 1929, proporciones tan considerables que han hecho precisa la intervención estatal, sino para solucionarlo, al menos para mitigar sus perniciosos efectos.

Es en este sentido que se han llevado a la práctica los subsidios, sistema intermedio entre la beneficencia y el seguro, y que en definitiva no son otra cosa que una evolución de las primitivas cajas contra el paro que, dependientes, en general, de los sindicatos cristianos o socialistas, llegaron a tener carácter público o semipúblico a causa de las subvenciones que, para su funcionamiento en épocas de depresión, recibieron de las corporaciones locales.

De un modo indirecto representan un subsidio de paro las exenciones en el pago de algunos servicios de que se benefician los parados. En este sentido merecen mención especial los Decretos de 1.º de mayo de 1937 y de 17 de octubre de 1940, en virtud de los cuales se concede, en determinadas condiciones, a los obreros y empleados en paro forzoso, la exención en el pago de alquileres, luz y agua. Y aparte de ello — como se lee

en una comunicación cursada por la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Barcelona ⁽¹⁷⁾ — “la autoridad gubernativa, bien intencionada, creyendo realizar un acto filantrópico, suspendió el libre ejercicio de la propiedad al prohibir los desahucios de intrusos y morosos”.

SEGURO OBLIGATORIO. — Un paso más en la mitigación de los efectos del paro es el seguro obligatorio a base de una Caja que recibe las aportaciones de los patronos, de los obreros y del Estado; pero como en circunstancias excepcionales los fondos de que dispone resultan insuficientes, este último debe prestar a la Caja las sumas precisas para saldar su déficit. De seguro se pasa, pues, a subsidio.

Fué en Inglaterra donde el seguro contra el paro ha sido más discutido, de un modo especial por efecto del paso por el Poder de los dos Gobiernos laboristas que lo han hecho gravar fuertemente sobre el Presupuesto y sobre la industria. La indemnización expresada, uniforme en un principio, siete chelines semanales, fué más tarde aumentada en cuantía hasta diecisiete e incrementada con un plus de nueve chelines para la esposa y otro de dos chelines para cada hijo que corra a su cargo. En conjunto la aportación estatal ascendió, en 1930-31, a 101.300.000 libras, casi el doble que en 1924-25 (51.500.000 libras) y equivalente a un 7,3 por 100 de los salarios totales satisfechos (1.709.000.000 libras).

En Bélgica, Alemania, Austria, Holanda, Italia, Polonia, Suiza y otros países, se adoptó también, con diversas modalidades, el subsidio con el déficit a cargo del Estado o del Municipio; y en España, figuró en el proyecto de ley contra el paro, presentado a las Cortes por la minoría agraria, en enero de 1934.

Pero prescindiendo de anteriores actuaciones, en la industria textil algodонера ha sido instaurado el seguro contra el

(17) *Memoria de la actuación de la Cámara, durante el Ejercicio de 1941*, página 162.

paro ⁽¹⁸⁾ que administra la Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera — en un principio, de la Subcomisión Reguladora del Algodón, — dotándola al efecto con el rendimiento de un arbitrio especial de 50 céntimos por kilogramo de algodón importado. También en Barcelona, un subsidio de paro beneficia a los obreros del puerto afectos al Sindicato Local de Transportes Marítimos ⁽¹⁹⁾.

Y más recientemente, por Decreto-Ley de 3 de agosto de 1945, fué creada la “Caja de Compensación del Paro por escasez de Energía Eléctrica”, con la finalidad de garantizar el percibo de cinco jornadas semanales a los obreros de las industrias que por la escasez de referencia deben reducir sus días de trabajo. El patrono debe satisfacer el importe de 40 horas con derecho a reintegrarse de los dos tercios de la diferencia con cargo a la Caja y del tercio restante a base de horas a recuperar cuando las circunstancias lo permitan. Los fondos precisos para ello deben conseguirse, a su vez, mediante un recargo del 20 por 100 sobre las facturas de alumbrado y del 10 por 100 sobre las de fuerza.

OBRAS PÚBLICAS. — La ejecución de obras públicas para remediar el paro, práctica frecuente en casos esporádicos de inundaciones, sequías, granizadas, etc., en las comarcas afectadas, ha querido aplicarse en gran escala contra el de la época a que nos referimos. En España mismo, las leyes de 23 de diciembre de 1932, de 7 de julio de 1934 y de 25 de junio de 1935, tienen esta finalidad, aunque, como hizo notar LORENZO PARDO ⁽²⁰⁾ al ser anunciada la presentación de esta última a las Cortes, “la característica esencial del proyecto de plan de trabajos para remedio de paro” que propone es “perseguir un estímulo para la iniciativa privada”.

De una manera especial se ha hecho hincapié en “que las obras acometidas tengan un carácter reproductivo, fomenta-

⁽¹⁸⁾ Decreto de 13 de julio y Orden de 5 de agosto de 1940.

⁽¹⁹⁾ *Diario de Barcelona*, 17 de enero de 1942.

⁽²⁰⁾ *El Sol*, 30 de abril de 1935.

dor de la riqueza y que su ritmo no se ajuste a visiones de megalomanía, sino a realidades y posibilidades económicas de lugar y de tiempo" ⁽²¹⁾, y en la necesidad que estén de acuerdo con "un plan meditado, llenando dos condiciones, la de su rentabilidad y la de su adecuación a las posibilidades industriales del país" ⁽²²⁾; pues si todo se redujese a construir, por ejemplo, ferrocarriles con déficit permanente de explotación, o carreteras de poco tráfico y grandes gastos de entretenimiento, sería quizá preferible ocupar a los sin trabajo en "obras perfectamente inútiles o que, al menos, no exijan ningún nuevo gasto para más adelante" ⁽²³⁾.

No podemos extendernos acerca de este punto, sobre el que volveremos más adelante; pero haremos notar que, entre otros partidarios del sistema, fué éste recomendado por la Comisión Económica del Comité Federal de Cooperación europea, en su reunión de Praga, en abril de 1931, y por la Conferencia de Stressa, en septiembre de 1932. Y, prescindiendo de consideraciones de otra índole, todos los autores se muestran acordes en que la reducción de paro obrero registrada en los últimos años anteriores a la segunda guerra mundial, se debe, principalmente en Alemania, a la política de rearme.

Prescindiendo, no obstante, de este aspecto militar de la política en el que — con palabras de ROBERT ⁽²⁴⁾ — "la economía no tiene nada que decir, pues se trata de algo completamente distinto del desenvolvimiento de la producción nacional", para evitar algunos de sus inconvenientes, propuso KEYNES "que el Estado tenga constantemente completamente estudiados (proyectos técnicos y previsiones financieras), un cierto número de obras públicas de utilidad evidente, pero no urgentes en su ejecución" y, de este modo, "preparadas así las cosas, al presentarse el período de depresión, se pone en

⁽²¹⁾ M. M., *Ahora*, reproducido en *Diari Mercantil*, 4 de enero de 1933.

⁽²²⁾ Ídem.

⁽²³⁾ RIBÓ, *La Veu de Catalunya*, 5 de marzo de 1933.

⁽²⁴⁾ *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 128.

ejecución la cantidad de obras necesarias para absorber el mayor número de obreros que, como consecuencia de la depresión, se encuentran sin trabajo" ⁽²⁵⁾.

Es evidente que, aceptada esta solución, el experimento debe hacerse en gran escala y acumulando el esfuerzo en un pequeño espacio de tiempo, pues con ello se trata de dar un impulso enérgico a toda la actividad industrial para que pueda ponerse de nuevo en marcha toda la economía del país ⁽²⁶⁾; pero este impulso se consigue también, indirectamente, mediante exenciones tributarias, como en la expresada ley de 25 de junio de 1935 o en las medidas de protección a la industria, de que nos ocuparemos más adelante, sin olvidar que, como ha dicho OLARIAGA ⁽²⁷⁾, "un gran plan de obras públicas no debe tener por único objeto una creación de trabajo que al cabo de un tiempo se interrumpe provocando otra crisis más grave que la que se trata de remediar, sino que debe trazarse con vistas a intensificar la demanda de artículos industriales, aparte, claro está, de aumentar la capacidad general de compra del país", preocupándose "más que de repartir lo existente, de que exista algo que repartir".

LIMITACIÓN DE DESPIDOS Y ADMISIONES OBLIGATORIAS. — La regulación de los despidos forma parte de la legislación del trabajo, y así se ocupa de ellos la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 en su capítulo VII, como, de un modo especial, el Decreto de 29 de noviembre de 1935, dictado de conformidad con el artículo 12 de la Ley de 25 de junio del propio año, en virtud del cual todo despido por falta de trabajo precisaba autorización del Jurado Mixto correspondiente.

Consideración especial han merecido los despidos de la totalidad del personal por cierre de establecimientos industriales, reglamentándose en casos determinados este cierre por las con-

⁽²⁵⁾ TALLADA, *Política económica en los tiempos de crisis*, páginas 73-74.

⁽²⁶⁾ Ídem, página 74.

⁽²⁷⁾ *Heraldo de Madrid*, 18 de marzo de 1936.

secuencias políticas o de orden público a que puede dar lugar. Sirvan de ejemplo la ponencia mixta nombrada al efecto en noviembre de 1931 con representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía y Fomento ⁽²⁸⁾, la Orden-Circular del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, de 2 de febrero de 1934; y, recientemente, el Decreto de 26 de enero y la Orden Ministerial de 5 de abril de 1944.

Aunque también con finalidades, a menudo, más políticas que sociales, se ha ordenado, en algunos casos, la readmisión de obreros despedidos. Sirva de ejemplo el tan discutido Decreto de 29 de febrero de 1936, que dispuso la de los huelguistas de octubre de 1934, despedidos y reemplazados en sus cargos con autorización — y hasta conminación — del Gobierno, que había declarado ilegal la huelga.

Las “invitaciones” dirigidas a las empresas, por parte de los Poderes públicos, para que aumenten el número de sus asalariados, constituyen con frecuencia una intervención del tipo de las que venimos estudiando, por la coacción — al menos moral — que dicha invitación involucra.

Las primeras disposiciones de este carácter tomadas en Alemania, por el Decreto-Ley de 4 de septiembre de 1932 y el Decreto del día siguiente, se reducen a un estímulo, ya que en virtud de la primera se concedió a las empresas cierta bonificación sobre los impuestos a satisfacer, por cada obrero que ocuparen a partir de 1.º de octubre sobre el total de los ocupados en julio y agosto. Por el segundo, se autorizaba a los que tomasen nuevos obreros a su servicio para reducirles, hasta en un 50 por 100, la tasa horaria en las diez horas semanales de trabajo que excediesen de las treinta primeras.

Más radicales fueron las disposiciones tomadas al poco tiempo en Pomerania, donde se puso en práctica “con éxito absoluto en diversos puntos”, otro medio para terminar con el paro obrero, a base de “ordenar a los Directores de fáabri-

(28) *La Veu de Catalunya*, 14 de noviembre de 1931.

cas, comercios, etc., que diesen trabajo a sus compatriotas en paro forzoso, por interés del Estado nacional" ⁽²⁹⁾. Y en Milán, donde por disposición del Jefe de Policía, todas las fábricas con más de 40 obreros y los Bancos con más de 15 empleados, habían de dar trabajo, como mínimo, a un veterano de guerra ⁽³⁰⁾.

La misma medida ha sido tomada en Barcelona, primero, en reducida escala, por invitación del Gobernador Civil, y luego, con mayor amplitud, de acuerdo con unas bases preparadas por la C. N. S. ⁽³¹⁾, que obligaban a cada empresa a tomar, con arreglo a la cuantía de su personal ocupado, un cierto número de parados inscritos en la Oficina de Colocación del Sindicato correspondiente.

Remedios indirectos

ESTÍMULOS A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA INDUSTRIA PRIVADA. — Nos hemos ocupado ya de este remedio indirecto, al tratar, en las obras públicas, de la Ley de 25 de junio de 1935; y volveremos sobre el mismo al referirnos, en el capítulo siguiente, aunque sea desde otro punto de vista, a la protección industrial.

La teoría del multiplicador, estudiada en un principio por KAHN ⁽³²⁾, se refiere precisamente a la ocupación total a que da lugar una ocupación primaria, y aun una primaria directa, o sea al factor por que ha de multiplicarse el número de obreros ocupados directamente en la ejecución de una obra pública para tener el total de aquéllos que directa e indirectamente encontrarán trabajo a consecuencia de la misma.

REDUCCIÓN DE JORNADA. — Uno de los remedios preco-

⁽²⁹⁾ GARRIGA, *La Veu de Catalunya*, 6 de agosto de 1933.

⁽³⁰⁾ *El Noticiero Universal*, 5 de enero de 1946.

⁽³¹⁾ *Diario de Barcelona*, 26 y 29 de noviembre de 1941.

⁽³²⁾ *The relation of home investment to unemployment. Economic Journal*, año 1931, páginas 173 a 179.

nizados contra el paro forzoso que más discusiones ha provocado ha sido, indudablemente, la reducción de la jornada o la semana de trabajo. En la segunda parte de este ensayo resumiremos las principales razones esgrimidas en pro y en contra de la reforma; pero en esta primera, puramente expositiva, hemos de referirnos a las disposiciones dictadas al efecto en varios países (Estados Unidos, Checoslovaquia, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Dantzig, Luxemburgo, etc.) con carácter general o para industrias o actividades determinadas.

Prescindiendo de las iniciativas privadas en este sentido — conducentes a la semana de cinco días o de cuarenta o cuarenta y cuatro horas — y del llamado *short time*, y concretándonos a la acción legislativa, o sea al intervencionismo de que nos venimos ocupando, “las medidas legislativas susceptibles de ser tomadas en vista de una reducción de la duración de trabajo para acrecentar las posibilidades de empleo, pueden fundarse sobre métodos muy diferentes desde la más extrema rigidez a la mayor flexibilidad”.

Dichas disposiciones “pueden afectar uniformemente a toda la industria, circunscribirse a industrias particulares o grupos de industrias, ser temporales o permanentes, establecer una reglamentación estricta o ser muy liberales en las modalidades de aplicación, proceder por obligación directa o dar solamente fuerza de ley a los acuerdos libremente concluidos por las partes interesadas, etc.” ⁽³³⁾.

La Conferencia Internacional del Trabajo se ocupó del asunto en varias de sus Asambleas, a petición de JOUHAUX, delegado obrero francés, primero y de MICHELIS, delegado gubernamental italiano, más tarde, recomendando, en junio de 1935, la adopción de la semana de cuarenta horas para combatir el paro.

En España, en 30 de mayo de 1934, se implantó la semana

(33) B. I. T., *Durée de travail et chômage*, página 80.

de cuarenta y cuatro horas en la industria metalúrgica, disposición derogada por Orden Ministerial de 29 de noviembre del propio año, que restableció la de cuarenta y ocho; y la misma semana reducida se aplicó a la construcción y al trabajo de oficina.

Más tarde, por Decreto de 7 de julio de 1936, se convocó una Conferencia nacional para estudiar la reducción de la jornada de trabajo, que no llegó a reunirse, debido a las circunstancias; pero se fijó en cuarenta horas semanales el trabajo en los establecimientos industriales de Cataluña (zona roja), por Decreto de 24 de julio, derogado en 19 de febrero de 1938.

SUSPENSIÓN DE PROGRESOS TÉCNICOS. — La prohibición de la puesta en práctica de los progresos técnicos, por disposiciones legales o administrativas, ha sido practicada, principalmente por instigación de las organizaciones obreras, en épocas de expansión del maquinismo, pero ya antes, ISABEL DE INGLATERRA — según dice GINA LOMBROSO ⁽³⁴⁾ — “negó autorización a la corporación de fabricantes de paños para adaptar una máquina para batanear los paños, inventada por un veneciano, pretextando que la adopción de esa máquina acarrearía la miseria para muchos obreros”.

El “odio a las máquinas” por parte de los obreros que se creían perjudicados con su empleo, tuvo su principal expansión en los últimos años del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Ofrece interés, desde el punto de vista que nos ocupa, la revuelta llamada de las selfactinas — por ir dirigida principalmente contra estas máquinas — iniciada en Barcelona el 16 de julio de 1854; ya que, consecuencia de ella fué un Bando del Capitán General, RAMÓN DE LA ROCHA, en virtud del cual fueron aquéllas prohibidas, pretendiéndose que se las transformase en *mule Jenny*, aunque gestiones llevadas a cabo por los fabricantes y, de un modo especial, un artículo de LAUREANO FIGUEROLA, publicado el 25 de agosto en el Diario de

(34) *La tragedia del progreso*, página 89.

Barcelona, dieron por resultado el que dicha medida quedase sin efecto ⁽³⁵⁾.

Ochenta años más tarde, y concretamente por Orden Ministerial de 10 de junio de 1935, se autorizó a los Delegados de Trabajo para señalar la proporción que habrá de reservarse al empleo o uso de las máquinas agrícolas, advirtiendo que, en la recolección, "en ningún caso el empleo de máquinas podrá absorber más del 50 por 100 del trabajo total". De las discusiones a que dió lugar esta disposición nos ocuparemos en la segunda parte de este ensayo.

POLÍTICA MIGRATORIA. — Así como los países que disponen de poca mano de obra procuran facilitar la inmigración y, de un modo especial, la de los individuos que mejor pueden contribuir a explotar las riquezas naturales o a desarrollar las actividades indispensables para su progreso económico, aquéllos que temen la competencia del personal extranjero, impiden o dificultan dicha inmigración y ponen trabas — no siempre por motivos políticos — a que la mano de obra, o los técnicos o profesionales extranjeros ocupen cargos retribuidos mientras se hallen nacionales en paro.

A ello obedecen, quizá con mayor grado — repetimos — que consideraciones políticas o de orden público, gran número de disposiciones, tales como el Decreto de 29 de agosto de 1935 que crea para los mismos la Tarjeta de Identidad Profesional a expedir por el Ministerio de Trabajo, y la Circular de 12 de junio de 1940, de la Dirección General de Seguridad.

Carácter especial reviste la migración por el interior del país, principalmente en los núcleos industriales que se ven invadidos por numerosos individuos de otras regiones que vienen en busca de un trabajo que no siempre encuentran. Por lo que se refiere a Cataluña, y particularmente a Barcelona, fué el problema estudiado en 1934 por VANDELLÓS ⁽³⁶⁾ en un volumen premiado en los Concursos Patxot.

⁽³⁵⁾ GRAELL, *Historia del Fomento del Trabajo Nacional*, p. 236 y sigs.

⁽³⁶⁾ *La immigració a Catalunya*.

En estos últimos años, ha sido abordado por las Autoridades, no sólo mediante la necesidad de salvoconductos para viajar, previa justificación del motivo del viaje — medida más bien de orden público, — sino, de un modo concreto, en las Circulares de 11 de septiembre de 1939 y 5 de diciembre de 1941.

REEDUCACIÓN PROFESIONAL. — La reeducación profesional es, finalmente, otro medio indirecto de evitar o combatir el paro mediante una racionalización del paso de una profesión que está en decadencia a otra que ofrece perspectivas de auge, por parte del personal desplazado de la primera.

A ello se refirió MADARIAGA, en una conferencia pronunciada en 1934 en Zaragoza ⁽³⁷⁾, afirmando que la acción del Estado contra el paro forzoso debería dirigirse principalmente a encauzar esta compensación natural por medio de una acertada acción conjunta del servicio de colocación obrera con las instituciones de formación, selección, orientación y reeducación profesionales.

III. EVITAR EL PÁNICO O COMBATIR SUS EFECTOS

CIERRE DE BOLSAS. — Aunque las disposiciones de este grupo podrían, quizá, clasificarse como de carácter económico o financiero, es indudable que su observancia conduce a una finalidad social en defensa del ahorro y la economía del país.

El cierre de Bolsas, concretamente, se propone evitar que las cotizaciones sufran descensos exagerados sin justificación económica ni financiera y sólo por influencias psicológicas, pero susceptibles de ocasionar cuantiosas pérdidas efectivas a los poseedores de los valores afectados.

Refiriéndose a la iniciación de la primera guerra europea,

(37) *Revista de Organización Científica*, diciembre de 1934, página 321.

a últimos de julio de 1914, dice MASSÓ ⁽³⁸⁾ que, asesinado en 28 de junio el archiduque de Austria, en las dos semanas siguientes “las cotizaciones de los valores en Viena descendieron de un 10 a un 20 por 100”, que el ultimátum de Austria-Hungría a Servia “dió origen a una fuerte baja de valores en Viena, que se extendió a Berlín y a París”, ya que “el pánico bursátil se inició simultáneamente en Francia y en Alemania, y cuando Rusia anunció en 25 de julio que protegería a Servia, se generalizó, vendiéndose grandes sumas de valores por cuenta de extranjeros en el mercado de Nueva York”.

Ante la perspectiva de un pánico casi universal, los Gobiernos se vieron obligados a cerrar las Bolsas y a suspender las operaciones, en evitación de mayores males. El 27 de julio cerraron las de Viena, Budapest, Bruselas y Amberes; el 28 las de Montreal, Toronto y Madrid, el 29 las de Berlín y San Petersburgo; el 30 la de París y las de todos los países sudamericanos; el 31, las de Londres y Nueva York.

MORATORIAS. — Las moratorias, que consisten esencialmente en aplazar el vencimiento de determinadas obligaciones de pago, aunque hayan podido perjudicar a los acreedores, han sido práctica frecuente en circunstancias excepcionales en beneficio de deudores transitoriamente insolventes y cuya suspensión de pagos hubiera arrastrado a otros industriales y comerciantes y hasta a entidades bancarias.

De ellas se hizo amplia aplicación en el curso de la citada guerra, así como en la civil española de 1936-39, tanto en uno como en otro bando, terminando en la Ley conocida por la del desbloqueo, de 7 de diciembre de 1939, con las disposiciones preliminares y complementarias de la misma.

CIRCULACIÓN OBLIGATORIA DEL BILETE. — El retirar de la circulación la moneda metálica puede ser debido a motivos de diversa índole, más o menos relacionados con la teoría no-

⁽³⁸⁾ *La guerra europea (1914-1918) en sus aspectos financiero y económico*, página 5.

minalista del dinero; pero en las épocas de pánico a que en estos apartados nos referimos, el atesorar oro o plata ante el temor de una baja en el valor adquisitivo de la moneda, o sea de un aumento en el de las mercancías, puede agravar el problema.

Es por este motivo que, en las circunstancias expresadas, se prohíbe el atesoramiento, incluso de billetes, se exhíme el Banco emisor de la obligación de entregar moneda metálica a cambio de estos últimos, y hasta se obliga a los particulares a que depositen el oro o plata amonedados o en lingote que tengan en su poder.

IV. LIMITAR EL LUCRO

IMPUESTOS PROGRESIVOS. — Aunque de los impuestos nos ocupemos al tratar, en el capítulo III, de cómo aumentar los ingresos estatales, el carácter progresivo de sus tarifas tiene una finalidad tanto financiera como social, en cuanto tiende a reducir las cifras máximas del ingreso tanto por beneficios industriales o actividades profesionales (rentas ganadas), como por rendimiento de capitales o por herencias (rentas no ganadas).

Dejando para el lugar correspondiente, el estudio de sus ventajas e inconvenientes, nos concretaremos aquí a indicar que los impuestos progresivos afectan a las contribuciones de utilidades y renta, a las herencias y, de un modo especial, a los llamados beneficios extraordinarios o de guerra. En todos estos casos se tiende a retardar el proceso de las capitalizaciones; reduciendo, en consecuencia, a costa de las cifras superiores, las diferencias en el reparto de la riqueza.

RESERVAS OBLIGATORIAS. — La política de previsión, que caracteriza a los seguros sociales, se ha manifestado también en favor de las empresas al favorecer — y hasta ordenar en algunos casos — la constitución de reservas.

La cosa es de tiempo conocida por lo que afecta a las entidades bancarias y cajas de ahorros, así como a las compañías y mutualidades de seguros; pero en España se ha extendido a todas las sociedades sujetas a la Tarifa 3.^a de utilidades, en virtud de las Leyes de 19 de septiembre de 1942 y 6 de febrero de 1943 y Orden Ministerial de 17 de abril de este último año.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS ECONÓMICOS

Los principales objetivos de finalidad económica que se propone la intervención estatal, se refieren a la protección de las industrias nacionales, ya impidiendo o dificultando la competencia extranjera (aduanas, contingentes), ya impulsando el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes, ya garantizándoles el consumo de sus productos, ya protegiendo la propiedad industrial.

Con referencia, también, a los establecimientos industriales, constituyen asimismo intervenciones del tipo que ahora nos ocupa, la reducción o regulación de la competencia — mediante acuerdos obligatorios, autorización previa o concesión de monopolios — y las que tienden a incrementar el rendimiento industrial, tales como la creación y sostenimiento de laboratorios y centros de estudio y especialización, el impulso dado a la organización científica y a las concentraciones, y el cumplimiento obligatorio de prescripciones y normas, debidamente estudiadas.

Finalmente, hemos de ocuparnos del fomento del ahorro — por simples campañas de propaganda, mediante seguros obligatorios y limitando los gastos superfluos — y de la capitalización dirigida, mediante disposiciones que se encuentran en la confluencia de lo económico y lo social.

Las principales intervenciones estatales de carácter económico vienen, pues, resumidas en el siguiente cuadro:

Proteger la producción nacional.	Dificultando la competencia extranjera.	- Aduanas. - Contingentes.
	Impulsando el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes.	- Préstamos. - Garantías de interés. - Subvenciones y primas. - Exenciones de impuestos.
	Garantizando el consumo de los productos nacionales.	- Preferencias en el suministro. - Pedidos en firme.
	Protegiendo la propiedad industrial.	- Patentes. - Marcas. - Modelos. - Rótulos.
Reducir o regular la competencia.	Estableciendo códigos o acuerdos obligatorios.	
	Declarando preciso el permiso previo para nuevas industrias o ampliaciones.	
Incrementar el rendimiento industrial.	Concediendo monopolios.	
	Mediante laboratorios y centros de estudio y especialización.	
	Favoreciendo la organización científica y las concentraciones.	
Dirigir las capitalizaciones.	Obligando al cumplimiento de prescripciones y normas.	
	Fomentando el ahorro.	
	Limitando los gastos superfluos.	
	Estableciendo autorización previa para las inversiones.	

I. PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Dificultar la competencia extranjera

ADUANAS. — Aunque sean del pasado siglo las clásicas discusiones entre librecambio y proteccionismo, el impuesto de

aduanas, ya en la Edad Media se proponía no sólo un objetivo fiscal, sino, principalmente, proteger la industria del país contra la competencia extranjera, encareciendo las importaciones de determinados productos en la medida necesaria para compensar el mayor precio de coste que pudieran ofrecer los de fabricación nacional.

Pero — como dice MANOÏLESCO ⁽¹⁾, refutando a SUMNER — “no es el beneficio de un patrono lo que garantiza la protección, es la existencia de las empresas que, por su actividad, elevan la productividad y el bienestar del país”; y, por ello — siguiendo el consejo de LIST ⁽²⁾ — “la legislación aduanera tiene que acompañar siempre a la evolución de la industria nacional si quiere cumplir su cometido”.

En otras palabras, como dijo AGELL en el II Congreso Nacional de las Industrias de la Pintura y Afines ⁽³⁾, ha de partirse del principio de “no proteger ningún producto a favor de ningún industrial, sino que ha de protegerse el producto, aunque quede encarecido, siempre que esta protección tenga por consecuencia la mejora del trabajo dentro de aquella industria; y no debe olvidarse, tampoco, que los derechos a satisfacer por los diversos artículos han de estar debidamente ponderados para evitar lo que el mismo conferenciante califica de “aberraciones arancelarias”, cuando se protegen las primeras materias en proporción mayor a la que exige la del producto elaborado.

No nos extenderemos en la exposición de estos asuntos, ni en la historia de la política aduanera en los diversos países a través de las épocas sucesivas, pues ello ha sido magistralmente tratado en obras especializadas por plumas mucho más competentes que la nuestra ⁽⁴⁾. Recordemos tan sólo el lema

(1) *Teoría del Proteccionismo y del Comercio internacional*, página 186.

(2) *Sistema Nacional de Economía Política*, página 281.

(3) *La Veu de Catalunya*, 6 de julio de 1932.

(4) Véanse, por ejemplo, entre otras obras, *Cómo triunfó el proteccionismo en España*, de PUGÉS, y *Política arancelaria nacional*, de IRURZUN y RUBIO.

que puso ILLAS y VIDAL en una de sus Memorias: "El libre-cambio corresponde a condiciones asimiladas y el proteccionismo a condiciones diferentes" ⁽⁵⁾, y veremos confirmado este pensamiento en el hecho que todos los países, uno tras otro, hayan ido implantando el proteccionismo e incrementado las que han estimado medidas protectoras.

Pero aunque no nos ocupemos en detalle de los sistemas arancelarios, hemos de recordar el pago en oro, la presencia de dos columnas en el arancel, las autorizaciones para negociar tratados de comercio por debajo de la segunda columna, la cláusula de nación más favorecida, y, por último, la legislación *antidumping* con los recargos por moneda depreciada.

CONTINGENTES. — Como dicen IRURZUN y RUBIO ⁽⁶⁾, "hoy día el arancel no es la única defensa. Multitud de derechos distintos a los específicamente arancelarios, apoyan la labor de las tarifas de aduanas; reconocimientos sanitarios, fitopatológicos y en general toda clase de trabas administrativas contribuyen a elevar las barreras; los contingentes o cupos de importación y exportación son obstáculos infranqueables, salvo para determinado número de mercancías y, por último, las disposiciones referentes a divisas completan este gran cuadro de medidas restrictivas, en el que la política arancelaria interfiere el campo de la política monetaria y se adentra en el correspondiente a las políticas de intervención estatal en todos los ramos de la economía".

Dejando para más adelante la política monetaria y el intervencionismo que llamaremos de fines políticos, nos concretaremos, en este apartado, a los contingentes que, "mientras los aranceles de aduanas se proponen proteger la producción y la industria nacionales reduciendo las importaciones", ellos "las mantienen o pueden mantenerlas normales, pero desplazándolas hacia los países que compren más al que los establece, y esto con objeto de proteger al comercio de exporta-

⁽⁵⁾ PUGÉS, I. c., página 28.

⁽⁶⁾ IRURZUN y RUBIO, I. c., página 20.

ción ⁽⁷⁾; finalidad esta última que, por lo demás, ni en España ⁽⁸⁾ ni en Francia ⁽⁹⁾, de donde proceden, fueron capaces de conseguir.

Fué, en efecto, en Francia donde, en 1931, se inició la política de contingentes, siguiéndole de poco España, cuyo primer Decreto acerca de la materia lleva fecha 23 de diciembre del propio año, aunque no volvió a tratarse del asunto hasta que aparecieron los de 16 de noviembre y 26 de diciembre de 1933, el de 21 de noviembre de 1934 y el de 26 de febrero de 1935. Más tarde, por Decreto de 30 de noviembre de 1936 se dispuso la necesidad de las licencias de importación, de las que nos ocuparemos en el capítulo próximo por ser de política monetaria su finalidad.

Impulso a las nuevas industrias

La protección a las industrias nuevas, insuficientes o de exportación, con independencia de la legislación aduanera y, para las últimas, de las primas, admisiones temporales, zonas francas, etc., se realiza, en general, a base del impulso que indirectamente pueda tener su origen en la concesión de auxilios, exenciones tributarias o aduaneras, subvenciones, préstamos, garantía de interés, beneficio de expropiación forzosa, etc., a cambio de ciertos requisitos o intervenciones estatales.

Sirvan de ejemplo, entre otras muchas disposiciones, las leyes de protección industrial de 2 de marzo de 1917 y de industrias de interés nacional de 24 de octubre de 1939, prorrogada y ampliada la primera por R. D. de 30 de abril y Real Orden de 24 de mayo de 1924, y completada la última por Decreto de 10 de febrero de 1940; la de ferrocarriles secundarios y estratégicos de 26 de marzo de 1908, reformada en 23 de febrero de 1912, con su Reglamento de 12 de agosto

(7) SOLÁ CAÑIZARES, *Després*, 20 de abril de 1935.

(8) Ídem, *La Veu de Catalunya*, 28 de junio de 1935.

(9) TALLADA, *Després*, 4 de septiembre de 1935.

del propio año; la de ferrocarriles complementarios de 25 de diciembre de 1912; la de protección a la industria sedera de 4 de marzo de 1925, reformada en 11 de octubre de 1926; el proyecto de ley de protección a la industria nacional de construcción naval y a la navegación, de 20 de abril de 1921, y los Decretos-leyes de 11 de febrero de 1924, 21 de agosto de 1925 y 16 de abril de 1926; la protección a la industria del motor y del automóvil establecida por Reales Decretos de 9 de abril de 1927 y 31 de marzo de 1928, con su Reglamento de 16 de septiembre de 1927 y, más tarde, por Decretos de 3 de julio de 1931 y 10 de febrero de 1940; la ley de obras contra el paro involuntario de 25 de junio de 1935, la de viviendas protegidas de 19 de abril de 1939; la de trolebuses de 5 de octubre de 1940, con su Reglamento de 4 de diciembre de 1944, etc.

Muy discutido ha sido el éxito de las mentadas disposiciones, aun prescindiendo del hecho que raras veces en el preámbulo de una ley nueva se deja de hacer constar el fracaso de aquella que viene a reemplazar. Pero, aun reconociendo sus defectos, no puede negarse que al amparo de la ley de 1917 y R. D. de 1924, se han creado y ampliado numerosas industrias, que han sido construídos varios kilómetros de ferrocarril de acuerdo con las leyes de los secundarios, y que son en gran número los edificios urbanos acogidos a la ley contra el paro; y a la vista están las industrias de interés nacional y las viviendas protegidas que deben su existencia a las nuevas leyes de 1939 y 1940.

Estos estímulos en forma de préstamos, subvenciones, primas, garantías de interés, exenciones tributarias, etc., no se concretan siempre a una simple invitación, pues en ciertos casos, por dirigirse a una rama industrial determinada, envuelven más o menos tácitamente una coacción, cuando no una amenaza para el caso de no ser aquélla atendida.

Éste fué, hasta cierto punto y entre otros varios, el caso de la inscripción voluntaria de Bancos y banqueros en la Co-

misaría de Ordenación de la Banca privada, creada por Ley de 29 de diciembre de 1921; y, con mayor motivo, el de la aceptación, también voluntaria, por parte de las empresas ferroviarias, del régimen de consorcio, instaurado en virtud del Estatuto de 12 de julio de 1924.

En virtud de la primera, la Banca inscrita había de gozar de privilegios tales como Cámara de Compensación, bonificación de descuentos en ciertas operaciones con el Banco de España, exención de timbre en documentos compensados, etc.; y por ello, la casi totalidad de los Bancos y banqueros españoles solicitaron su inscripción en la Comisaría, aceptando al efecto las normas dictadas por el Consejo Superior Bancario acerca de capital mínimo, relación entre el mismo y el volumen de cuentas corrientes, interés máximo, proporcionalidad entre el activo realizable y las obligaciones exigibles y otras disposiciones para proteger los intereses del público sin menoscabo de la agilidad bancaria y del carácter peculiar del trabajo en cada Banco.

En la segunda de las dos citadas leyes no se trataba ya, tan sólo, como en la primera, de poner de manifiesto las ventajas a conseguir con la inscripción, y que colocaban a la Banca inscrita en mejores condiciones de competir con la no inscrita; sino que el hecho de la aportación económica, por parte del Estado, a las empresas acogidas al régimen de consorcio y, principalmente, la suspensión de los anticipos para pago al personal de las que no se acogieran al mismo, representaba una fuerte coacción, que llegaba a la amenaza, para conseguir adhesiones.

Lo mismo puede decirse de la inscripción, aunque no sea obligatoria, en consorcios o entidades reguladoras de carácter oficial. En el Consorcio del Plomo, por ejemplo, creado por Real Decreto de 9 de marzo y Rs. Os. de 30 de marzo y 20 de abril de 1928, se reservan los fundidores y elaboradores inscritos, la exclusiva de venta del plomo en barras y elaborado (planchas, tubos y perdigones) para el mercado nacional; y al

Sindicato de Fabricantes Resineros concedió el R. D. de 13 de septiembre de 1928, la exclusiva de la explotación de resinas en los montes públicos.

Garantía de consumo

Entre las ventajas concedidas a la industria nacional, la garantía en el consumo de sus productos no es la menos interesante, ya que las probabilidades de venta son premisa esencial para lanzarse a la fabricación.

Ya la Ley de 14 de febrero de 1907 declaró obligatorio en determinadas circunstancias — de precio, calidad y plazo de entrega — el consumo de productos nacionales por parte de organismos oficiales y entidades subvencionadas; y se ordenó la publicación periódica, debidamente motivada, de la relación de aquellos artículos para cuya adquisición se conceptuase necesaria la concurrencia extranjera por no fabricarse en el país — en absoluto o en la calidad requerida — por la urgencia del suministro, por resultar a precio mucho más elevado, etc.

Gran número de protestas fueron cursadas, por parte de los industriales interesados y sus asociaciones representativas, ante el frecuente incumplimiento de la disposición expresada; y, partiendo de otro criterio, por Orden de 6 de noviembre de 1937, la Presidencia de la Junta Técnica del Estado creó — en substitución de las relaciones de carácter negativo — el Catálogo Oficial de la Producción Industrial Española, del que debe publicarse una edición cada cinco años, con la descripción amplia y detallada de todas aquellas industrias a las que se haya otorgado el Certificado de Productor Nacional, creado por R. O. de 14 de septiembre de 1926, cuya petición se tramita en las Delegaciones de Industria.

Además, y con independencia de las disposiciones generales, las industrias declaradas de interés nacional pueden disfrutar “en casos en que la naturaleza del producto o la modalidad de la industria así lo aconsejase” de “la imposición al

consumo nacional de una cantidad mínima del producto a un precio determinado" ⁽¹⁰⁾.

Protección a la propiedad industrial

La propiedad industrial empezó a ser reconocida a últimos del siglo XVIII, y concretamente, en España, en 1776, si bien no aparece ampliamente regulada hasta el R. D. de 27 de marzo de 1826.

En 20 de marzo de 1883 se firmó en París el Convenio de la Unión Internacional, entre veinte países, el cual, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900 y en Wáshington el 2 de junio de 1911, fué substituído por el de La Haya de 6 de noviembre de 1925 — ratificado por España el 1.º de mayo de 1928 — entre 32 países. En la misma fecha se firmaron acuerdos internacionales acerca de represión de falsas indicaciones de procedencia, registro de marcas y depósito de dibujos y modelos industriales.

La vigente legislación española, texto refundido de 30 de abril de 1930 y disposiciones posteriores — entre ellas el Decreto de 3 de febrero de 1945 que declara obligatorio el registro de todas las marcas destinadas a distinguir un producto, cualquiera que sea su clase y naturaleza — se refiere a patentes, marcas, modelos de utilidad, nombres comerciales, rótulos de establecimientos y películas cinematográficas.

II. REGULACIÓN DE COMPETENCIA

Acuerdos obligatorios

Un paso más en la intervención estatal lo constituye la obligatoriedad de respetar los acuerdos entre productores para regular determinadas industrias. Tales son, como ejemplo

(10) Artículo 8.º de la Ley de 24 de octubre de 1939.

más divulgado, los Códigos de la N. R. A. a que precedentemente nos hemos referido y cuya trascendencia no es menos económica que social.

En el mismo apartado nos hemos ocupado ya brevemente de lo que podríamos llamar repercusiones de esta modalidad de la política rooseveltiana en Inglaterra, Francia y Bélgica; y podríamos añadir todavía los consorcios obligatorios cuya instauración ha sido autorizada en diferentes países y llevada luego a la práctica para solucionar, en casos concretos, dificultades o crisis de la industria afectada.

Sirvan de ejemplo: en Italia ⁽¹²⁾ el del azufre de Sicilia (1906), el del mármol de Carrara (1927) y el siderúrgico (voluntario en 1929 y obligatorio en 1931); en Portugal, el de conservas de sardina (1932), el de los Vinicultores del Duero y los demás creados al amparo del Decreto-Ley de 3 de diciembre de 1934; en Alemania, los que deben su origen a la Ley de 15 de julio de 1933 o a la Ordenanza de 4 de septiembre de 1939.

Por lo que afecta a España, nos hemos referido ya al del plomo y al de la resina; y, en octubre de 1935, dió lugar a grandes discusiones la conveniencia de ampliar a toda la industria textil algodonera la regulación del ramo de calcetería, a base de la obligatoria inscripción en el correspondiente Sindicato de todos los fabricantes de la sección *Cotton*, ordenada en agosto del propio año.

Autorización previa para nuevas industrias

La adaptación de la producción al consumo, principal fin que se proponen los consorcios o acuerdos a que acabamos de referirnos, puede mover al Estado a declarar obligatoria la previa autorización administrativa para la puesta en marcha de determinadas industrias.

Por R. O. de 4 de noviembre de 1926, fué creado el Co-

(12) Viro, *Las Uniones de Empresas en la Economía fascista*, pág. 199.

mité Regulador de la Producción Industrial, sin cuya autorización — se lee en el art. 2.º — “no se podrá constituir Sociedad o negocio industrial alguno, ni ampliar o trasladar sus instalaciones los ya existentes”. Esta limitación, sin embargo, fué ya atenuada en el Reglamento de 3 de diciembre del propio año, que clasificó las industrias en tres grupos: libres, sometidas al régimen de previa autorización y libres de momento, sin perjuicio de poder ser incluídas entre las segundas por acuerdo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Comité. Y desapareció prácticamente, casi en absoluto, en años sucesivos.

Aunque quizá con finalidades más políticas que económicas y a fin de subordinar “el conjunto del proceso económico nacional en toda la inmensa variedad de sus factores, a los propósitos políticos y espirituales del Estado”, con palabras de AREILZA ⁽¹³⁾, “por Decreto de 20 de agosto de 1938 y Orden complementaria de 17 de noviembre de igual año, se sometieron a la previa y expresa autorización del Ministerio de Industria y Comercio, tanto la implantación en territorio español de las industrias de nueva planta, como la ampliación o transformación de las ya existentes” ⁽¹⁴⁾. Finalmente, con objeto de “simplificar y acortar trámites de concesión en términos que eviten retrasos injustificados, acelerando todo lo posible el despacho de los expedientes, sin mengua de las garantías para resolver con acierto” ⁽¹⁵⁾, fueron dictados el Decreto de 8 de septiembre de 1939 y la Orden complementaria del día 12 del propio mes y año.

Prescindiendo, por ahora, del aspecto político de la cuestión y concretándonos al económico de limitación de concurrencia, haremos notar que son frecuentes resoluciones denegatorias fundamentadas, por ejemplo, en “que los elementos de tisaje actualmente establecidos son en número más que suficiente

⁽¹³⁾ *La Vanguardia Española*, 2 de febrero de 1939.

⁽¹⁴⁾ Preámbulo al Decreto de 8 de septiembre de 1939.

⁽¹⁵⁾ Ídem.

para el abastecimiento normal de nuestro mercado nacional” (16) y aun en “que la capacidad de producción de las fábricas instaladas en la comarca es suficiente para las necesidades de la misma” (17).

Monopolios

El monopolio de hecho que, en virtud de las limitaciones a que acabamos de referirnos, se establece en favor de las empresas existentes, puede convertirse en de derecho, aunque con finalidades más bien financieras o políticas que económicas.

Sin perjuicio, por tanto, de volver sobre ellos más adelante, haremos notar en este apartado que los monopolios y la nacionalización de determinadas actividades — tanto en el sentido de eliminar la participación extranjera, como en el de socialización o estatificación — representan un obstáculo al desarrollo de la iniciativa individual y comportan, al ser instaurados, la desaparición, la absorción o, al menos, cambios de estructura, en las empresas afectadas.

III. INCREMENTO DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL

Centros de estudio e investigación

El incremento en el rendimiento de las industrias ha sido favorecido, a menudo, por el Estado o por organismos oficiales mediante elevar el nivel de cultura técnica con la creación y sostenimiento de la enseñanza profesional en sus diversos grados, desde las Escuelas de Trabajo a las de Ingenieros, y con los laboratorios, seminarios y centros de estudio e investigación.

(16) *Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona*, 3 de abril de 1945.

(17) *Boletín Oficial del Estado*, 7 de abril de 1942.

Mención especial merecen, en este último aspecto, el Instituto Nacional de Industria ⁽¹⁸⁾ y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ⁽¹⁹⁾, con sus diversos Patronatos e Institutos Nacionales, entre ellos el de Investigaciones Técnicas, en íntima relación con el Laboratorio General de Ensayos y Análisis de la Diputación de Barcelona.

Organización científica

Así como, en el capítulo precedente, hemos visto que el intervencionismo estatal puede proponerse retrasar el ritmo de los progresos técnicos y de la organización científica del trabajo, puede, en otras circunstancias, tender a su desarrollo, “actuando en cada momento — con palabras de ABOLLA-DO ⁽²⁰⁾ — según las especiales características del mismo”, ya que los regímenes totalitarios — donde es mayor dicho intervencionismo — se caracterizan por “desechar toda posible norma programática”.

Prescindiendo de los casos en que, en el curso de las dos guerras mundiales, los Estados beligerantes han actuado de empresario, en las fábricas militarizadas, en el período de mayor auge de las teorías racionalizadoras, o sea en la tercera década del presente siglo, la organización científica del trabajo, o mejor, su estudio y propaganda ha sido centralizada en la mayoría de los países, en Institutos o Comités nacionales, intervenidos a menudo por organismos oficiales.

Ejemplo el más característico es el *Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit* (R. K. W.), fundado en 1921 por Siemens y otros industriales alemanes, con objeto de “favorecer, en todos los dominios de la economía, a la racionalización, considerada como la interpretación y aplicación de todos los medios ofrecidos por la técnica y la organización metódica para

⁽¹⁸⁾ Ley de 25 de septiembre de 1941 y Reglamento de 22 de enero de 1942.

⁽¹⁹⁾ Ley de 24 de noviembre de 1939.

⁽²⁰⁾ *El Español*, 13 de enero de 1943.

elevar el rendimiento económico" ⁽²¹⁾. El R. K. W., Instituto de Economía del Reich, estaba en íntima relación con los organismos oficiales y disfrutaba de subvención del Gobierno para atender los desembolsos a que dan lugar sus actuaciones.

En lo que se refiere a las concentraciones industriales, nos hemos referido ya a los consorcios obligatorios, pero estimamos de interés recordar que también en España se ha favorecido su práctica, a partir del R. D. de 31 de julio de 1915 — firmado por BUGALLAL, a la sazón ministro de Hacienda, — en el que se define lo que debe entenderse por Sindicatos industriales y mercantiles.

Más tarde, en 30 de noviembre del mismo año, fué autorizado el propio Ministro para presentar a las Cortes un proyecto de ley, leído en el Congreso el 2 de diciembre, sobre exenciones tributarias a los Sindicatos referidos y a sus Federaciones, mientras su principal objeto fuese afianzar, mediante la cooperación entre los asociados y la mutua responsabilidad entre los mismos, el crédito de cada uno de ellos, avalando al efecto documentos y admitiendo endosos para facilitar su descuento en Banca, acreditando y garantizando los depósitos de productos y mercancías que constituyan, y concederles préstamos.

No habiéndose aprobado — por clausura de las Cortes — el anterior proyecto, fueron autorizados más tarde, en 2 de mayo de 1918 y 13 de noviembre de 1919, las presentaciones de otros dos, substancialmente iguales al primero y sin mejor suerte que aquél. La idea, sin embargo, ha sido llevada a la práctica en el apartado *m*) del artículo 4.º de la Ley de 24 de noviembre de 1939, donde se lee que "se fomentará la fusión o asociación de las empresas industriales, si así conviniera al interés nacional". Y nos hemos referido ya a la Ley de 11 de julio de 1941, que afecta a las concentraciones bancarias.

⁽²¹⁾ *Bulletin de l'Institut International de l'Organisation Scientifique du Travail*, enero de 1933, páginas 1 a 4.

Prescripciones y normas

Las ideas normalizadoras, así como las prescripciones para el empleo de determinados materiales, para ensayos de recepción, etc., han surgido, en general, como consecuencia de la iniciativa privada en los estudios correspondientes; pero siempre han contado con la eficaz colaboración de centros y corporaciones oficiales o semioficiales, aparte del hecho de ser, a menudo, aprobadas luego las normas establecidas, por el Ministerio competente, en forma de Reglamentos obligatorios.

El Estado, además, favorece con frecuencia la normalización teniéndola en cuenta en los pliegos de condiciones para instalaciones y suministros oficiales, en las prescripciones anexas a permisos y concesiones, y en la redacción de proyectos. La Dirección General de Industria, por ejemplo, acostumbra a obligar al empleo de tensiones normalizadas en las líneas de transporte de energía eléctrica. Y aplicaciones del mismo principio — aunque otros motivos puedan haber influido en ello — son las disposiciones acerca de la fabricación exclusiva de tipos técnicamente únicos.

IV. DIRECCIÓN DE LAS CAPITALIZACIONES

Fomento del ahorro

Considerado el ahorro en su doble aspecto económico y social, es favorecido en todos los países donde se respeta la propiedad privada, aunque la política fiscal y el progresivo descenso en el valor adquisitivo de la moneda constituyan un serio obstáculo para ello.

El ahorro, por lo demás, como diferencia que es entre los ingresos y los gastos, podrá incrementarse acreciendo los primeros o reduciendo los segundos; sin olvidar que siendo el importe de los jornales uno de los componentes del precio de

coste, un incremento en el salario nominal no representa a menudo que el salario real sea mayor, en el sentido de dejar un sobrante más elevado para ser destinado al ahorro.

Como anteriormente nos hemos ocupado ya del asunto, añadiremos tan sólo que, si bien el sobrante o la diferencia a que acabamos de referirnos dependen de que determinados gastos se consideren superfluos e indispensables, ya que civilizar un pueblo “no es otra cosa — dice GIDE ⁽²²⁾ — que hacer nacer en él nuevas necesidades”, el Estado favorece el ahorro tanto incrementando los salarios reales, como mediante una discreta propaganda de los beneficios que aquél habrá de producir a los que lo practican.

Influyendo en el ahorro en la forma que acabamos de exponer, puede llegarse, de una manera más o menos indirecta, no sólo a una capitalización dirigida, sino además — haciendo jugar debidamente la legislación fiscal — a establecer un límite para las posibles capitalizaciones individuales, de acuerdo con las tendencias políticas imperantes.

Los seguros obligatorios constituyen, además, un ahorro forzoso para aquellos individuos que difícilmente ahorrarían en otro caso.

De ellos nos hemos ya ocupado desde el punto de vista social; pero son también ahorro forzoso las reservas obligatorias, a las que, asimismo, nos hemos ya referido, principalmente si han de materializarse en valores determinados. Y unos y otros constituyen otra modalidad de intervención estatal en las capitalizaciones.

Limitación de gastos superfluos

Con independencia del seguro obligatorio y de la obligatoria constitución de reservas, puede el Estado dar lugar con sus disposiciones a que se ahorre, aun contra la voluntad del

(22) *Cours d'Economie Politique*, volumen I, página 48.

individuo, si se le disminuyen las facilidades para inversiones más o menos superfluas.

Sabido es, por ejemplo, que con la práctica de la hora de verano — aunque su finalidad sea otra — se produce un ahorro, que no por relativamente pequeño deja de ser interesante, en el presupuesto familiar de alumbrado; pero más directamente apropiados a este fin, son las prohibiciones de construir casas de lujo, de abrir nuevos bares, cafés, pastelerías y establecimientos análogos, de realizar viajes de placer, etc., o la de vender artículos de lujo a los nacionales.

El primer grupo de prohibiciones fué establecido en Italia en 1926 ⁽²³⁾; y la última en el Japón, poco antes de su entrada en la guerra mundial ⁽²⁴⁾. En este país, por lo demás, la medida ha sido acompañada de la absorción del pequeño ahorro por parte del Estado que ha emitido, al efecto, unos bonos al portador de valor equivalente a unas 50 pesetas.

Esta política de estatificación del ahorro ha sido preconizada por PARÍS EGUÍLAZ ⁽²⁵⁾ al proponer la creación de un Servicio Nacional del Ahorro y Capitalización para “recoger las aportaciones del ahorro privado” y dirigir luego el empleo del crédito ponderado debidamente entre obras públicas, vivienda, industria y agricultura. Variantes de ella son, hasta cierto punto, el plan portugués de absorción del “dinero ocioso y propenso por ello a acentuar el alza de precios” mediante un empréstito de mil millones de escudos ⁽²⁶⁾; el impuesto sobre beneficios extraordinarios restablecido por Ley de 17 de octubre de 1941, uno de cuyos principales efectos “fué evitar que el anormal incremento de utilidades obtenido por las empresas pudiera traducirse en un exceso de medios de pago que, al verse en la circulación, habría contribuido a aumentar el nivel de precios” siendo suprimido cuando se consideró “su-

(23) FONT PUIG, *Diario de Barcelona*, 4 de febrero de 1926.

(24) ROBERT, *Dyna*, septiembre de 1941, página 346.

(25) *El Estado y la Economía*, página 315.

(26) RICO, *Diario de Barcelona*, 18 de junio de 1942.

perado en la actualidad aquel peligro" (27); y el plan KEYNES de ahorro obligatorio a base de reintegrar, una vez terminada la guerra, una fracción de los impuestos ingresados (28).

Autorización previa

La autorización previa para las inversiones constituye, en este aspecto, un paso decisivo. En el Japón, por ejemplo, una ley reglamenta el mercado del dinero, estableciendo un orden de preferencia en la capitalización de empresas industriales, comerciales, agrícolas y de todo orden, y somete a previa autorización estatal todas las inversiones realizables, incluso la de los fondos de reserva de las empresas, cuyos dividendos, por lo demás, son también limitados. La cantidad a invertir en nuevas capitalizaciones es fijada anualmente por el Gobierno. Gracias a esta intervención, el valor global de los capitales así dirigidos pasó de 6 a 20 mil millones de yens entre los años 1931 y 1937 y la proporción de lo invertido en la industria pesada, del 33 al 55 por 100 (29).

En un plano inferior, en Italia, con objeto de "proteger el ahorro y reglamentar el ejercicio del crédito", se promulgaron, en marzo de 1936, una serie de decretos que reformaron radicalmente la organización bancaria del país, y ponían bajo el control del Estado el empleo de las sumas depositadas en los Bancos intervenidos. Pudo disponerse, así, de una masa de 40.000 millones de liras para ser orientada hacia las inversiones más convenientes a la economía nacional.

En España, por último, aparte de las reservas obligatorias, a que precedentemente nos hemos referido, necesitan autorización previa del Ministerio de Hacienda para la emisión de nuevas acciones o la puesta en circulación de las que tuviesen

(27) Preámbulo a la Ley de 31 de diciembre de 1943.

(28) KEMMERER, *El ABC de la Inflación*, página 115 y siguientes.

(29) ROBERT, I. c.

en cartera, aquellas sociedades cuyo capital social pase a exceder los cinco millones de pesetas o que concedan derechos de preferencia para su subscripción ⁽³⁰⁾. Y, aunque su finalidad sea más política que económica, no debe olvidarse la Ley de 25 de agosto de 1939 y Orden de 19 de enero de 1940 acerca de la aprobación ministerial de los nombramientos de consejeros, administradores, directores y gerentes de determinadas sociedades.

(30) Leyes de 19 de septiembre y 10 de noviembre de 1942.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS FINANCIEROS

En dos grupos pueden dividirse las intervenciones estatales con objetivo financiero: aquellas que se proponen incrementar los recursos del Tesoro y las que pretenden regular la cotización o el poder adquisitivo de la moneda nacional. Pero, aunque lo primero sea finalidad esencial de todos los impuestos, empréstitos y anticipos del Banco de emisión, así como de la mayoría de los monopolios, no puede negarse que, indirectamente, su forma y cuantía influyen, más o menos según los casos, en el desarrollo de la economía nacional; y, desde este punto de vista, nos hemos referido ya a los mismos en anteriores capítulos.

La intervención en la cotización de la moneda nacional, o sea la llamada política monetaria, tiende a regular el valor externo de aquélla, ya indirectamente por medio de contingentes o interviniendo en el comercio de importación y exportación, ya de un modo más directo con la intervención en el cambio o el monopolio de divisas, modalidad esta última acompañada casi siempre de la entrega obligada de estas últimas, de los valores de cotización internacional y del oro amonedado o en barras.

Finalmente, complemento de esta finalidad, aunque tenga más relación con el valor interno que con el externo de la moneda, es el evitar la inflación; regulando, de acuerdo con las necesidades del momento, tanto la moneda circulante como los créditos que en la variante introducida por FISHER en la teoría cuantitativa, son una y otros equivalentes a los efectos

de aquélla. Y prescindimos, por habernos ya ocupado de las mismas, de las medidas antiinflacionistas que pueden resultar de moratorias, de intervención en los precios, de impuestos, de emisiones de Deuda o de ahorro obligatorio.

En el siguiente cuadro se resumen las intervenciones a que vamos a referirnos, según sea la finalidad inmediata que se propongan:

Conseguir recursos para el Tesoro.	{	Impuestos . .	{	Directos.
			{	Indirectos.
				Sobre el no hacer.
Defender la cotización de la moneda nacional.	{	Empréstitos.		
		Anticipos del Banco de emisión.		
		Monopolios fiscales.		
		Contingentes.		
Evitar la inflación. . . .	{	Licencias de importación.		
		Intervención en los cambios.		
		Monopolio de divisas.		
	{	Límite en la circulación fiduciaria.		
		Regulación del crédito.		

I. RECURSOS PARA EL TESORO

Impuestos

De la influencia de la modalidad y cuantía de los impuestos en la actividad económica del país, nos hemos ya ocupado en los capítulos anteriores; pero aparte de ello, intervenciones son, también, necesarias para la exacción del tributo y la inspección consiguiente.

Pueden clasificarse los impuestos en dos grandes grupos, directos e indirectos, aunque no todos los autores están de acuerdo en sus diferencias características. Siguiendo, no obstante, a TORRENTS Y MONNER ⁽¹⁾, podemos admitir como directos aquellos "que se exigen a los contribuyentes nominati-

(1) *Curso de Economía Política*, páginas 202 y 203.

vamente por la materia tributaria que poseen o lucran, conforme a la base adoptada"; y como indirectos los "que se imponen en virtud de ciertos actos de circulación o consumo, prescindiendo de quien sea el verdadero dueño de los artículos sobre los cuales se exige".

Están, pues, comprendidos en el primer grupo las contribuciones territorial, industrial, de utilidades y sobre la renta, el impuesto de derechos reales, el de cédulas personales, etc. Y en el segundo, los de aduanas, timbre, transportes, usos y consumos, etc.

Existen, además, impuestos o tributos sobre el no hacer, "con la mira de que sirviera de emulación para los que aspiran a la práctica del bien individual o colectivo, y como carga, pena o castigo de los que no atienden a tales deberes" ⁽²⁾. Ejemplo de ellos son los que recaen sobre solares sin edificar, o en fincas sin retrete inodoro, sin acera, sin timbres en la portería (aldabones), sin agua directa (depósitos) y otros análogos.

Empréstitos

Otra fuente de ingresos para el Tesoro, principalmente en circunstancias excepcionales o para atender presupuestos extraordinarios, son los empréstitos. El coste directo de la guerra europea de 1914-18, estimado en más de 200.000 millones de dólares, fué atendido en un 80 por 100 con empréstitos, repartiéndose la diferencia, aproximadamente por partes iguales entre impuestos y créditos bancarios ⁽³⁾. La guerra de 1939-1945, en cambio, ha sido costeada, en gran parte, mediante el impuesto.

Y en España, concretándonos a estos últimos años, se ha emitido Deuda del Estado para canjear los valores ferroviarios

⁽²⁾ Ídem, página 205.

⁽³⁾ MASSÓ, *La guerra europea en sus aspectos financiero y económico*, páginas 32, 41 y 50.

y para adquirir las acciones de soberanía de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Los valores del Estado han sido siempre, por lo demás, muy solicitados por el rentista particular y por las Cajas de Ahorros y compañías y mutualidades de seguros, para constituir un importante porcentaje de sus carteras respectivas, con independencia de la fracción en que deben figurar en las reservas obligatorias establecidas por la Ley de 19 de septiembre de 1942, a que anteriormente nos hemos referido. Realizan, pues, en gran parte la función de canalizar las disponibilidades dinerarias.

En el capítulo precedente hemos aludido ya al empréstito lanzado en Portugal para recoger dinero ocioso, a la forma como en España se consiguió análoga finalidad, mediante la contribución sobre beneficios extraordinarios, y a como en el Japón se ha canalizado el ahorro hacia las arcas del Tesoro. Pero un paso más en el lanzamiento de empréstitos más o menos voluntarios es el caso de Rusia, donde “el ciudadano que no quiere o no puede suscribir un empréstito, se ve privado de su carta de alimentación, lo que le condena al hambre” ⁽⁴⁾.

El papel del Estado, por su gran volumen en circulación y la confianza que merece, aunque su interés sea siempre inferior al de las obligaciones industriales, influye notablemente en las condiciones de emisión de estas últimas. Y ello permite dirigir al alza o a la baja, según convenga, el mercado del dinero, incluso mediante conversiones “que aminoren el peso que gravitó sobre el contribuyente por el servicio de interés y amortización de la Deuda pública” y obliguen “a los tenedores de las viejas emisiones a acudir cuando el Gobierno los llama, sacrificando la rentabilidad a la seguridad de sus ahorros” ⁽⁵⁾, siempre que trate “el Gobierno de determinar un

⁽⁴⁾ *Revue des Deux Mondes*, 1.º de julio de 1933, reproducido por MARGARET en *Diari Mercantil*, 15 de julio de 1933.

⁽⁵⁾ *La Vanguardia Española*, 30 de septiembre de 1939.

nivel barato en la remuneración del capital, problema éste de gran influencia frente a la etapa de reconstrucción nacional" (6).

Las conversiones deben llevarse a cabo, no obstante, con "un respeto absoluto al principio de voluntariedad" y sin peligro de "recluta de dinero forzoso, coaccionado, sometido a pública o secreta presión" (7), ya que en otro caso, como decía GUAL VILLALBÍ (8), "toda conversión, si no está suficientemente justificada en poderosas y apremiantes razones de necesidad pública, tiene las características de un abuso de poder", ya que aun en caso de "ofrecer la opción entre el canje de títulos o el reembolso", para que "se aleje toda idea de abuso de poder y brille la legitimidad y no haya perjuicio para los tenedores de valores, habría que coincidir con circunstancias en las que hubiese abundancia de oportunidades para colocarse el capital reembolsado".

Anticipos del Banco de emisión

Escribe TALLADA (9) que "la historia de los Bancos de emisión españoles en el siglo XIX es la historia de los apremios y necesidades financieras del Estado español"; pues, "ya al crearse, por Real Cédula de 1782, el Banco de San Carlos, se tuvo por objeto resolver momentos de angustia para el Tesoro público", y el "conceder, el 19 de marzo de 1874, el privilegio de emisión al Banco de España, en compensación al mismo, el Banco hacía al Gobierno un anticipo de 125 millones de pesetas, en cuyo precepto — añade (10) — dadas las dificultades del Gobierno en aquella época, quizá se halla la explicación de la concesión del privilegio".

(6) AZNAR, *Palabras del Ministro de Hacienda sobre la actividad financiera del Estado español*, *La Vanguardia Española*, 27 octubre 1939.

(7) Ídem.

(8) *La Vanguardia*, 19 de octubre de 1935.

(9) *Economía Monetària Espanyola*, página 20.

(10) Ídem, página 21.

Al renovarse, en 1891, el privilegio expresado, a cambio de ampliar hasta 1.500 millones la circulación máxima de billetes, el Estado exigió un préstamo de 150 millones sin interés, reembolsable al vencer, en 1921, la prórroga concedida; y “en la legislación que va regulando las relaciones entre Banco y Estado — dice el propio autor ⁽¹¹⁾ — la única preocupación de éste es sacar cada vez más dinero del primero, ya en forma de préstamos o anticipos a bajo interés, ya en forma de impuestos o participaciones de beneficios”.

De las diversas modalidades que pueden revestir las relaciones entre el Estado y el Banco emisor, creemos de interés hacer resaltar, por su influencia en lo que expondremos en la segunda parte de este capítulo, la cooperación del segundo en la política monetaria o de intervención en los cambios, iniciada tímidamente en España en la Ley de 29 de diciembre de 1921, al establecer, en su Base 7.^a, la responsabilidad a asumir por el Banco en el asunto y la reserva a constituir al efecto con cargo a los beneficios sociales. VILLAVARDE, no obstante, había dicho ya, muchos años antes que “dondequiera que exista un Banco único de emisión, a él incumbe el deber implícito, pero elemental, no inscrito en los Estatutos de tales establecimientos, pero inherente a su misión y a su privilegio, de regularizar el comercio del cambio exterior, de defender contra las maquinaciones y asechanzas del agio, el valor internacional de la unidad monetaria” ⁽¹²⁾.

Monopolios

Los monopolios fiscales pueden proponerse objetivos políticos o económicos, pero a casi todos ellos podría aplicarse lo que, con referencia al de petróleos, se lee en una nota oficial, aparecida en la prensa diaria poco después de anunciado el correspondiente concurso, o sea que “el monopolio

⁽¹¹⁾ Ídem, página 50.

⁽¹²⁾ Reproducido por TALLADA, ídem, página 105.

de petróleos persigue, ante todo, una finalidad fiscal, esto es, incrementar los ingresos del Erario" ⁽¹³⁾.

"Desde el punto de vista del coste del servicio — escribe PARÍS EGUILAZ ⁽¹⁴⁾ — la gestión por el sistema de empresa privada es la de mayor rendimiento" y por ello, lo más común en los monopolios es arrendar su explotación a una empresa privada, intervenida en una u otra forma por el Estado, que participa en sus ingresos o beneficios. Tal es el caso de las compañías arrendatarias de los monopolios de petróleos, tabacos, fósforos y teléfonos.

Existen, no obstante, monopolios explotados directamente por organismos estatales — o municipales en su caso — como el de correos y telégrafos, acuñación de moneda, etc., o por Juntas o Consejos cuyos miembros designa el Gobierno directa o indirectamente, caso este último del que son ejemplo las minas y ferrocarriles del Estado.

Pueden, por último, concederse monopolios a empresas mixtas con aportación estatal o municipal al lado de la privada, caso frecuente en la explotación de transportes urbanos y servicios análogos.

Y si los Sindicatos actúan, de derecho o de hecho, como organismos de Estado, puede confiárseles la explotación de monopolios determinados. En Barcelona, por ejemplo, hubo un tiempo, durante el período rojo, en que los servicios de aguas y tranvías fueron explotados por los Sindicatos respectivos.

II. POLÍTICA MONETARIA

Contingentes

Nos hemos ocupado ya de los contingentes en cuanto pueden representar un estímulo, o mejor, una menor competen-

⁽¹³⁾ *La Vanguardia*, 24 de junio de 1927.

⁽¹⁴⁾ *El Estado y la Economía*, página 151.

cia para la industria nacional; y recuérdese al efecto el caso de los jamones sudamericanos que tanto dió que hablar a últimos de marzo y primeros de abril de 1935 ⁽¹⁵⁾. Pero, como también hemos dicho, estos llamados contingentes protectores, a los que se refiere el Decreto de 15 de noviembre de 1933, desfiguran la verdadera esencia del contingente, cuya finalidad no es otra que regularizar las compras en el extranjero para nivelar la Balanza de pagos, condición previa a la estabilización de la propia moneda.

Contingente a la importación de mercancías es “toda limitación que, para período fijo, se establezca sobre la entrada en territorio nacional de un producto determinado” ⁽¹⁶⁾, a fin “de defender y proteger la exportación, y ello regulando la política de importación del país, obedeciendo a la frase... comprar a quien nos compra a nosotros” ⁽¹⁷⁾.

No nos extenderemos en el estudio del régimen de contingentes, que han llevado a cabo plumas más prestigiosas que la nuestra, pero haremos notar que en el citado Reglamento de 26 de febrero de 1935, se tiende a reducir el intervencionismo estatal en su aplicación, pues se reservan como funciones privativas del Gobierno el establecimiento del contingente y la fijación del cupo global; se deja a iniciativa de la Comisión Interministerial de Comercio Exterior la distribución de este cupo por países de procedencia; y aunque el Comité de Control, de nueva creación, debía elevar al Director General de Comercio las propuestas de licencia para cada importador, estas propuestas procedían, en definitiva, de las Comisiones Gremiales.

Y estas últimas, elegidas por los propios importadores, tenían por finalidad recibir las peticiones de contingente y entender en la propuesta de otorgamiento de licencias, indicando los países de origen que estimen más convenientes en cada

⁽¹⁵⁾ *Diario del Comercio*, 2 y 17 de abril de 1935.

⁽¹⁶⁾ Artículo 1.º del Reglamento de 26 de febrero de 1935.

⁽¹⁷⁾ SOLÁ CAÑIZARES, *Després*, 16 de marzo de 1935.

caso a las necesidades de los peticionarios. Por lo demás, el reparto de licencias se basa, en general, sobre la importación efectiva del beneficiario en un período determinado, o sobre las necesidades de fabricación de sus clientes, pero a menudo se reserva una fracción del cupo total para nuevos importadores, consumidores directos y necesidades especiales.

Licencias de importación y exportación

Prosiguiendo la intervención en el comercio exterior, se ha llegado a la obligación de licencia tanto para las importaciones como para las exportaciones; y ello no sólo para favorecer la economía del país, sino con objeto de centralizar y monopolizar el tráfico de divisas, cediendo, para pagar las primeras, el producto de las segundas.

Por las razones que expondremos más adelante, el comercio internacional en los países de economía dirigida ha dejado de ser ejercido libremente, y se desarrolla al amparo de compensaciones — equivalentes al trueque de los pueblos primitivos — o de *clearings* cuyo mecanismo consiste en no comprar a un país extranjero más que por la cantidad de moneda del mismo que se ha logrado reunir con las exportaciones.

Aunque será en la segunda parte de este ensayo donde estudiaremos las ventajas e inconvenientes de esta política, bueno es adelantar que las dificultades del *clearing* bilateral habían inducido a FUNK a propugnar ⁽¹⁸⁾ el establecimiento en Berlín de un *clearing* central donde, en el Nuevo Orden, se compensarían las balanzas de pagos de todos los países europeos.

Las licencias de importación y de exportación deben solicitarse de la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, por mediación de la Delegación de Comercio correspondiente al domicilio social de la casa solicitante. No deta-

(18) *Economía*, 31 de julio de 1941, pág. 5.

llaremos los requisitos precisos para ello, que figuran en las Instrucciones aprobadas por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1944.

Una modalidad que tiende a proteger la producción nacional consiste en subordinar la licencia de importación a la obligación de comprar, al propio tiempo, artículos nacionales idénticos o similares en cantidad determinada. Fué establecida en el Decreto de 25 de octubre de 1934, y de ella se hizo aplicación en el proyecto de ley de 28 de abril de 1936 sobre protección a la industria del nitrógeno.

Interesantes son, también, desde el punto de vista que nos ocupa, algunas autorizaciones de implantación de nueva industria en las que se subordina el empleo de primeras materias importadas, a que las divisas precisas para ello resulten de la exportación de productos de la misma empresa ⁽¹⁹⁾, o a que el concesionario cuide de importar y poner a disposición de determinado organismo, “que se lo pagará al precio del día en el mercado internacional” igual cantidad de las primeras materias extranjeras que precise para su industria ⁽²⁰⁾.

Intervención en los cambios

“Para que un sistema monetario se mantenga estable — dice TALLADA ⁽²¹⁾ — a pesar de las corrientes diversas a que lo someten los movimientos internacionales de mercancías y de capitales, es preciso que tenga un mecanismo de regulación”; y desaparecido prácticamente el que resulta del funcionamiento del patrón oro, ha venido la necesidad de la intervención en los cambios, o de medidas más radicales hasta llegar al monopolio por el Estado de todo el comercio exterior.

Según CASSEL ⁽²²⁾, para “dar a la unidad monetaria del

⁽¹⁹⁾ *Boletín Oficial del Estado*, 11 de enero de 1942.

⁽²⁰⁾ Ídem, 10 de septiembre de 1940.

⁽²¹⁾ *Economia Monetària Espanyola*, página 97.

⁽²²⁾ *El problema de la Estabilización*, página 48 y siguientes.

país un determinado valor”, es “necesario regular conscientemente el aumento de medios de pago”. Es preciso, por tanto, “que se ponga fin, de una vez para siempre, a toda inflación al servicio de la Hacienda pública”, y aunque su equilibrio “no excluye, naturalmente, que el presupuesto apele, en parte, al empréstito, ... deben éstos cubrirse con el ahorro realmente disponible, es decir, sin que a este efecto se creen nuevos medios de pago”. Igualmente debe evitarse “que los impuestos no pudan pagarse con medios disponibles, sino apelando a los Bancos, a fin de crear medios adicionales de pago con los cuales satisfacer los tributos”.

Pero son, también, condiciones necesarias para la estabilización “un cierto equilibrio en el comercio exterior del país” y “entre los distintos grupos de precios”. Las intervenciones estatales en aquél y en éstos, aparte de su aspecto económico, pueden, pues, repercutir también en el financiero. Las primeras, por lo que afecta al valor internacional de la moneda, y las segundas, a su valor adquisitivo interior; valores que, aun cuando tienden a coincidir en régimen liberal, pueden estar más o menos distanciados en régimen de economía dirigida, ya que “los recursos intervencionistas del Estado pueden mantener permanentemente un desequilibrio de precios que en un régimen liberal serían totalmente imposibles”, desequilibrio que, por lo demás, como dicen IRURZUN y RUBIO ⁽²³⁾, a quienes reproducimos, “falta sólo saber si esto puede o no ser provechoso para la nación”.

FUENTES IRUROZQUI, por ejemplo, afirma ⁽²⁴⁾ que “la valoración internacional de las mercancías en régimen de trueque, intercambio, *clearing* o gran compensación dará el valor del dinero, mejor dicho, de la moneda de cada Estado”, de acuerdo — añadimos nosotros — con la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Y que “el valor nacional o interior ha de obtenerse... coactivamente, con autoridad que, sin ignorar

⁽²³⁾ *Política Arancelaria Nacional*, página 115.

⁽²⁴⁾ *Precios y Salarios*, páginas 33 y 34.

las fundamentales leyes y necesidades económicas, contra las que no se puede luchar más que breve espacio de tiempo, dé, porque sí y porque así debe ser, un precio a cada cosa y servicio, y, por ende, un valor a la moneda según su poder adquisitivo, en relación, además, con lo que el mercado nacional, por sí o ayudado de posibles concurrencias extranjeras, ofrezca, regulándolo con rigidez, y, si fuera preciso, estableciendo interinamente el sistema, consolide su efectividad práctica, las tasas, racionamientos y sistemas de abastos y de acopios que proporcionen, junto a un precio justo y a un valor monetario también justo, una justicia social inexcusable”.

El mismo autor afirma, sin embargo, más adelante ⁽²⁵⁾ que “la medición del valor de una moneda no la da la coacción, bien que en algún momento, a la larga insostenible, pueda servir para salir del paso en un comercio o cambio reducido a los límites de unas fronteras nacionales. La moneda patrón de cambios, exponente de riqueza y medida de precios y valores, ha de tener su base — añade — en una cobertura, para mantener intrínsecamente un valor”.

“Pero ¿es que hace falta — continúa — que esta cobertura sea el oro? Antes bien, ¿es que puede seguir siéndolo una mercancía que ha dejado de ser de aceptación general y, por consiguiente, que no cumple el principal, sino el único postulado que se exige a las monedas para tener curso libre? La cobertura de una moneda — añade — la proporciona hoy su emisión por quien puede emitir y por quien, por consiguiente, respalda a su vez este derecho de fuerza en un derecho de realidades, como es para cada Estado emisor la potencialidad económica de su nación.”

Estas ideas, reflejo de la teoría nominalista de la moneda, son, en esencia, las repetidamente expuestas por FUNK, quien escribe, por ejemplo, refiriéndose a Alemania, que “nuestra moneda está garantizada por la potencia de trabajo del pue-

(25) Ídem, páginas 68 y 69.

blo y la autoridad del Estado, por una política autoritaria de los precios y salarios, y por la orientación estatal de la economía, y en particular, del tráfico financiero y del crédito" (26).

Y CASSEL, por su parte, después de calificar de errónea la "concepción de que los billetes son, en primer término, obligaciones o títulos de deuda y no medios de pago", afirma "que el valor de una moneda depende única y exclusivamente de la provisión de medios de pago con poder liberatorio en esa moneda, y que ninguna cobertura del mundo ni ninguna otra reserva o provisión puede impedir que deje de actuar ese motivo de determinación" (27).

Sentado lo que antecede, pasaremos a tratar someramente de la intervención en los cambios, pero antes creemos interesante reproducir algunos párrafos de la obra de CASSEL a que acabamos de referirnos.

"Los esfuerzos encaminados a regular el curso del dólar, deben hallar su expresión en la aspiración de mantener la unidad monetaria a aquel poder adquisitivo en el mercado interior que deba poseer para que el curso del dólar esté a la par. Dicho en otras palabras, la misión consiste esencialmente en conservar la paridad del poder adquisitivo entre la propia moneda y el dólar en concordancia con la paridad fijada. Si no se logra este fin se malogrará todo intento de regulación de las cotizaciones..." (28).

"El único camino adecuado a un Banco de emisión para estabilizar la cotización del dólar con la moneda de su propio país, consiste, naturalmente, en comprar cuando el curso está bajo y en vender cuando está alto, con lo cual el Banco obtendrá una ganancia... Para que el Banco pueda hacer esto... debe saber aproximadamente dónde se halla aquella situación de equilibrio alrededor de la cual se puede dejar fluctuar la cotización" (29).

(23) *Economía*, 31 de julio de 1941, pág. 5.

(27) *El problema de la Estabilización*, página 47.

(28) *Ídem*, página 83.

(29) *Ídem*, página 154.

En España, la intervención en los cambios prevista en la Base 7.^a de la ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921, fué iniciada en junio de 1928 con la creación del Comité Interventor del Cambio, dotado con un fondo de 500 millones de pesetas, el cual consiguió amortiguar, pero no detener, la baja de la peseta. Esta primera intervención cesó en octubre de 1929, y su liquidación dió origen al empréstito de 300 millones de pesetas oro.

En abril de 1930 se suprimió el Comité Interventor del Cambio, pero por R. D. de 14 de julio, se creó el Centro Regulador de las Operaciones de Cambio, y por Rs. Ds. de 31 de agosto y 7 de septiembre, el Centro Oficial de Contratación de Moneda, que centraliza todas las operaciones sobre divisas. Así “queda creado un nuevo régimen monetario, que tiene por finalidad conseguir la regularización en el sistema de pagos al exterior, y el monopolio de divisas, cuyo instrumento ha de ser al propio tiempo el brazo ejecutor de las medidas de intervención en el mercado, que acuerde el Gobierno” ⁽³⁰⁾.

Finalmente, por R. D. de 10 de abril de 1931, cuyas disposiciones esenciales fueron reproducidas en el Decreto de 29 de mayo, se introdujo en España el régimen de intervención del Estado en los pagos al extranjero, que clasifica en prohibidos (los que pueden tener finalidades especulativas o envolver una evasión de capitales), de autorización previa (los necesarios en determinados casos, pero no estrictamente de carácter comercial) y libres, aunque con sujeción a las prescripciones de C. O. C. M. (los comerciales); y después de otras disposiciones complementarias, en virtud de la Circular de 23 de marzo de 1933, quedó centralizado de un modo absoluto el servicio de divisas en manos del C. O. C. M., a cuyo cargo corría igualmente la inspección del cumplimiento de las disposiciones sobre pagos al exterior.

⁽³⁰⁾ SARDÁ, *La intervención monetaria y el comercio de divisas en España*, página 23.

Monopolio de divisas

Como acabamos de ver, de la intervención en los cambios se ha pasado, paulatinamente, a un monopolio que se ha hecho más total con la creación — por Decreto de 18 de noviembre de 1936 — del Comité de Moneda Extranjera, y más tarde — por Ley de 25 de agosto y Decreto de 24 de noviembre de 1939 — del Instituto Español de Moneda Extranjera. Pero, además, han sido dictadas disposiciones complementarias para evitar la evasión de capitales ⁽³¹⁾, para restringir la exportación de alhajas y piedras preciosas ⁽³²⁾, y para conseguir la entrega, no sólo de las divisas procedentes de exportaciones o de cobros del extranjero, sino de todo el oro amonedado o en pasta, de las monedas extranjeras y de los valores extranjeros o de cotización internacional ⁽³³⁾.

Consecuencia del monopolio de divisas es la cotización de las mismas con carácter oficial, por el organismo estatal correspondiente; así como el bloqueo de las mismas y los múltiples convenios de pagos, fundamentados casi siempre en compensaciones, *clearings* y desbloques paulatinos en determinadas condiciones.

Pero así como en la economía simplemente intervencionista, la intervención en los cambios es el medio más empleado para influir en la cotización de la moneda del país, en economía dirigida es también dirigida la moneda; y al paso que por otros procedimientos, por el *open market police*, por ejemplo, sin modificar el tipo de descuento, puede actuarse sobre el dinero circulante, o sea sobre los precios o el poder adquisitivo de aquélla, se actúa sobre el valor internacional interviniendo el comercio exterior en el sentido de reducir las importaciones e incrementar en lo posible las exportaciones; y para ello, aparte de las medidas restrictivas a que nos hemos referido,

(31) Decretos de 25 y 29 de mayo de 1931 y 16 de marzo de 1936.

(32) Orden de 14 de noviembre de 1932.

(33) Decreto-Ley de 14 de marzo de 1937.

gran número de países han recurrido a lo que TALLADA ⁽³⁴⁾ llama “polimorfismo monetario”, en virtud del cual se asignan varias cotizaciones a la moneda del país respectivo, con relación a las restantes divisas, y de acuerdo con diversas finalidades.

Ejemplos de ello son la lira turística de Italia; la doble cotización española según se trate de importaciones obligatorias o voluntarias de moneda; la triple cotización del peso argentino para favorecer la importación de mercancías de naciones con las que su balanza comercial sea favorable; y, de un modo especial, las “verdaderas virtuosidades” ⁽³⁵⁾ a que llegó SCHACHT, aprovechando situaciones de hecho, para favorecer las exportaciones alemanas, gracias a las 25 clases de marco.

III. MEDIDAS ANTIINFLACIONISTAS

Circulación fiduciaria

La regulación de la circulación fiduciaria de acuerdo con las necesidades del país, es indispensable, según la teoría cuantitativa de la moneda, para evitar la inflación.

Es por este motivo que los Gobiernos, al conceder el privilegio de emisión, han fijado siempre un máximo — con independencia de la cobertura metálica — en la circulación fiduciaria, máximo que, por lo demás, ha ido constantemente en aumento al compás del desarrollo económico del país y — también a menudo — del descenso en el valor adquisitivo de la moneda.

Dicho máximo, por lo que al Banco de España se refiere, ha pasado por las siguientes cifras, en millones de pesetas:

⁽³⁴⁾ *La política económica en los tiempos de crisis*, página 121.

⁽³⁵⁾ TALLADA, ídem, página 121.

1874	500	1917	3.000
1882	750	1918	3.500
1891	1.500	1919	4.500
1898	2.500	1921	6.000
1899	2.000	1945 (febrero). .	18.000
1914	2.500	1945 (nov.) . . .	20.000

La circulación efectiva ha sido, no obstante, casi siempre bastante inferior a los expresados máximos autorizados.

Regulación del crédito

Hemos recordado, al principio de este capítulo, que IRVING FISHER modificó la fórmula clásica de la teoría cuantitativa de la moneda, haciendo intervenir en la misma, aparte de la moneda circulante, los instrumentos de crédito y las correspondientes velocidades de circulación. Es por este motivo, aun prescindiendo del hecho que la utilización de un crédito se materializa comúnmente en una salida de moneda de las arcas del Banco, que la política monetaria antiinflacionista ha tenido una de sus manifestaciones en la regulación del crédito.

El tipo de descuento, que tanta influencia había ejercido en el desarrollo de las actividades económicas, ha sido una de las primeras manifestaciones intervencionistas en este sentido, siempre que el Banco emisor haya actuado de acuerdo con las directivas estatales.

Pero, como dice TALLADA ⁽³⁶⁾, “la inminencia extraordinaria que la función del crédito tiene sobre la vida económica del país, los enormes capitales que los Bancos concentran para lanzarlos en el torrente circulatorio y vivificar con ellos la actividad industrial y comercial, la importancia y tamaño de sus organizaciones, agrupando masas importantes de empleados y extendiéndose por sucursales y agencias a la mayoría de núcleos de población, han hecho que, aun en época de predominio de las ideas individualistas, los establecimientos ban-

(36) *España Bancaria*, reproducido en *Diari Mercantil*, 8 octubre 1932.

carios hayan constituido una categoría aparte entre todas las instituciones en que se reparten las diversas actividades de la vida económica”.

En Italia, por ejemplo, dijo MUSSOLINI en su célebre discurso del 23 de marzo de 1936, en la Asamblea Nacional de las Corporaciones, que el crédito “que es a la economía como la sangre al organismo humano”, es “por mil razones, de la absoluta pertenencia del Estado” ⁽³⁷⁾ y recordó que “recientes disposiciones lo habían lógicamente colocado bajo el control directo del Estado”. En Alemania, el ordenamiento del crédito tuvo lugar mediante la ley bancaria de 5 de diciembre de 1934, con disposiciones adicionales, en 25 de septiembre de 1939.

En España, la ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921 inició la intervención del Estado en las organizaciones de la banca privada; pero desde el punto de vista que ahora nos ocupa y prescindiendo de otras disposiciones cuya relación alargaría desmesuradamente este apartado, es interesante la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1942 que declara la necesidad de autorización ministerial previa para la obtención de créditos con garantía hipotecaria de la Banca Privada, prohíbe los en descubierto y fija los límites a los con garantía de valores.

(37) *Il Popolo d'Italia*, 24 de marzo de 1936.

CAPÍTULO IV

OBJETIVOS POLÍTICOS

En los capítulos precedentes nos hemos ocupado de intervenciones estatales, permanentes o transitorias, pero siempre dirigidas a conseguir una determinada finalidad interesada, de orden social, económico o financiero. Pero la primacía de los intereses del Estado sobre los del individuo, formulada por PLATÓN en su República al sentar que “no fundamos una ciudad para hacer una gente singularmente feliz, sino para que la ciudad misma sea lo más perfecta posible”, y desarrollada por HEGEL en su frase que “todos los individuos tienen que conformarse con el Estado y sacrificarse al Estado” ⁽¹⁾, ha dado lugar a la nueva teoría del intervencionismo estatal en todos los órdenes, llevada principalmente a la práctica en los Estados totalitarios, cuya economía es intervenida, controlada o dirigida, con el solo o primordial objeto de supeditarla a sus directrices políticas.

Dice TALLADA ⁽²⁾ que mientras en el sistema intervencionista, el Estado interviene la economía “sencillamente por razones de justicia, como buen juez, para evitar las lesiones que unos intereses puedan producir en otros”, en régimen de economía dirigida, interviene porque cree “que ha de entender en el funcionamiento de esta economía para el mayor bien del Estado, para el mayor bien de la Nación y que este deseo,

(1) Reproducido por RUIZ AMADO, *La leyenda del Estado enseñante*, páginas 10 y 20.

(2) Conferencia en la *Asociación de Contables de Barcelona*, Dyna, abril de 1941, pág. 147.

este fin de organizar las cosas para el mayor bienestar del organismo Estado y del organismo Nación, le permite intervenir no sólo en aquellas relaciones casi podríamos decir solamente de distribución de la venta en que intervenía la economía intervencionista, sino que, incluso, tiende a substituirse al patrono, y marca al patrono la cantidad y calidad de los géneros que ha de producir, interviniendo en la formación de los precios y en el origen de las primeras materias que han de venir a formar los géneros que cada Nación produce”.

En otras palabras: el Estado ya no interviene la economía por motivos sociales, económicos ni financieros, sino que interviene, o mejor, dirige por motivos políticos, para conseguir una “economía sirviendo irrevocablemente a los fines políticos del Estado”, como dijo AREILZA en el Instituto de Estudios Políticos ⁽³⁾; ya que considerada la industria “como un instrumento de la política nacional, es el propio Estado el que ha de vigilar de modo exquisito su capacidad y su eficiencia” ⁽⁴⁾. Llegamos así, con palabras de REPACI ⁽⁵⁾, al “principio de la nación como unidad económica, que... implica: a) la subordinación de la economía utilitarista del individuo y de sus grupos a la consecución de los fines del Estado, b) al potenciamiento armónico de todas las fuerzas productivas nacionales en cada rama económica, y c) la necesidad de la conservación de la expresada fuerza para incrementar la riqueza del país”.

Este concepto exige, por lo demás, contar con lo que BORTAI ⁽⁶⁾ llama “ciudadano del Estado corporativo”, el “hombre que, teniendo presente en su espíritu el Estado como valor moral y como valor económico, subordina sus intereses al interés nacional”. Y esta idea — pese a las diferencias ideológicas y prácticas entre fascismo y nacionalsindicalismo — fué

⁽³⁾ *La Economía española y la Sindicación industrial*, página 6.

⁽⁴⁾ Ídem, página 8.

⁽⁵⁾ *La Finanza italiana fascista*, página 12.

⁽⁶⁾ *L'Ordinamento Corporativo*, página 47.

reproducida por CORREA al afirmar, el 8 de noviembre de 1941, en su conferencia del Palacio de la Música, que “nuestra misión, nuestra tarea, nuestra gloria, es servir a España, y servir a España no sólo por encima de nuestros intereses legítimos, sino — aun — contra nuestros intereses legítimos” ⁽⁷⁾.

“Hoy son cada vez más — escribe HUNKE ⁽⁸⁾ — los Estados en los que el egoísmo individual ha pasado a ser substituido por la dirección política. En todas partes — dice — se van creando los necesarios organismos supremos encargados de orientar y desarrollar la economía del modo que mejor cuadra al interés común; ... La comunidad despoja cada vez más a la economía de sus funciones y derechos soberanos y se los entrega a la dirección política como garante de la Nación. El medio económico, con sus imperialismos particulares y sus querellas y sus violaciones jurídicas, deja el camino libre al desarrollo de las energías vitales del pueblo, en cuanto que son sus normas y sus necesidades vitales las que determinan la posición, el cometido y la finalidad de la economía.”

“El objetivo de esta política económica constructiva — prosigue — consiste en, apelando a la orientación y a la educación, poner de acuerdo la iniciativa del individuo con las exigencias de la comunidad; en que la primera no sea descartada, sino que garantice más bien la satisfacción de las mismas. No se trata de dejar fuera la iniciativa y los conocimientos del particular, sino que nuestro principio — se refiere al nacionalsocialismo — es, por el contrario, el de que cada uno debe tomar sobre sí las tareas de la comunidad en la medida de sus necesidades.”

También nos encontramos aquí con otra idea que, pese a las diferencias ideológicas y prácticas entre el nacionalsocialismo y el nacionalsindicalismo, ha venido a informar ambas ideologías. GIRÓN, en efecto, a la sazón ministro de Trabajo,

⁽⁷⁾ *Diario de Barcelona*, 9 de noviembre de 1941.

⁽⁸⁾ *Dyna*, marzo de 1942, pág. 221.

dijo en Linares, el 2 de mayo de 1942, que “en la concepción nacionalsindicalista, España es un gran Estado donde cada hombre tiene marcado su puesto” ⁽⁹⁾; y ROBERT, Director General de Industria, más tarde — en su conferencia del 31 de octubre del propio año, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, dijo que “la Economía nacional es un conjunto de recursos naturales, de mano de obra y de capitales que es preciso administrar de modo que se obtenga de ellos, en cada momento, el máximo provecho para el país. De ahí que el desenvolvimiento industrial deba realizarse conforme a una ordenación programática previa, establecida por el Estado”.

Como recordó OLORIZ en su conferencia del 3 de mayo de 1940, dentro del ciclo organizado por la Universidad de Barcelona ⁽¹⁰⁾, “todos los conferenciantes y todos los expositores de estos últimos tiempos están conformes, por lo menos en teoría”, en que se ha “de favorecer la iniciativa individual”, calificada de “fuente fecunda de la vida económica de la Nación” en el Fuero del Trabajo ⁽¹¹⁾, “instrumento más eficaz y más útil de los intereses” de la misma, en la *Carta del Lavoro* ⁽¹²⁾ y de “único motor de toda empresa eficiente”, a la que “la organización más compleja del sistema burocrático no puede nunca substituir”, por ABOLLADO ⁽¹³⁾.

Pero, a pesar de todo ello, “se supone — dice NAPOLITANO ⁽¹⁴⁾— que el industrial, en la compleja vida económica moderna, no tiene posibilidad de conocer si y hasta qué punto es útil y conveniente dar vida a una industria nueva, y si y hasta qué punto la producción puede ser absorbida por el mercado interior o el internacional, no solamente en el momento

⁽⁹⁾ *La Vanguardia Española*, 3 de mayo de 1942.

⁽¹⁰⁾ *Problemas técnicos de importancia económica en la nueva organización de España*, página 68.

⁽¹¹⁾ Declaración XI, 6.

⁽¹²⁾ Base VII.

⁽¹³⁾ *El Español*, 13 de enero de 1943.

⁽¹⁴⁾ *Instituciones de Economía Corporativa*, página 304.

en que la industria se crea, sino, con cierta seguridad, en períodos sucesivos". En estas consideraciones se fundamenta todo el condicionamiento industrial: la ley italiana de 12 de enero de 1933, la portuguesa de 17 de mayo de 1937 y, prescindiendo de otros países, los Decretos españoles de 20 de agosto de 1938 y 8 de septiembre de 1939.

Debe también el Estado, se afirma en una publicación de la Dirección General de Industria ⁽¹⁵⁾, "regular la actividad espontánea de la iniciativa particular para evitar que, persiguiendo exclusivamente el lucro, sin tener en cuenta los altos intereses nacionales, entorpeciera y dificultara el resurgimiento, empleando inadecuadamente materias primas que escaseaban, divisas precisas para otras atenciones más urgentes y capitales que podrían consagrarse a menesteres más interesantes para la nación". Y al efecto, dice que ya "se han seleccionado las industrias más convenientes dentro de la actual coyuntura económica, rechazándose temporal o definitivamente las demás, ordenándose así el desenvolvimiento de la producción industrial".

"Pero no es suficiente — continúa — la labor restrictiva para la debida ordenación de la economía, sino que al mismo tiempo es necesario llevar a cabo otra de estímulo y encauzamiento de la iniciativa privada, según la cual el Estado se adelanta a ésta, señalándole los objetivos cuyo logro demanda el alto interés nacional, dándole los medios para conseguirlos."

Y "los resultados obtenidos — prosigue — permiten asegurar que hoy existe una verdadera dirección del desenvolvimiento industrial por parte del Estado. No sólo dejan de implantarse aquellas industrias que la Administración juzga improcedentes en el momento actual, sino que se establecen precisamente aquellas que se estiman indispensables para la economía o la defensa de la Nación. La actuación espontánea de la iniciativa privada en la implantación de nuevas industrias

(15) *La política industrial en la Nueva España*, página 10.

de tipo medio y grande no llega a 400 millones de pesetas en los dos años transcurridos desde la vigencia de la legislación de interés nacional; en cambio, la capitalización industrial dirigida, es decir, la que corresponde a industrias creadas en virtud de decretos específicos en los que el Estado se adelanta a señalar la necesidad de implantar determinada actividad industrial, asciende a más de 1.400 millones de pesetas”.

No intentamos aquí otra cosa que sentar el hecho, con la reproducción del precedente párrafo y sin discutir si ello es, en efecto, digno de elogio o representa, por el contrario, un síntoma del amortecimiento del espíritu de empresa de que nos hemos ocupado al tratar en otro lugar ⁽¹⁶⁾ de la función social del empresario; ya que repasando los Boletines Oficiales del Estado de estos últimos años, veríamos probablemente un descenso — de un modo especial prescindiendo de las líneas eléctricas — en el número de resoluciones dictadas por la Dirección General de Industria acerca de nuevas industrias solicitadas. Y, por otro lado, sin que pretendamos discutir la importancia de la constatación expresada, no debe olvidarse que, en general, las industrias protegidas — nitrógeno, fibras textiles — requieren muy grandes capitales, por lo que el resultado de la comparación sería probablemente distinto si partiésemos del número de peticiones y no del valor de su instalación.

Cerrado este paréntesis, y aunque sea insistir sobre el propio tema, nos permitimos reproducir algunos párrafos de la conferencia dada en 5 de febrero de 1940, en el Instituto de Estudios Políticos, por ALARCÓN DE LA LASTRA, ministro a la sazón de Industria y Comercio. “Urge — dijo — un desenvolvimiento vigoroso y rápido, pero ordenado, de la producción industrial, que transforme nuestra economía, potenciándola y haciéndole alcanzar el nivel que le corresponde. El resurgimiento económico en este aspecto, ha de tener como

(16) *Dyna*, abril, mayo y diciembre de 1945, páginas 194, 269 y 670.

objetivo la creación de nuevas industrias, capaces de fabricar aquellos productos que importamos y al propio tiempo susceptibles de elaborar las materias primas nacionales que actualmente se exportan sin revalorizar, pero hay que hacerlo en indispensables condiciones de baratura y calidad, a fin de que puedan competir en el mercado exterior los productos con ellas fabricados, invirtiéndose así el signo de la balanza de trabajo en nuestros intercambios con el extranjero.”

“Para lograr estos propósitos — prosigue — es necesaria la intervención del Estado, estimulando y orientando la iniciativa privada, cuando ésta se muestra insuficiente para cumplir su cometido. Pero tal intervención no debe manifestarse en forma de un proteccionismo vago e inorgánico, como el que ya conocemos, sino que debe constituir una política coherente y continuada, planeada en un programa orgánico en el que se determinen los fines que deben perseguirse y los procedimientos a emplear para alcanzarlo. Ello significa una mutación total en la política económica. En lugar de aguardar el Estado a que la iniciativa particular se acerque a él solicitando amparo y protección para sus empresas, es él quien marca los objetivos que es preciso alcanzar, ofreciendo de antemano su amparo y auxilio en forma específica, fijando las condiciones que deben reunir las empresas, orientando y encauzando de este modo las actividades privadas, antes dispersas y deslabazadas, en dirección a los fines que el interés nacional aconseje, actuando como rector supremo de la economía del país y representante genuino del bien colectivo” (17).

Y haremos notar que este punto de vista acerca del problema, el que sea el Estado y no la iniciativa privada quien señale cuáles son las industrias que han de protegerse, había presidido ya los planes nacionales de ferrocarriles y otras obras públicas, y fué defendido por CAMBÓ al discutirse en el Congreso la que fué luego ley de 2 de marzo de 1917. “En una

(17) *El triunfo nacional y su repercusión en las orientaciones de la industria y el comercio*, páginas 18 y 19.

intervención del Estado — dijo — ha de ser el Estado quien fije y determine las industrias que deben protegerse, en qué forma deben protegerse y hasta en qué medida; es decir, que no quede a todo el mundo la libertad de pedir, sino que la iniciativa esté casi exclusivamente reservada al Estado para determinar las industrias que quiere impulsar y proteger” (18).

Dice ROBERT (19) que con los planes de industrialización pueden proponerse los Estados: a) la absorción del paro forzoso derivado de una intensa racionalización; b) el logro de una autarquía que los hiciera indemnes al bloqueo; c) el aumento de la capacidad productiva con vistas a reforzar la potencialidad de la industria de armamento; d) la consecución simultánea de un mayor grado de autosuficiencia y una superior capacidad productiva, particularmente en el aspecto militar. Y pone, como ejemplos respectivos, el primer plan cuatrienal alemán, el segundo plan cuatrienal alemán y los planes autárquicos italianos, los planes quinquenales rusos y el plan japonés de expansión industrial autárquica.

Si prescindimos de la lucha contra el paro involuntario, por tratarse de una finalidad social de la que precedentemente nos hemos ocupado, nos encontramos con otros dos objetivos a conseguir, autosuficiencia y potencialidad en la industria de armamento, objetivos esencialmente políticos en su aspecto militar, en perfecta consonancia con los regímenes totalitarios de los países respectivos. Y podríamos considerar, también, como de tipo político, las intervenciones tendentes a nacionalizar — con monopolio o sin él — actividades desarrolladas en su mayor o menor parte por sociedades extranjeras y la estatificación o socialización de empresas o su expropiación forzosa — como también la de fincas rústicas o solares sin edificar — para llevar a la práctica ideas sociales más o menos avanzadas.

(18) Sesión del Congreso de 1.º de febrero de 1917.

(19) *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 97.

Aunque no la creamos exenta de defectos, nos atrevemos a proponer una clasificación de las intervenciones de tipo político, según se propongan acrecentar el potenciamiento militar, independizarse del extranjero y hasta — el Poder público — de los propios nacionales, o llevar a la práctica, como acabamos de decir, ideas sociales más o menos avanzadas.

Potenciamiento militar . .	{ Autarquía. Intervención en las industrias de armamento.
Independencia del Estado frente al extranjero y a la propia industria nacional.	{ Nacionalización de empresas o actividades. Depuración política de elementos directivos. Estatificación o socialización.
Expropiaciones por utilidad social.	{ Reformas agrarias. Utilización de solares. Colectivizaciones industriales.

I. POTENCIAMIENTO MILITAR

Autarquía

En el capítulo II nos hemos ocupado de las diversas modalidades que ha revestido — y sigue revistiendo — la protección a la producción nacional; pero dijo AREILZA en el Instituto de Estudios Políticos, en su conferencia del 4 de marzo de 1940 ⁽²⁰⁾, que el “concepto de protección ha sido superado por el de autarquía”, que “es, en la esfera económica, lo que la independencia en el terreno político” y, “en su sentido más lato, liberarse de la sujeción exterior en orden a las necesidades del consumo nacional”. Los objetivos políticos prevalecen, pues, en ella, sobre los económicos o financieros. “Para que España recobre su puesto en el mundo — dijo el

(20) *La Industria española y la Sindicación industrial*, página 20.

mismo conferenciante, el 7 de junio del propio año, en la Universidad de Barcelona — se precisa capacitarla en todos sentidos.” “No hay libertad exterior — añade, — no hay España libre sin autosuficiencia económica. No hay tampoco verdadera libertad sin emancipar nuestra moneda y nuestra balanza de pagos del déficit crónico y creciente que presenta” ⁽²¹⁾.

“Para que España sea un país verdaderamente libre — escribía al poco tiempo PÉREZ URRUTI ⁽²²⁾, — es necesario dotarla de todos los elementos necesarios para que pueda desenvolver su vida y disponer de su destino. Este postulado conduce a las directrices en que debe inspirarse nuestra política económica, que son: la autosuficiencia en aquellas ramas de la producción en que sea factible, con el fin de sanear nuestra divisa y acabar con el déficit crónico de nuestra balanza comercial y de pagos, y la autonomía en junto a todos aquellos abastecimientos que requiere un ejército moderno, como medio de garantizar esa independencia y libertad de acción.”

La política autárquica, por lo demás, “no puede identificarse con la grosera economía del bastarse a sí mismo (economía del egoísmo nacional), ni con la teoría según la cual los Estados y las Naciones deben encerrarse herméticamente dentro de sus fronteras (mística autárquica), ni tampoco con la premisa sostenida por la escuela mercantilista, según la cual la Nación debe comprar fuera de sus fronteras una cantidad de mercancías no mayor que la que el extranjero puede comprarle a ella” ⁽²³⁾.

“Política económica autárquica — dice GAY DE MONTELLÁ ⁽²⁴⁾ — es la expresión definida de una política fundamentada en la voluntad de poder, traducida en el campo político en la pretensión de reunir alrededor de esta acción, todo el

(21) UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 1. c., página 479.

(22) *España en números*, página 143.

(23) GAY DE MONTELLÁ, *Autarquía*, páginas 9 y 10.

(24) *Idem*, página 5.

caudal de energías vitales y materiales, contenidas en las fronteras de la Nación.”

Autarquía absoluta — continúa más adelante — es “la realización integral de un programa de Estado que representa la posesión y el aprovechamiento de la riqueza en materias primas, susceptibles de producir todos los elementos necesarios para llenar las necesidades de la Nación en todo tiempo”; y “autarquía relativa es la normalización de las actividades del Estado dirigida a llenar el vacío de sus necesidades económicas con materias primas y productos nacionales hasta un límite que no sea obstáculo para la colocación de los productos nacionales, servicios o trabajos, fuera de las fronteras”.

No confundamos, empero, la economía dirigida con la autarquía, ni consideremos esta última como formando parte de la primera. Una y otra — dijo CARCELLER el 27 de febrero de 1940 en el Instituto de Estudios Políticos ⁽²⁵⁾ — “son incompatibles, porque la primera aniquila los valores y la iniciativa individual”, y “la segunda logra sus mejores éxitos buscando las iniciativas privadas”, ya que en ella “las minorías competentes colaboran con el Estado”.

La primera afirmación será objeto de estudio en los capítulos siguientes; y la segunda, que también discutiremos en el lugar correspondiente, debe tener su origen en el llamado problema de los sucedáneos que, concretándonos de momento a su aspecto positivo, ha dado lugar a interesantísimas investigaciones, especialmente en el campo de la química, cristalizadas en los nuevos materiales sintéticos y, en general, artificiales que pudimos admirar en 1942, en la sección alemana de la Feria Internacional de Muestras de Barcelona, materiales que poseen, muchos de ellos, propiedades distintas, y más apropiadas a la finalidad a que se destinan, que aquellos a los que, por su escasez, en un principio, se trató de substituir.

(25) *El Noticiero Universal*, 27 de febrero de 1940.

Industrias de armamento

Aparte de las disposiciones generales en favor de la industria nacional, es frecuente una protección especial de aquellas actividades que pueden ser más útiles, en caso de guerra, a la defensa del país. Dijo MUSSOLINI en el Senado el 2 de abril de 1925 ⁽²⁶⁾ que “la eficiencia bélica de una Nación es... el dato complejo resultante, no de la simple suma, sino de la coordinación de la eficiencia militar, económica, moral e industrial”; y es por ello que los países guerreros dirigen a las finalidades bélicas todas las energías nacionales.

Ahora bien, “aquí — dice ROBERT ⁽²⁷⁾ — la economía no tiene nada que decir, pues se trata de algo completamente distinto del desenvolvimiento de la producción nacional”. Nos concretaremos, pues, a recordar que aparte las fábricas militares propiedad del Estado, y de las que, interrumpidas sus actividades, puedan ser incautadas de acuerdo con la Ley de 1.º de septiembre de 1939, la de 24 de noviembre siguiente admite la existencia, en determinadas condiciones, de industrias para la defensa nacional y auxiliares para la misma.

Son las primeras aquéllas que “en tiempo de paz fabrican normalmente material de guerra o elementos de aplicación inmediata a la misma” y las segundas, “las que, fabricando en tiempo de paz materiales que no son de aplicación inmediata a la guerra, produzcan primeras materias o elementos indispensables para la fabricación de material de guerra, así como las que puedan fácilmente transformarse para producir elementos necesarios a la defensa de la Nación” ⁽²⁸⁾.

Prescindiendo del tiempo de guerra, en que las industrias del segundo grupo — y aun otras no clasificadas en el mismo, de los ramos metalúrgico, químico y textil, principalmente — son incautadas o al menos intensamente intervenidas por los

⁽²⁶⁾ *Habla el Duce*, página 25.

⁽²⁷⁾ l. c., página 128.

⁽²⁸⁾ Artículo 3.º, apartados A) y B).

organismos militares, las fábricas de armas siempre lo son gubernativamente en defensa del orden público y de la seguridad individual ⁽²⁹⁾.

II. INDEPENDENCIA DEL ESTADO

Nacionalización de empresas o actividades

Aunque el nacionalismo económico, en sus limitaciones a las actividades industriales y comerciales, puede proponerse fines sociales o económicos, es en general por motivos políticos que ha sido defendido. “El deber más urgente de todo pueblo con sentido de su soberanía — dijo GIRÓN en Linares, el 2 de mayo de 1942 ⁽³⁰⁾ — es rescatarla de entre las redes de la Banca privada, de las garras de las empresas omnipotentes...; pero no habremos llegado a la España libre en lo económico hasta que no consigamos emancipar a la Nación de la opresión de este enemigo invisible que tiene en sus manos todos los resortes del poderío y que con una maniobra o con una orden, desde dentro o desde fuera de la Patria, puede anular todas las medidas y hacer ineficaces todas las leyes.”

La nacionalización de las industrias, principalmente de las explotadoras de servicios públicos, ha sido tarea emprendida a menudo por la Banca privada que, aprovechando circunstancias propicias en la coyuntura internacional, ha adquirido en diversas ocasiones la mayoría — y hasta la totalidad — del capital-acciones de las correspondientes sociedades, nacionales o extranjeras, o ha comprado a estas últimas su participación en negocios industriales del país.

No de otro modo han pasado a manos españolas nuestros grandes ferrocarriles, las aguas y tranvías de Barcelona, las fábricas e instalaciones de gas y electricidad procedentes de la empresa Lebon, etc. Todo ello se ha llevado a cabo gracias

⁽²⁹⁾ Reglamento de 13 de febrero de 1934.

⁽³⁰⁾ *La Vanguardia Española*, 3 de mayo de 1942.

a la iniciativa privada y cuando el movimiento de capitales a través de las fronteras gozaba de la libertad necesaria para ello. Y, principalmente, a consecuencia de las perturbaciones a que han dado lugar las dos últimas guerras mundiales, la liquidación de la balanza comercial — desarticulada por los acontecimientos y por las deudas de guerra sin contrapartida — ha favorecido a menudo la repatriación de valores.

Pero la verdadera influencia de las teorías nacionalistas ha venido como ampliación de las disposiciones protectoras de la industria nacional, al dificultar o impedir su ejercicio por parte de extranjeros, limitando al propio tiempo la posible participación de estos últimos en la dirección y administración y en el capital de las empresas industriales que operan en el país. Sirva de ejemplo lo dispuesto acerca del particular en los artículos 5.º y 6.º de la Ley de 24 de noviembre de 1939, aparte de las disposiciones que regulan el trabajo de extranjeros. A una y otras nos hemos referido ya en el curso de este ensayo.

Depuración política de elementos directivos

Un paso más en la intervención de que acabamos de tratar es el exigir a los elementos directivos de empresas determinadas, no sólo la nacionalidad del país donde operan, sino, además, una ideología política en consonancia con la imperante en el mismo.

Si MUSSOLINI pudo decir el 2 de octubre de 1935, ante la movilización para la guerra de Abisinia, “que Italia y Fascismo constituyen una identidad perfecta, absoluta e inalterable” y que “pueden creer lo contrario solamente los cerebros envueltos en la más crasa ignorancia respecto a los hombres y a las cosas de Italia” ⁽³¹⁾; y si ARRESE pudo decir en Málaga el 22 de julio de 1942 ⁽³²⁾ que “el Partido quiere la

⁽³¹⁾ *Habla el Duce*, página 47.

⁽³²⁾ *Diario de Barcelona*, 23 de julio de 1942.

colaboración de todos los españoles, pero precisamente por eso, y porque sabe que está en el único camino cierto de salvación de España, no puede tolerar la oposición de nadie"; se comprende que donde exista un Partido único sea "inadmisible que perdure la posibilidad de que en las direcciones de las grandes Empresas y... sus Consejos de Administración", "figuren personas... con reservas al nuevo Estado o aquellas que hayan demostrado algún desvío".

A evitar este peligro tiende la Ley de 25 de agosto de 1939 — de cuyo preámbulo son los conceptos que acabamos de reproducir — con la Orden complementaria de 19 de enero de 1940. En virtud de aquélla "quedan sujetas a la aprobación del Gobierno las designaciones ya hechas o que en lo sucesivo se hagan, de consejeros, administradores, directores o gerentes, o quienes con otra denominación hagan sus veces", en las Sociedades anónimas que se encuentren en casos determinados.

Disposiciones de igual carácter son, además, por un lado, las que regularon, en 1939, los despidos por motivos políticosociales relacionados con la actuación del interesado antes y durante la guerra de 1936-39; y por otro, de un modo especial, el Decreto de 25 de agosto de 1939, acerca de la reserva de un 80 por 100 de las plazas en organismos oficiales y empresas privadas, para mutilados, ex-combatientes, ex-cautivos y familiares de víctimas de la guerra.

Y hemos de referirnos, por último, a los Sindicatos, Corporaciones, Consorcios, Grupos, etc., cuya finalidad es no sólo económica, sino también, a menudo, política, principalmente si están intervenidos en una u otra forma por un Partido único, ya que, como dice VOLT, en *Gerarchia* ⁽³³⁾ "el sindicalismo puede identificarse con el nacionalismo, a condición que el Sindicato, expresión de los intereses particulares, reconozca la Nación como una entidad superior a él".

(33). Reproducido en *La Paraula Cristiana*, mayo de 1925, pág. 515.

“El Corporativismo — con palabras de GAY DE MONTELLÁ ⁽³⁴⁾ — no pretende, como el socialismo, que la fiscalización de las funciones y de las actividades económicas individuales sea encomendada a la burocracia estatal, inclinada siempre a imponer criterios teóricos a los productores, sino que por el contrario delega a los productores mismos, reunidos en Corporaciones, el control de la producción, formulando a tal efecto las normas que habrán de regularla... El Estado se limitará a confirmar con su sanción superior las decisiones corporativas, tanto las de orden administrativo o técnico, como las de orden legislativo o jurídico.”

Así se llega — dice PEREIRA ⁽³⁵⁾ — a “una economía en gran parte autodirigida, que substituye, con evidente ventaja, a los inevitables inconvenientes de la economía estatista”. Pero las directrices del Partido único no dejan de influir en las resoluciones de los expresados organismos. Y así, en Italia, en el Consejo de cada Corporación había tres representantes del Partido Nacional Fascista, aparte del Presidente, nombrado por Decreto del Jefe del Gobierno ⁽³⁶⁾; y en España, los mandos de cada Sindicato deben recaer precisamente en militantes del Partido ⁽³⁷⁾.

Estatificación o socialización

Al ocuparnos precedentemente de los monopolios fiscales, hemos dicho que su finalidad era, en general, conseguir nuevos ingresos para el Tesoro; pero pueden proponerse, también, objetivos políticos cuando se considere interesante poner bajo la directa dependencia del Gobierno actividades tales como la fabricación de armas y explosivos, los correos y teléfonos, la moneda y timbre, etc.

⁽³⁴⁾ *L'Estat Corporatiu*, página 35.

⁽³⁵⁾ *La batalla del futuro*, página 172.

⁽³⁶⁾ Ley de las Corporaciones, de 5 de febrero de 1934.

⁽³⁷⁾ Artículo 19 de la Ley sindical de 6 de diciembre de 1940.

Nos hemos ya referido a la Ley de 1.º de septiembre de 1939 que trata de la posible incautación, por parte del Estado, de ciertas industrias a cuyos propietarios no interese continuar explotándolas. Y la de 24 de noviembre del propio año — de la que también nos hemos ocupado — dice que “en casos excepcionales, cuando lo exija el interés supremo de la Defensa o Economía Nacionales, el Estado, por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, podrá incautarse de las empresas industriales”.

Al tratar de la nacionalización o socialización de actividades económicas, no podemos olvidar lo acaecido en Rusia, donde el primitivo “comunismo de guerra” evolucionó pronto hacia un “socialismo de Estado”. Sabido es que, proclamada el 25 de octubre (el 7 de noviembre según el Calendario Gregoriano) de 1917, la Dictadura del Proletariado, se declaró al día siguiente que “toda la tierra pasaba a la propiedad del pueblo”; el 14 de noviembre fué introducido el control obrero en las fábricas; el 14 de diciembre fueron nacionalizados los Bancos; el 25 de enero del año siguiente, las empresas de navegación; el 28 de junio, los ferrocarriles y las empresas comerciales de capital comprendido entre 300.000 y 1.000.000 de rublos; el 12 de agosto se declaraba abolida la propiedad urbana en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes.

El 29 de noviembre de 1920 se dictaban las disposiciones generales que debían regir en la gobernación de las industrias; pero en 24 de mayo de 1921, en virtud de la Nueva Política Económica (N. E. P.) se autorizó la propiedad privada de fábricas en las que trabajasen hasta 100 operarios, cifra elevada más tarde a 300. No nos extenderemos dando detalles acerca de la organización económica soviética, pero recordaremos que las fábricas se agrupan en *trusts* y éstos, verticalmente, en combinaciones, y que dos Comisarios — el de la industria ligera y el de la industria pesada — preparan los programas de trabajo, se ocupan de la provisión en primeras

materias, y coordinan las relaciones entre las diversas industrias.

Interesante conceptuamos, también, desde el punto de vista que nos ocupa, la dirección tripartita de fábricas y talleres, instaurada en los primeros tiempos del régimen bolchevique, a base de tres directores: uno político, representante del Gobierno, otro técnico — ingeniero o práctico — y otro en representación del soviet de la fábrica. Pero el propio LENIN, convencido de los inconvenientes del sistema, declaró necesario volver a la dirección unipersonal, reduciendo la intervención del soviet a los asuntos relacionados con el bienestar obrero.

En estos últimos tiempos — aunque la anormalidad de las circunstancias ha impedido el que fuese debidamente conocido y comentado — MUSSOLINI, en su calidad de Duce de la República Social Italiana, promulgó un Decreto-Ley sobre la socialización de las empresas, que marca “la etapa final de la evolución de un sistema de instituciones económicas que abarca desde la *Carta del Lavoro* hasta el *Istituto per la Ricostruzione Industriale*”, que, a su vez, “era ya el resultado de un complicado proceso de transformaciones y adaptaciones de diversos organismos y acabó por encargarse de dirigir la intervención del Estado en la industria italiana” ⁽³⁸⁾.

Esta ley, cuyo germen podría, quizá, hallarse en el discurso de MUSSOLINI del 23 de marzo de 1936, y que “significa, pura y simplemente, la colectivización de la propiedad de todos los medios de producción italianos” ⁽³⁹⁾, ofrece notables analogías — aunque el hecho parezca una paradoja — con el Decreto de Colectivizaciones dictado en Cataluña en 1936, durante la época roja, por los que a sí mismos se llamaban antifascistas. No pretendemos estudiar aquí este paralelismo; pero nadie negará que las tres directrices de dicha ley —

⁽³⁸⁾ *Documentación Económica*, febrero de 1945, página 56.

⁽³⁹⁾ Ídem, ídem.

“introducción del trabajo en la gestión de las empresas, transferencia a la propiedad del Estado de aquellas empresas que por su importancia trasciendan del ámbito privado, limitación de las utilidades del capital y participación del trabajo en dichas utilidades” ⁽⁴⁰⁾ — inspiraron, asimismo, el expresado Decreto y sus disposiciones complementarias; aunque aquí la dificultad de coordinar las ideas políticosociales de los dos grandes sectores que se disputaban la dirección del país — socialiscomunistas y anarcosindicalistas — diese lugar a vaguedades y contradicciones.

Por último, antes de terminar este apartado, hemos de aludir a las nacionalizaciones de entidades bancarias e industriales acordadas recientemente en Francia e Inglaterra.

III. EXPROPIACIONES POR UTILIDAD SOCIAL

Reformas agrarias

Así como las expropiaciones llamadas por utilidad pública, representan intervenciones de tipo económico — ya que son una forma de auxilio para favorecer la construcción de obras públicas o la implantación de industrias interesantes para el país — las conocidas por de utilidad social, se proponen facilitar la puesta en práctica de teorías sociales, más o menos avanzadas, que forman parte del ideario político de los partidos o regímenes imperantes.

Las reformas agrarias, cuya finalidad inmediata es la parcelación de latifundios para aumentar el número de pequeños propietarios cultivadores, se han llevado a la práctica, en varios países, al ofrecerse circunstancias políticas apropiadas. Tal ocurrió en diversos estados orientales europeos, constituidos o ensanchados después de la guerra de 1914-18, en los

(40) Ídem, página 61.

que existían latifundios propiedad de extranjeros: húngaros en Rumania, alemanes en Letonia, etc. También en España tuvo carácter político la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1931.

Aunque variable, naturalmente, según los casos, el mecanismo de las reformas agrarias consiste en expropiar en todo o en parte las grandes fincas rústicas que reúnan condiciones especiales, indemnizando a los propietarios, generalmente con Deuda Amortizable del Estado, del valor de sus fincas en su integridad o con una reducción progresiva, según la extensión de las mismas. La valoración se hace a base de precios corrientes de venta, o capitalizando los arrendamientos o la renta imponible. Y los nuevos propietarios, a su vez, pagan escalonadamente la totalidad o una determinada fracción del valor que se atribuya a la parcela que reciban.

Utilización de solares

Las reformas agrarias, como acabamos de ver, tienden a incrementar a la vez el número de propietarios agrícolas y la utilización de las fincas, ya que, a menudo, las de gran extensión son susceptibles de un mejor aprovechamiento; y análogamente, para conseguir una más rápida edificación, se ha recurrido a la expropiación o venta forzosa — en condiciones determinadas — de los solares sin edificar. Tal es la finalidad de la Ley de ordenación de solares de 15 de mayo de 1945.

“El vasto programa del régimen en cuanto a ordenación de pueblos — se lee en el preámbulo de esta ley — quedaría imposibilitado si el Estado se detuviera ante unos intereses que buscan una apariencia de justificación en conceptos absolutos, y, por tanto, arcaicos de la propiedad, pero que en realidad pugnan abiertamente con los más elementales derechos de nuestra vida nacional.” He aquí, sintetizada la finalidad políticosocial de estas apropiaciones o ventas forzosas dirigidas a evitar la especulación en terrenos y solares.

Colectivizaciones industriales

Al hablar de la ley de socialización de empresas de la República Social Italiana, hemos dicho que ofrecía muchos puntos de contacto con el Decreto de Colectivizaciones dictado en Cataluña en 24 de octubre de 1936; pero aparte de ello, la palabra colectivización, si en un sentido ha sido tomada como “atribución de las fábricas, atribución de las empresas industriales y comerciales, a la pequeña colectividad constituída por los trabajadores de aquella industria o de aquel comercio”, puede también interpretarse en el sentido de “atribuir las empresas industriales y comerciales a toda la colectividad” y “en este sentido — afirma RUIZ PONSETI ⁽⁴¹⁾ — la colectivización coincidía exactamente con la socialización”.

Prescindiendo de esta interpretación socialista, y prescindiendo también de la forma en que debe indemnizarse a los antiguos propietarios, si es que ello no se deja para más adelante o para nunca, la colectivización en el sentido sorelista de la disolución del Estado en una miríada de sindicatos autónomos, o sea de pequeños estados sindicales, es una utopía que no ha sido llevada en ninguna parte a la práctica. Pues ni aun en Cataluña, durante el período rojo, ni antes ni después de publicado el expresado Decreto, la colectivización en este sentido fué íntegramente aplicada, aparte del hecho de la influencia socialista en varias de sus disposiciones.

Algunos autores han creído ver analogías entre las colectivizaciones y las cooperativas de producción. Unas y otras son regidas, en efecto, por los trabajadores; pero en las últimas son estos mismos quienes han aportado el capital, y en las primeras dicha aportación la ha verificado el Estado al auto-regular su apropiación por parte de aquéllos.

Ello no impide el que existan cooperativas con capital ini-

(41) *Les empreses collectivitzades i el nou ordre econòmic*, págs. 6 y 7.

cial del Sindicato. Es “la propiedad sindical” a que se refiere GIRÓN en el discurso a que precedentemente hemos aludido ⁽⁴²⁾, llevada a la práctica en Albacete, cuando la organización sindical procedió a la adquisición de “la fábrica de muebles *Legorduru* y su entrega a los productores de la misma para su explotación en el régimen cooperativo” ⁽⁴³⁾.

⁽⁴²⁾ Linares, 2 de mayo de 1942.

⁽⁴³⁾ *La Vanguardia Española*, 11 de marzo de 1945.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO V

VENTAJAS E INCONVENIENTES

“Es costumbre — decía hace años FONT PUIG ⁽¹⁾ — aplaudir todas las manifestaciones de intervencionismo del Estado tipo siglo xx, siempre que no afecten a aquello en que al que aplaude, le gusta la libertad; con ello la política intervencionista está oyendo constantemente aplausos a sus decretos, aplausos un día de un lado, otro día de los de enfrente, pero aplausos siempre. Cuando menos — prosigue, — recomendemos que el aplauso sea discreto; que al aplaudir una buena disposición intervencionista, no se entienda que el aplauso va dirigido al principio general de un intervencionismo excesivo que se confunda con la Estatolatría”. No queremos que pueda tachársenos de partidistas en pro ni en contra del intervencionismo; y si hemos procurado llevar a cabo con la mayor objetividad el presente ensayo, es en esta segunda parte donde ello debe principalmente manifestarse, a fin de que “ni el interés, ni el miedo, el rencor ni la afición” — según la transcrita frase cervantina — tengan influencia alguna en las conclusiones que formulemos.

En los precedentes capítulos hemos pasado revista a las distintas manifestaciones del intervencionismo estatal, clasificándolas en cuatro grandes grupos, según se propongan finalidades sociales, económicas, financieras o políticas; y no po-

(1) *Diario de Barcelona*, 4 de febrero de 1927.

demos, por tanto, hablar de ventajas o inconvenientes del intervencionismo en general, sino que, por el contrario, es preciso estudiar separadamente cada una de las manifestaciones concretas a que nos hemos referido. En otro caso, correríamos el riesgo de desechar en globo todo intervencionismo, por aquello de *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defecto*; ya que no puede negarse que a todo intervencionismo puede aplicarse, en mayor o menor grado, lo que CARCELLER, el 26 de febrero de 1940, en su discurso del Instituto de Estudios Políticos ⁽²⁾, achaca a la economía dirigida: que “aniquila los valores y la iniciativa individual”. Y esta última, a la que, según ABOLLADO ⁽³⁾, “la organización más compleja del sistema burocrático... no puede nunca substituir”, es “el único motor de toda empresa eficiente”.

Decimos, no obstante, en mayor o menor grado, porque la civilización se basa en el abandono, por parte de los particulares, de un número cada vez más creciente de libertades individuales, en provecho del interés colectivo; y ello hace imprescindible algún intervencionismo, hasta el punto que difícilmente encontraríamos en la actualidad quien, en principio, se mostrase contrario a toda intervención estatal o municipal en las condiciones de trabajo o en la reglamentación de determinadas actividades económicas.

TALLADA ha dicho en la Asociación de Contables de Barcelona ⁽⁴⁾, que si la economía liberal era, como se la ha llamado, la de un Estado gendarme, se trataba de un mal gendarme, y que, en cambio, “la economía intervencionista, es decir, esa intervención moderada del Estado dentro de las funciones económicas, ésta sí que podría llamarse una economía de Estado-gendarme, porque era una economía que trataba de poner paz entre los intereses constituídos... trataba de implantar la justicia en las relaciones económicas de los hom-

⁽²⁾ *La Vanguardia Española*, 28 de febrero de 1940.

⁽³⁾ *El Español*, 13 de enero de 1943.

⁽⁴⁾ *Dyna*, abril de 1941, pág. 147.

bres, trataba de que no se desarrollasen los intereses de los unos en perjuicio de los intereses de los otros”.

Pero, como dice MARÍN LÁZARO ⁽⁵⁾, debe evitarse con dicha intervención, “matar de oficio toda concurrencia, ahogar en germen hasta el propósito de venturosas iniciativas, asegurar a cada industria su propio coto donde vegeta más que vive a merced del acordonamiento que el Poder público ponga para resguardarla de todo riesgo, lo que no solamente es premiar de antemano la pereza, poner como modelo de actuación la ociosidad y adormecer el progreso industrial, sino también inyectar anemia incurable en las entrañas de la industria patria, reducirla a planta de estufa, incapaz de vivir a la intemperie de la concurrencia mercantil, e inhabilitarla, tanto para salir de las fronteras patrias al palenque de las contiendas internacionales, como para conservar el propio mercado nacional, en mala hora asegurado por la mezquina concepción de un Poder público cuya policía entera no bastaría para dar vida mercantil al cuerpo que él mismo, con su estancamiento, condenó a la muerte”.

Y ahondando el propio tema — estudiado, también, por CONDLIFFE ⁽⁶⁾ — dijo ROBERT en la inauguración del Curso 1942-43 en la Universidad Industrial de Barcelona, que “la protección ha de servir para compensar desventajas congénitas respecto de la industria extranjera, tales como un mayor coste de los transportes, de la energía, de la mano de obra, o de la falta de experiencia industrial en los primeros tiempos. Pero lo que no puede admitirse es que la protección sirva para trabajar con maquinaria anticuadísima, que hace muchos años que debía estar amortizada, para emplear métodos de trabajo poco racionales, o para descuidar el estudio e investigación de los adelantos de la industria extranjera, sesteando al amparo del arancel” ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ *La actuación de las Economías nacionales dentro de la vida económica internacional*, página 208.

⁽⁶⁾ *La Reconstrucción del Comercio mundial*, página 79.

⁽⁷⁾ *Dyna*, enero de 1943, páginas 37 y 38.

Sea cualquiera la forma de intervención que se adopte y las modalidades de la misma, lleva siempre ella consigo, como dijo AREILZA en el Instituto de Estudios Políticos, una “hipertrofia burocrática” y “este burocratismo a ultranza acaba por convertirse en una verdadera carga que pesa sobre el sector económico de la producción correspondiente, a cuyas expensas vive”, de manera que “acaba por no saberse si son los organismos de agrupación los que deben servir a la economía, o viceversa” (8).

Y “este abandono de todas las funciones en favor del Estado — dijo PEREIRA en el Teatro de San Carlos, de Lisboa, el 5 de junio de 1933 (9), — esta renuncia enfermiza a que venimos asistiendo, pueden tener consecuencias que van más allá de la expectativa más sombría... Todo lo que los Estados están haciendo por estos mundos, subrogándose a la iniciativa privada, presa de pánico, comprando, vendiendo, sembrando, prestando, reteniendo y repartiendo, puede no ser más que el primer paso hacia una nueva esclavitud económica”.

Dificultad, por último, de cualquier intervencionismo, es la acertada designación del organismo o individuo que ha de llevar a cabo la intervención. “Debe pensarse — escribe ABOLLAO (10) — que en el intervencionismo absoluto se substituye el pensamiento y el esfuerzo de toda una variada gama de elementos técnicos, comerciales y financieros, por la inteligencia de un solo individuo, cuya capacidad, por lo tanto, ha de ser, como es lógico, superior a la de aquéllos que substituye, llegando en último límite a embotar todo espíritu de iniciativa en los elementos tan automáticamente dirigidos.”

Nos encontramos, pues, con el dilema: “O tenemos que servirnos de elementos conocedores, que, por tanto, han de tener sus intereses en el mismo problema que ha de intervenir, o se ha de hacer uso de personas que, aun siendo bien

(8) *La Industria española y la Sindicación industrial*, página 17.

(9) *La batalla del futuro*, página 35.

(10) l. c.

intencionadas, no se dan cuenta de que no es lo mismo hacer sobre el papel un proyecto de intervención, que aparentemente es claro y concreto, que luego, en la realidad, llevarlo a la práctica" ⁽¹¹⁾.

No olvidemos que, como dijo CAMBÓ ⁽¹²⁾, "es mucho más fácil dominar los problemas políticos y sociales y militares y diplomáticos que los problemas económicos y monetarios. Frente a los primeros, una dictadura enérgica... tiene la victoria asegurada. Frente a los últimos, su derrota es segura si quiere contrariar las leyes eternas que las regulan". "La economía — ha dicho FRANCO ante el Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S. el 17 de julio de 1941 ⁽¹³⁾ — es un todo armónico formado al correr de los años, que no se puede impunemente alterar."

Y terminaremos este que podríamos llamar "turno en contra de la totalidad", con las palabras de OLIVEIRA SALAZAR, reproducidas por PEREIRA ⁽¹⁴⁾, cuando dice que todos los ensayos de intervencionismo sólo han contribuido a "esterilizar las iniciativas, recargar el número de funcionarios, aumentar desmesuradamente los gastos y los impuestos, disminuir la producción, dilapidar gran parte de la riqueza privada, restringir la libertad individual, convertirlo, en fin, en insostenible enemigo de los pueblos".

Estas objeciones, aunque aplicables, en gran parte, a todo intervencionismo, no puede negarse que, en la mente de los impugnadores se circunscribía, a menudo, a determinadas modalidades del mismo. La economía portuguesa, por ejemplo, no puede negarse que — aun siendo autodirigida y no dirigida directamente por el Estado — es intervenida, con sus Sindicatos nacionales, sus Gremios, su condicionamiento industrial, etc.

⁽¹¹⁾ Idem, ídem.

⁽¹²⁾ *La Valoració de la Pesseta*, página 50.

⁽¹³⁾ *Diario de Barcelona*, 18 de julio de 1941.

⁽¹⁴⁾ l. c., página 33.

Y ABOLLADO, en el propio artículo de donde hemos reproducido los anteriores párrafos, dice que “el Estado no puede consentir que se use y abuse caprichosamente del suelo y subsuelo y de las posibilidades industriales de España, desperdiciando materiales y energías, sino que debe encauzar éstas en el sentido más beneficioso, estudiando los cultivos de mayor rendimiento en las diversas zonas, de acuerdo con las necesidades de nuestro consumo o de las mejores condiciones de nuestro país con respecto a otros, posibles importadores, orientando la fabricación de productos para los que nuestro país se encuentra especialmente capacitado”, y que, aun cuando “el Estado liberal, al dejar libre la iniciativa individual, produjo inicialmente un notable impulso a todas las actividades, dando lugar a un evidente progreso material”, no obstante, “esa misma libre iniciativa originó que los mejor dotados fueran acumulando riquezas, bien en forma visible o bien por concentración de medios de producción, originándose un grave desequilibrio de posición económica”.

El carácter circunstancial y transitorio del intervencionismo del Estado ha sido, en estos últimos años, afirmación corriente por parte de destacadas personalidades. Ya en 18 de julio de 1943 dijo FRANCO que “pasada esta situación de anormalidad es nuestro firme propósito liberar a las actividades españolas de las evitables intervenciones burocráticas” ⁽¹⁵⁾, y a los pocos meses, en 2 de diciembre, CARCELLER, en su calidad de ministro de Industria y Comercio, hablaba en las Cortes de las “intervenciones inevitables todavía, pero con el pensamiento puesto en que cesen tan pronto las circunstancias lo permitan” ⁽¹⁶⁾.

Pero “el Estado español, opuesto al intervencionismo a ultranza — con palabras de CORREA en la inauguración del Consejo Económico Sindical de la provincia de Barcelona ⁽¹⁷⁾

⁽¹⁵⁾ *Diario de Barcelona*, 19 de julio de 1943.

⁽¹⁶⁾ *Ya*, 3 de diciembre de 1943.

⁽¹⁷⁾ *El Noticiero Universal*, 29 de mayo de 1945.

— escoge la fórmula sindical de agrupaciones gremiales que sean el instrumento para encauzar la economía”. Se busca así una intervención indirecta a base de una autodirección por los propios interesados, agrupados en Sindicatos, análogamente a la finalidad, en este sentido, de las Corporaciones fascistas italianas y de los Gremios portugueses.

A la “autodisciplina de las categorías interesadas” se refería MUSSOLINI con motivo de la nueva Ley de las Corporaciones de 5 de febrero de 1934; y casi simultáneamente, decía OLIVEIRA SALAZAR que “a través de las corporaciones caminamos hacia la economía autodirigida, en vez de creernos solamente inclinados hacia la economía dirigida por los gobernantes, como simple reacción contra los excesos del liberalismo” ⁽¹⁸⁾.

Y en nuestro país, declaraba SANZ ORRIO a un agente informativo sindical ⁽¹⁹⁾ que “los Sindicatos deben aspirar al honor de asumir funciones que hoy, accidentalmente, realiza el Estado, pues no hay que olvidar que la Falange propugna un Estado nacionalsindicalista y no un socialismo de Estado”; y un año más tarde, insistía acerca del asunto al decir, ante una Concentración reunida en Zaragoza el 17 de mayo del año 1943, que los Sindicatos “recaban en todo momento, con una energía no exenta de respeto a los Poderes públicos, que depositen en ellos su fe, que les deleguen las funciones que el programa nacionalsindicalista les otorga con una prudente graduación, necesaria, sin prisas, pero también sin pausas”.

No podemos, sin embargo, prescindir de los peligros de este “gobierno de los hombres de negocios dirigido por y para los hombres de negocios”, y como “no es el *laissez faire* sino la intervención lo que ha conducido a tales resultados” ⁽²⁰⁾ es de la máxima importancia ver la manera de aprovecharse de sus conocimientos en la materia y de su experiencia profe-

(18) PEREIRA, *La batalla del futuro*, página 64.

(19) *Pueblo*, 20 de enero de 1942.

(20) CONDLIFFE, *La reconstrucción del comercio mundial*, página 36.

sional, sin que su actuación favorezca un monopolio de hecho o una competencia desleal.

En la concepción nacionalsindicalista, por lo demás, como se lee en *Arriba* ⁽²¹⁾, “el Sindicato, unidad natural, se convierte en instrumento del Partido, entendido éste como auténtica expresión política nacional del Estado”; y por ello ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, al dar posesión de sus cargos, en 12 de julio de 1941, al jefe y al vicesecretario del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, pudo hablar de “un cambio de orientación fundamental en la marcha del Sindicato” en cuanto “los nuevos mandos nacionales no representan intereses industriales, sino políticos” ⁽²²⁾. Así se ha procurado evitar el peligro a que aludía ABOLLADO, de servirse de elementos interesados en los problemas a resolver, y defender más todavía los supremos intereses del Estado que con la sola condición de ser dichos mandos militantes del Partido, que establece en su artículo 19, la Ley Sindical de 5 de diciembre de 1940.

Antes de seguir adelante, creemos de interés dedicar algunos párrafos a la influencia que la intervención estatal pueda haber tenido en la decadencia del espíritu de empresa. La economía dirigida “aniquila los valores y la iniciativa individual”, dijo CARCELLER en el Instituto de Estudios Políticos ⁽²³⁾; pero, por otro lado, es a menudo, el adormecimiento de esta última lo que hace preciso el incremento de la primera, solicitado incluso por los mismos intervenidos, como recordaba BELTRÁN en el texto precedentemente citado ⁽²⁴⁾.

Pues no debe olvidarse que si la intervención expresada ha de reducirse a “garantizar los derechos individuales en cuanto no se opongan a los fines morales de la sociedad” y a “suplir la insuficiencia de la iniciativa particular en aquellas em-

(21) Reproducido en *Diario de Barcelona*, 22 de febrero de 1942.

(22) *Diario de Barcelona*, 13 de julio de 1941.

(23) *La Vanguardia Española*, 28 de febrero de 1940.

(24) *Diario del Comercio*, 13 de diciembre de 1933.

presas superiores a las fuerzas de los individuos" ⁽²⁵⁾, cuanto más estas fuerzas disminuyan, tanto más fácilmente dicho límite será alcanzado.

Tiene la iniciativa individual "una fuerza capaz de salvar las mayores crisis, las más grandes dificultades... La Economía privada ha salvado todas las crisis debidas a la concurrencia, todos los desastres que ha producido la moda, todos los desusos que han creado los sucedáneos; todas las dificultades las han ido venciendo con la energía multiplicada, los productores industriales y agrícolas de España" ⁽²⁶⁾; y como dijo GARNICA en la Junta General del Banco Español de Crédito ⁽²⁷⁾, "lo que hay en el fondo de la Economía general del país, lo que ha producido el desarrollo de la riqueza del mundo, es la iniciativa privada, y en ella hay que tener fe, confianza, aspirando a que se pueda llegar al final de este período" de limitación de la iniciativa individual, a causa de las graves circunstancias derivadas de la guerra.

Por ello "el Estado — dijo FRANCO en el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona el 28 de enero de 1942 — no quiere en lo más mínimo cohibir las actividades de la iniciativa particular, sino todo lo contrario" ⁽²⁸⁾, ya que "reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación" ⁽²⁹⁾, aun cuando la "permitirá mientras sea compatible con el interés colectivo" ⁽³⁰⁾. Es el criterio sustentado repetidamente por MUSSOLINI, al afirmar que debe respetarse "la economía privada" y que el Estado sólo ha de intervenir "cuando la economía individual falla, o cuando es inexistente o insuficiente" ⁽³¹⁾. Y es el criterio — como recuerda RUTTEN ⁽³²⁾ — de "la doctrina social de la Iglesia",

⁽²⁵⁾ *Diario de Barcelona*, 3 de junio de 1942.

⁽²⁶⁾ CAMBÓ, conferencia en el Cine Goya, Madrid, 11 de abril de 1935.

⁽²⁷⁾ *Reico*, enero de 1945, página 10.

⁽²⁸⁾ *Diario de Barcelona*, 29 de enero de 1942.

⁽²⁹⁾ Fuero del Trabajo, 9 de marzo de 1938, declaración XI, 6.

⁽³⁰⁾ Normas programáticas del nuevo Estado Español, número 8.

⁽³¹⁾ Discurso en el Senado, 13 de enero de 1934.

⁽³²⁾ *La doctrina social de la Iglesia*, página 127.

que “ha rechazado siempre la concepción pagana, que hace del individuo una simple rueda en el vasto mecanismo del Estado”, y afirma que éste “tiene por misión... estimular y recompensar la iniciativa privada, sin tener jamás el derecho de impedirla o de restarle bríos”.

Pero, como dijo OLORIZ en la Universidad de Barcelona el 1.º de mayo de 1940 ⁽³³⁾, “la excesiva ingerencia del Estado en los negocios particulares, la excesiva complicación burocrática que dificulta los movimientos y que retarda las operaciones, son contrarias a la iniciativa individual” y “la limitación inmotivada de ganancias y el atacar o denigrar sistemáticamente a las clases productoras que constituyen una verdadera selección, perjudica a la iniciativa individual”.

Si, como dice TALLADA ⁽³⁴⁾ “necesita el empresario poseer una completa libertad de decisión”, es evidente que “en cuanto la evolución del concepto económico del Estado viene a limitar la plena libertad del empresario, la institución que éste representa inicia su decadencia”. En otra parte ⁽³⁵⁾ nos hemos ocupado de la función social del empresario, haciendo notar que coinciden en éste diversas cualidades y que no siempre pueden sus aspiraciones materializarse en ganar dinero. Ha dicho SANZ ORRIO en el Teatro Cervantes de Segovia que “los patronos deben considerar... que la empresa no es sólo suya”, que “ante todo es de España, y también, en la esfera correspondiente, de todos los productores que en ella trabajan” ⁽³⁶⁾.

No pretendemos sacar consecuencias de esta afirmación, análoga por lo demás, por muchas que sean las divergencias doctrinales y prácticas entre el nacionalsindicalismo y el nacionalsocialismo — forma alemana, este último, del bolchevis-

⁽³³⁾ *Problemas técnicos de importancia económica en la nueva organización de España*, página 68.

⁽³⁴⁾ *Economía Política*, página 188.

⁽³⁵⁾ *Dyna*, abril, mayo y diciembre de 1945, páginas 194, 269 y 670.

⁽³⁶⁾ *Diario de Barcelona*, 31 de marzo de 1942.

mo, según expresión del príncipe STAHLLENBERG ⁽³⁷⁾ y reiteradamente combatido en ciertos aspectos por Pío XII, en especial en el discurso del 2 de junio de 1945 ante el Sacro Colegio Cardenalicio ⁽³⁸⁾ — al principio inspirador de la Ley alemana del Trabajo nacional de 20 de enero de 1934: “la economía pertenece, por encima de la concepción burguesa de la sociedad, a la comunidad del pueblo alemán”. Pero estimamos que si el Estado y los “productores” son copropietarios de la empresa, las consecuencias de esta copropiedad no deben concretarse al reparto de los beneficios positivos en caso de producirse.

Dice ECHÁVARRI ⁽³⁹⁾ que “la principal objeción que siempre se ha formulado contra la participación del obrero en los beneficios” es “lo injusto de que no participe también en las pérdidas”; y que si “se alega que no puede participar en ellas quien no tiene intervención en la dirección de la empresa... esto es dar la razón a los que impugnan la participación” expresada, fundándose en que los beneficios, “en cuanto son debidos a la buena dirección del negocio corresponden al patrono y en cuanto se deben a causas naturales, como una alza de precios imprevista, pertenecen también al patrono en compensación a las pérdidas” que en otro caso pueda experimentar. “Haría que poseer una gran dosis de candor ingenuo — afirma el P. RUTTEN ⁽⁴⁰⁾ — para imaginar que, en una empresa, pudiera haber dos clases de asociados que gozaran de los mismos derechos: unos que participaran de los beneficios y de los riesgos; y los otros, que se atribuyeran el derecho de eximirse de los riesgos, pero que reclamaran el de participar de los beneficios.”

Es por ello que “la participación del trabajo en las utilidades — se lee en “Los conceptos inspiradores” del Decreto-

(37) *La Veu de Catalunya*, 25 de julio de 1934.

(38) *Diario de Barcelona*, 3 de junio de 1945.

(39) Prólogo a *Hacia la Paz social*, de QUINTANA, página 23.

(40) *I. c.*, página 115.

Ley sobre socialización de empresas en la República Social Italiana ⁽⁴¹⁾ — tampoco... se concibe ni puede realizarse si el trabajo no adquiere conocimiento y conciencia de la actividad productiva de la empresa, de sus problemas, de sus exigencias y de sus posibilidades, asumiendo plenamente la figura de colaborador en la gestión de la propia empresa”.

Y “cuando el Estado — dice RAS ⁽⁴²⁾ — se entromete sin cesar en la intimidad personal de las empresas productoras, sean individuales o colectivas, además del perjuicio material que tal intromisión pueda suscitar, se origina un grave daño psicológico. El productor llega a aborrecer su labor al igual que ciertos pájaros aborrecen los huevos que han sido tocados en el nido por el hombre. Al perder el cariño personal a su empresa, no le queda otra conexión con ella que el apetito de lucro, y cuando este criterio de la ganancia se hace exclusivo, adquiere una marcada significación antisocial... Coartar la personalidad del individuo equivale a dificultar sus iniciativas y constreñirla a un ambiente gregario de rutina en que su horizonte económico se ciñe a su interés egoísta e inmediato”.

Puede trabajarse por el placer que el trabajo proporciona o con el exclusivo objeto de ganar dinero. En el primer caso es conveniente una cierta libertad de movimientos, al paso que en el segundo puede serlo un cierto intervencionismo. El empresario romántico e idealista del siglo XIX prefiere lo primero; pero el que busca la tranquilidad y cómo evitar los peligros, encontrará a menudo en el segundo un monopolio de hecho — cuando no de derecho — al dificultar y hasta eliminar el peligro de la presencia de nuevos competidores en el mercado.

Las intervenciones de finalidad política, de que hemos tratado en el capítulo IV, se apartan de nuestro objeto, pues pueden aplicárseles las transcritas palabras de ROBERT ⁽⁴³⁾:

⁽⁴¹⁾ *Documentación Económica*, febrero de 1945, página 61.

⁽⁴²⁾ *Reflexiones sobre la Economía*, página 200.

⁽⁴³⁾ *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 128.

“aquí la economía no tiene nada que decir, pues se trata de algo completamente distinto del desenvolvimiento de la producción nacional”; y es precisamente, desde un punto de vista exclusivamente económico que nos hemos propuesto llevar a cabo este ensayo.

Prescindiremos, por tanto, de señalar las ventajas e inconvenientes de aquellas medidas que tiendan a desarrollar las industrias de armamento o la potencialidad militar del país, a independizar el Estado de la industria extranjera o de la privada nacional, en sus necesidades que podríamos llamar de soberanía; y hasta de las que se proponen llevar a la práctica teorías sociales más o menos avanzadas. En todos estos casos la economía ha sido subordinada a la política y sería, en todo caso, desde un punto de vista político que su discusión podría ofrecer interés; aunque LARRAZ, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha dicho que “no puede haber gran Nación, ni gran Estado, ni gran Imperio, sin una política acorde con la economía” (44).

Ocupémonos, sin embargo, brevemente de la autarquía, en el sentido que precedentemente hemos indicado; y empecemos por sentar que aparte de aquella cuyos límites territoriales coinciden con las fronteras del Estado, se ha hablado de otras de mayor o de menor extensión. SUANCES, a la sazón ministro de Industria y Comercio, en el acto de constituirse la Subcomisión Reguladora del Algodón, dijo que “otro problema, en realidad de la autarquía, es desplazar el centro de gravedad de las industrias que han radicado, casi exclusivamente, en una sola región” (45), criterio que no ha dejado de informar, más tarde, algunas resoluciones acerca de autorización o denegación de nuevas industrias (46). Este criterio, exagerado, conduciría a propugnar lo que PLATÓN pone en boca de SÓCRA-

(44) *La época del mercantilismo en Castilla*, página 222.

(45) *La Vanguardia Española*, 8 de agosto de 1939.

(46) *Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona*, 6 de noviembre de 1945.

TES ⁽⁴⁷⁾, preguntando si sería una “ciudad bien administrada” aquella en la que existiese “una ley que ordene” a los individuos “tejerse y lavarse sus vestidos y fabricarse sus zapatos... produciendo y haciendo cada uno aquello que es propio de él”.

Pero como, según SANTOS, “ningún país, por dilatado que sea su territorio o su imperio, es autosuficiente” y “todos necesitan algo de los demás” ⁽⁴⁸⁾, en Alemania — afirma WEBER ⁽⁴⁹⁾ — “se ha comprendido que tratar de alcanzar una completa independencia del extranjero no merece la pena políticamente ni es posible técnicamente”. Ningún país — dice RICARDO ⁽⁵⁰⁾ — “puede importar durante mucho tiempo sin exportar, y ninguno puede exportar a menos que importe también”; y “los países industriales más intensamente productores — afirma GAYDA ⁽⁵¹⁾ — son también aquellos más intensamente consumidores de productos industriales extranjeros”. Ello aparte del hecho que cuanto menor sea el territorio geográfico sobre el que la autarquía se extienda, tanto mayores serán sus inconvenientes.

Es por ello que VAN ZEELAND, en su informe de enero de 1938, sobre los obstáculos que se oponen a la intensificación del comercio internacional, dice que aquélla “sólo es posible en un mercado nacional muy extenso” ⁽⁵²⁾. No olvidemos, sin embargo, que, afirma ROBBINS ⁽⁵³⁾, “la ganancia de la reagrupación regional o de la constitución de unidades más amplias de cualquier clase, no deriva de los beneficios de una mayor autosuficiencia, sino de la abolición de la autosuficiencia específica de cada una de las regiones amalgamadas”; y añade que “no es la autarquía posible de la zona en

⁽⁴⁷⁾ *Carmides*, 161 y 162.

⁽⁴⁸⁾ *Las materias primas*, página 53.

⁽⁴⁹⁾ *Compendio de Política Económica*, página 5.

⁽⁵⁰⁾ *Principios de Economía Política y de Tributación*, página 249.

⁽⁵¹⁾ *El mañana económico de Europa*, página 88.

⁽⁵²⁾ TALLADA, *Política económica en los tiempos de crisis*, página 61.

⁽⁵³⁾ *La planificación económica y el orden internacional*, página 125.

su conjunto, sino la ausencia de ésta en cada uno de los estados de la Federación, lo que constituye la ventaja de la Unión Norteamericana”.

Por este motivo, de la autarquía nacional se pasó a propugnar la autarquía de las grandes zonas, y concretamente de la europea, lo que — dice VENTOSA, en su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ⁽⁵⁴⁾ — “es precisamente lo más opuesto a la independencia económica de cada uno de los países que integran nuestro Continente”, aparte de las “dos graves dificultades” que, según BRESCIANI ⁽⁵⁵⁾, ofrece la idea del “gran espacio”: la primera radica en la imposibilidad de jerarquizar los viejos pueblos europeos, todos ellos cargados de historia y de tradiciones, bajo el mando de uno de ellos; la segunda, de tipo puramente económico, descansa en la demostración estadística de la insuficiencia autárquica europea”.

Se opone VIRGINIO GAYDA ⁽⁵⁶⁾ a “los nuevos nacionalismos económicos” que favorecen “la creación artificial de industrias, a menudo sin base económica, inspiradas solamente por la ambición política”; y en la Feria de Viena de 1940 dijo FUNK que “el querer fabricarlo todo por sí mismo en cada país, desde los botones de pantalón hasta las locomotoras, creando al efecto industrias antieconómicas de elevados costos que no tienen ninguna razón de existir y que únicamente pueden ser mantenidas en pie merced a subvenciones, prohibiciones de importación o aumento de tarifas aduaneras, “esto es una locura económica”, ya que — como se lee en uno de los comentarios que suscitó ⁽⁵⁷⁾, “los botones de pantalón y las locomotoras se producirán allí donde puedan fabricarse más económicamente” y “ganará terreno una sana división del trabajo entre los países que elevará el nivel de vida de to-

⁽⁵⁴⁾ *La permanencia de las leyes económicas*, página 27.

⁽⁵⁵⁾ NAHARRO, *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 156.

⁽⁵⁶⁾ *El mañana económico de Europa*, página 22.

⁽⁵⁷⁾ *Diario de Barcelona*, 10 de agosto de 1941.

dos dentro de la nueva y absoluta independencia de nuestra nueva Europa continental”.

Si la autarquía, pues, no puede limitarse a un país, ¿por qué el llamado “espacio vital” ha de reducirse a un Continente, y no extenderse a toda la superficie terrestre? Si, en definitiva, los “grandes espacios económicos” han de realizar entre sí intercambios de mercancías y servicios, ¿son imprescindibles los “estados directores” de que habla, por ejemplo, LANDFRIED ⁽⁵⁸⁾, a los que han de subordinarse los demás del “espacio” correspondiente? La respuesta a estas cuestiones nos llevaría a consideraciones más políticas que económicas; pero indudablemente, con un paso más, desaparecida no sólo la autarquía, sino toda protección a la industria nacional, llegaríamos a un librecurso integral y, en este aspecto, la doctrina de GAYDA y de FUNK, del fascismo y del nacional-socialismo, coincidiría con la de ADAM SMITH y sus discípulos.

Pero, además, la autarquía ha sido muy combatida desde el punto de vista de la solidaridad humana. En su clásico *Sistema nacional de Economía Política* ⁽⁵⁹⁾ decía ya LIST que “la Naturaleza lleva poco a poco a las naciones hacia esta asociación suprema, invitándolas por la variedad de climas, de tierras y de producciones, al cambio, y por la plétora de población y por la abundancia de capitales y de inteligencia, a la emigración y a la fundación de colonias”. Y, en estos últimos años, el Pontífice felizmente reinante, S. S. Pío XII, en su Encíclica *Summus Pontificatus*, ha dicho que “los pueblos en su desarrollo y en sus diferencias conforme a las condiciones de vida y de cultura, no están destinados a romper la unidad del género humano, sino a embellecerla y enriquecerla con la comunicación de sus peculiares dotes y con el recíproco intercambio de bienes” ⁽⁶⁰⁾, idea expuesta ya por su

⁽⁵⁸⁾ *El Nuevo Orden Económico de Europa*, página 34.

⁽⁵⁹⁾ Página 30.

⁽⁶⁰⁾ *Boletín Oficial del Obispado de Barcelona*, 20 de noviembre de 1939, página 414.

antecesor Pío XI cuando trata de la necesidad para las naciones de “unir sus intentos y esfuerzos para promover... una franca y venturosa cooperación en la economía internacional” ⁽⁶¹⁾.

En este orden de ideas, ha dicho LARRAZ en Zaragoza ⁽⁶²⁾, que las “doctrinas nacionalistas autárquicas... eran la negación de los progresos económicos internacionales del siglo XIX”; VENTOSA ⁽⁶³⁾ que “la autarquía, como sistema general y como ideal económico, representa un concepto antinatural, contrario a los principios que regulan y condicionan la producción y el sentimiento de sociabilidad entre los hombres”; CORDEL HULL ⁽⁶⁴⁾, que si las tendencias autárquicas “predominasen en todas partes, la humanidad sería sumergida en un período de caos y de empobrecimiento e, inevitablemente, en una decrepitud espiritual y moral”; AREILZA, en *Arriba* ⁽⁶⁵⁾, que la autarquía llevada al límite, “daría lugar a un caos absurdo que yugularía el comercio internacional, dando probablemente al traste con la propia civilización”. Y para terminar estas citas, en la Información Económica de la Embajada de Alemania en Madrid ⁽⁶⁶⁾ se lee que “el seguir íntegramente por derroteros autárquicos significaría renunciar a todas las ventajas que ofrece el mundo para el abastecimiento de los seres humanos con productos alimenticios”.

Se ha dicho que la autarquía debe considerarse como un régimen excepcional en las relaciones entre los pueblos. Sólo así puede admitirse que en 1943, mientras millones de individuos carecían de alimento, la C. A. D. E. quemase en sus fábricas de electricidad de Buenos Aires, como a substitutivo del carbón, y después de adaptadas al nuevo combustible las parrillas de sus hogares, 305.000 toneladas de trigo y 17.000

⁽⁶¹⁾ *Quadragesimo Anno*, II, V.

⁽⁶²⁾ *Solidaridad Nacional*, 25 de abril de 1945.

⁽⁶³⁾ l. c., página 27.

⁽⁶⁴⁾ *Le Petit Journal*, 21 de mayo de 1940.

⁽⁶⁵⁾ *Dyna*, julio de 1939, pág. 256.

⁽⁶⁶⁾ Número 87, del 1.º de junio de 1942.

de maíz ⁽⁶⁷⁾. Y es que, como dice FUENTES IRUROZQUI ⁽⁶⁸⁾, si los pueblos “en su vida política y en sus destinos, tienen cada cual un porvenir en función de su historia y de su cultura, en el orden económico son siempre, quiéranlo o no, miembros de una colectividad única, como única e indivisible es la economía mundial considerada en conjunto, aunque la defensa de cada particular interés pueda señalar un límite al desprendimiento, basado en los elementos necesarios para conservar, con el respeto que una efectividad de fuerza proporciona, cada soberanía basada en factores étnicos, históricos y políticos”.

Por último, aunque sea brevemente — pues no pretendemos profundizar el asunto, — hemos de referirnos a los que afirman que la autarquía es garante de la paz, en cuanto aleja el peligro de que una Nación pueda ser vencida por el bloqueo. Quizá sea ello cierto en determinados casos, pero si admitimos esta hipótesis, habremos de concluir, también, que facilitará la guerra si quien practica la autarquía no es la eventualmente agredida, sino la agresora. El hombre que no necesita — o se cree no necesitar — de los demás, nunca buscará el vivir en paz con sus vecinos, como el que está convencido de que necesita de ellos para participar en las mutuas ventajas que se derivan de la amistad con sus semejantes.

“Puede asegurarse — dice DONALDSON ⁽⁶⁹⁾ — que la interdependencia de las naciones en materia de recursos, lo mismo que en otros aspectos económicos, si bien es causa de rivalidad y origina la competencia, que es la característica del orden económico, produce mucha menos fricción que buena inteligencia, debido a la mutualidad de intereses o al carácter compensador de los distintos influjos.”

(67) CHADE, *Memoria del ejercicio 1943-44*.

(68) *Tres ensayos sobre el nuevo orden económico*, página 35.

(69) *Relaciones económicas internacionales*, volumen II, página 163.

CAPÍTULO VI

VENTAJAS E INCONVENIENTES

(Continuación)

Dedicado el capítulo precedente a las ventajas e inconvenientes generales a toda intervención estatal, y de un modo particular a la que tiene una finalidad política, nos ocuparemos en el presente y en los que siguen de las que pueden atribuirse a otras finalidades.

Pero como a menudo no es fácil distinguir a primera vista si la finalidad concreta que con la intervención se persigue — y aparte de su aspecto político — es social, económica o financiera, modificaremos ligeramente en estos capítulos la clasificación anterior, con objeto de evitar duplicidades, agrupando en el segundo grupo lo relativo a regulación industrial y a la política de capitalizaciones, y en el tercero los impuestos; dejando, no obstante, en el primero las medidas de higiene y seguridad y el fomento del ahorro. Estudiaremos, asimismo, en el tercero los monopolios fiscales, y en el segundo los privados que puedan ser consecuencia de la regulación industrial.

Vamos, pues, a ocuparnos sucesivamente de los siguientes extremos:

Finalidades sociales . . .	{	Legislación social.
		Policía industrial.
		Protección al ahorro.
		Política de tasas y racionamientos.
		Lucha contra el paro forzoso.
		Lucha contra el pánico.

Finalidades económicas.	{	Protección a la industria nacional.
		Regulación industrial.
		Mejora de rendimiento.
		Política de capitalizaciones.
Finalidades financieras . .	{	Recursos para el tesoro.
		Defensa de la moneda nacional.
		Lucha contra la inflación.

I. LEGISLACIÓN SOCIAL

Difícilmente encontraríamos — como hemos dicho — quien en estos tiempos se opusiese, en principio, a la intervención estatal en la fijación de las condiciones generales de trabajo. “Exige... la equidad — escribe LEÓN XIII ⁽¹⁾ — que la autoridad pública tenga cuidado del proletario, procurando que participe de lo que él aporta a la utilidad común, que con cobijo donde poder reposar, vestido con que cubrirse y protección con que defenderse de aquellos que atenten contra su bien, pueda, con menos dificultades, soportar la vida.” Tén-gase en cuenta, además, que la elevación en el nivel de vida de las clases trabajadoras, que constituyen un gran porcentaje de la población total, repercutirá en un notable incremento del consumo y, por tanto, de todas las actividades económicas.

“El beneficio — ha dicho DEAT ⁽²⁾, considerando incluido en él las remuneraciones al capital y al trabajo — es un crédito abierto sobre los otros productos humanos” y de aquí nace “el derecho del productor a las otras producciones..., a las riquezas creadas por los otros hombres.”

Pero, si bien el Estado debe intervenir en la fijación de las condiciones de trabajo, han de ofrecer éstas cierta elasticidad para tener en cuenta las circunstancias especiales de cada ramo

⁽¹⁾ *Rerum Novarum*, VI.

⁽²⁾ Prefacio a *Un plan français de Economía dirigida*, página 12.

de actividad, pues lo contrario sería en perjuicio de la empresa, y la ruina de ésta no favorecería en manera alguna a los que de ella sacan su sustento. “Todo lo que se quiera hacer en cuanto a la justa revisión del nivel de los salarios, exigirá siempre que se tengan en cuenta las posibilidades de los que tengan que pagarlos”, dijo PEREIRA en el Teatro de San Carlos de Lisboa ⁽³⁾, concepto emitido anteriormente por Su Santidad Pío XI ⁽⁴⁾, afirmando que “es injusto reclamar salarios exagerados cuando la empresa no puede soportarlos sin la ruina propia y el consiguiente perjuicio de los obreros”; y, en 1848, escribía BALMES ⁽⁵⁾ que “no basta decir alcemos el precio de los jornales; es necesario saber si la altura es posible. El precio del jornal — continúa — no es una cosa absoluta; está ligada con muchas relaciones que por necesidad la sujetan a cierta oscilación”.

Lo que acabamos de reproducir acerca de los salarios, puede asimismo aplicarse a la duración de jornada y a las demás condiciones de trabajo. Nadie discute, en principio — como hemos dicho, — la conveniencia de una cierta intervención estatal en estas cuestiones. Todo es cuestión de límites, ya que si para unos “el Estado es el único árbitro que manda, juzga y condena inapelablemente en última instancia”, admiten otros lo “que en la Semana Social de Angers [agosto de 1935], se llamaba muy bien corporativismo de asociación, en el cual las propias organizaciones corporativas piensan y obran”, aun cuando admitan el control natural del Estado ⁽⁶⁾.

En otras palabras, propugnan unos que — como en nuestro país — sea el Estado, por medio de la Dirección General de Trabajo, quien prepare y promulgue las Reglamentaciones nacionales; y defienden otros los llamados contratos colectivos entre organizaciones patronales y obreras, contratos que, por

(3) *La batalla del futuro*, página 44.

(4) *Quadragesimo Anno*, 4, b.

(5) *República francesa*, en *Obras completas*, volumen 32, página 31.

(6) AZPIAZU, *Corporativismo o National sindicalismo*, página 13.

lo demás, no pueden estar en contradicción con las leyes fundamentales que regulan la relación laboral.

La discrepancia puede también referirse a la intensidad de la intervención expresada o, mejor dicho, al criterio imperante en la misma: cuestión también de límites, pero de carácter más político que social. Y en este sentido, las ventajas e inconvenientes no pueden precisarse sin tener a la vista el texto de la disposición que se discuta, ya que no menos en los detalles que en la inspiración general pueden unas y otras tener su origen.

Y terminaremos este apartado refiriéndonos al peligro que entrañan los seguros sociales en cuanto pueden dar lugar a un exceso de confianza en la providencia del Estado, acompañada de un desinterés más o menos pronunciado por parte de los obreros para todo lo que represente prevenir los riesgos contra los que se ven automáticamente asegurados. Los seguros sociales tienen una utilidad incuestionable y no hay quien niegue su importancia para la colectividad. Pero si ya decía el P. GRANADA ⁽⁷⁾ que “ninguna cosa hay tan buena y tan perfecta de que no pueda usar mal la malicia humana”, no es de extrañar que ellos hayan dado lugar a una falta de estímulo por parte de sus beneficiados.

Ponía de relieve este hecho, en el año 1933, el correspondiente en Londres del Boletín de la *Société d'Études et Informations Economiques*, de París, refiriéndose, en una de sus crónicas, a la decadencia del espíritu de empresa en la Gran Bretaña, y al acomodaticio de los sin trabajo que tomaban “la indemnización de paro como a dote” y se adaptaban fácilmente “a una existencia quizá menos buena, pero indudablemente menos enojosa y menos cansada”.

Y desde un punto de vista más general, PEREIRA, en el citado discurso del Teatro de San Carlos de Lisboa, decía ⁽⁸⁾

⁽⁷⁾ Prólogo galeato a *Guía de Pecadores*, § IV.

⁽⁸⁾ *La batalla del futuro*, página 53.

que “el procedimiento estatista de los seguros sociales ha sido hasta hoy, económica, social y psicológicamente, un yerro de los más nefastos”, pues “el seguro de paro creó la legión de los parados profesionales, como el seguro de enfermedad hizo disminuir en mucha gente el deseo de tener salud, como el seguro de vejez contribuyó a relajar... el instinto individual de economía”, y en el límite se llegaría a “una minoría que produjese y trabajase para sustentar y garantizar el futuro de la masa diariamente creciente, de los que, agregándose a los verdaderos parados, a los verdaderos enfermos, a los verdaderos inválidos, buscarían la manera de asegurarse una vida descansada”.

De un modo análogo, las empresas aseguradoras contra accidentes del trabajo, podrían citarnos innumerables casos de abuso al amparo de la legislación vigente al efecto. Pero puede decirse, con carácter general, que los inconvenientes de una intervención del Estado en la cuestión que nos ocupa, se refieren más a sus límites o modalidades que a combatir las ventajas dimanantes de la existencia de un poder superior, de un gendarme, como hemos dicho, que ponga paz entre los intereses contrapuestos, y justicia en las relaciones económicas.

II. POLICÍA INDUSTRIAL

Las intervenciones de este segundo grupo son, también, aceptadas en principio por todos los países civilizados, en los que la legislación industrial o las ordenanzas municipales fijan las condiciones previas para la instalación y funcionamiento de toda clase de industrias y, en especial, por lo que afecta a las clasificadas como incómodas, insalubres y peligrosas.

No se trata, tan sólo, de evitar accidentes y enfermedades profesionales, ni de procurar las mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Las disposiciones aludidas se encaminan, además, a suprimir las molestias, perjuicios y

peligros para el vecindario; y por este motivo, se ocupan de ello las ordenanzas municipales, aparte de las reglamentaciones de aplicación general.

Pero no se limitan las ventajas al aspecto que podríamos llamar humanitario, pues la organización científica del trabajo al buscar cómo conseguirán las empresas el máximo rendimiento con los elementos de que disponen, se ocupa de un modo especial de lo relativo a las condiciones de trabajo, mejorándolas constantemente, como llevamos expuesto en otra parte ⁽⁹⁾, y resulta de la lectura del proyecto de Código que, redactado en 1931 por la *Taylor Society*, resumimos en otra de nuestras publicaciones ⁽¹⁰⁾.

La reglamentación de las industrias cuyo funcionamiento puede ofrecer peligros — y hasta sólo molestias evitables — a quienes en ellas trabajan o a los vecinos del lugar de trabajo, es asunto, en la actualidad universalmente aceptado, aunque se discrepe acerca de si ha de aprobarla el Estado o el Municipio, o de si su redacción debe partir de los organismos oficiales, de asociaciones técnicas o de sindicatos o corporaciones industriales. Cualquiera que sea la solución que se adopte, ofrecerá sus ventajas y sus inconvenientes, cuyo estudio deberá llevarse a cabo en cada caso particular.

Pero las repetidas reglamentaciones pueden ofrecer también desventajas dimanantes, ya de deficiencia técnica, ya de ciertas modalidades en su aplicación. Hace años pusimos de manifiesto algunos inconvenientes del primer tipo que ofrecía, a nuestro juicio, el Reglamento de Inspecciones Sanitarias promulgado por la Generalidad de Cataluña en 18 de diciembre de 1933 ⁽¹¹⁾, y otros del segundo, con referencia a la multiplicidad de inspecciones a que la industria estaba sometida ⁽¹²⁾.

Consideración especial merecen las disposiciones acerca de

⁽⁹⁾ *Revista de Trabajo*, febrero de 1945, páginas 150 a 163.

⁽¹⁰⁾ *Reorganización de Empresas Industriales*, páginas 61 a 67.

⁽¹¹⁾ *Diario del Comercio*, 6 de mayo de 1934.

⁽¹²⁾ Ídem, 7 de abril y 25 de julio de 1935.

la obligatoriedad de un técnico de capacidad profesional reconocida que responda, por parte de las empresas, del cumplimiento de las reglamentaciones expresadas. Enconadas discusiones ha provocado el asunto, no siempre desinteresadas por desgracia, entre industriales que afirman no necesitar ingenieros en sus empresas, e ingenieros que aspiran a ocupar las plazas que dicha obligatoriedad crearía. Un estudio de la cuestión nos llevaría a discutir, una por una, todas las medidas adoptadas acerca de seguridad e higiene en la industria, en relación con la capacidad profesional de los ingenieros, deducida de su plan de estudios, y de su posición frente a los peritos y a los doctores o licenciados en ciencias; aspecto este último, recientemente abordado por ABOLLADO en su conferencia del 10 de febrero de 1945 en el Instituto de Ingenieros Civiles ⁽¹³⁾.

Las ventajas de tal medida no deben, empero, buscarse en la colocación de ingenieros o de técnicos en general, ni los inconvenientes en el importe de las retribuciones u honorarios que habría de satisfacerles la empresa. No. Ha de considerarse, tan sólo, si en industrias de cierta importancia por su extensión superficial, por la potencia instalada, por el número de obreros que ocupa, por la clase de productos que fabrica, o por las operaciones precisas para ello, una dirección técnica competente o una simple asesoría, dará lugar a mejores condiciones en el trabajo, a menores accidentes, a un mayor aprovechamiento de materias o de energía, a una revalorización de los residuos y subproductos, a precios de coste más reducidos, a productos de mejor calidad, a menores molestias o perjuicios para el vecindario, etc. Y, desde este punto de vista, es evidente que las ventajas de tal intervención sólo dejarán de actuar por una reglamentación equivocada en cuanto a la clase de industrias afectadas o a las condiciones y capacidad técnica del asesor.

(13) *La industria química y la química industrial*, página 40 y sig.

III. PROTECCIÓN AL AHORRO

Cuando tratemos más tarde de la política de capitalizaciones y de los efectos de la política fiscal, veremos la influencia que las diversas modalidades de una y otra pueden ejercer en el ahorro. Pero también influyen en el mismo la inestabilidad de precios y de un modo especial, el peligro de inflación, como puso de manifiesto PENELLA DE SILVA al afirmar, en una de sus crónicas ⁽¹⁴⁾, que ahora “por lo que pudiera venir no se ahorra”, al paso que antes “se ahorra por lo que pudiera venir”.

Concretándonos, no obstante, a las medidas directas, la limitación a la libertad, que su misma definición impone, lleva a reglamentar las actuaciones de las entidades bancarias, cajas de ahorros y compañías de seguros, para garantizar los derechos de cuentacorrentistas, imponentes y asegurados, mediante una cierta fluidez en su activo y la materialización de un determinado porcentaje de sus reservas en valores de reconocida solvencia y fácil colocación en el mercado.

“Que el Estado, como supremo rector de los intereses colectivos, debe dictar aquellas disposiciones que tiendan a hacer más armónica la función bancaria, a evitar posibles abusos y a que queden salvaguardados los intereses y derechos de los acreedores y de los usuarios, es cosa evidente, y que sólo los aferrados a un liberalismo económico muy primera mitad del siglo XIX se atreverán a negar”, escribe TALLADA en *España Bancaria* ⁽¹⁵⁾.

“Pero los que — continúa más adelante — movidos más por sentimientos que por razones científicas, creen que el socialismo es el régimen económico del mañana, pretenden forzar y apresurar la transformación, con medidas que siendo

⁽¹⁴⁾ *Diario de Barcelona*, 31 de diciembre de 1944.

⁽¹⁵⁾ *Diari Mercantil*, 8 de octubre de 1932.

perjudiciales para la banca privada lo serían en definitiva para la entera vida económica de la nación.” Y esta intervención excesiva no produce los beneficiosos efectos de la moderada a que precedentemente nos hemos referido, ya que para ello es necesario un límite tanto en extensión como en intensidad.

Sin que entre en nuestros deseos pronunciarnos en uno u otro sentido, recordemos las grandes discusiones acerca de la cuenta corriente de efectos o valores, calificada por el propio TALLADA — en una conferencia dada a Unió Catalana ⁽¹⁶⁾ — como uno de los elementos básicos de la economía catalana, y combatido por la Bolsa de Madrid, cuyo Síndico-Presidente publicó a tal efecto, en 1936, un volumen de cerca de 600 páginas ⁽¹⁷⁾.

La protección a los subscriptores de valores — accionistas u obligacionistas — imponiendo determinados requisitos a las entidades emisoras es, igualmente, una intervención ventajosa para la colectividad, mientras no llegue a impedir a estas últimas la libertad de movimientos indispensable para el desarrollo de sus actividades. En otra parte ⁽¹⁸⁾ nos ocupamos del asunto con motivo de la iniciativa SABATÉS a que precedentemente hemos aludido, poniendo de relieve que, a nuestro juicio, sin desconocer la importancia de una concienzuda valoración del activo dado en garantía, era más interesante el prever los beneficios que habrá de producir la inversión a que las emisiones se destinan, ya que los obligacionistas desean “cobrar puntualmente los intereses y la amortización de sus títulos, y no apropiarse el activo hipotecado convirtiéndose en accionistas de la empresa”.

En los casos que acabamos de exponer, el Estado, en su política de ayuda al débil para evitar que pueda ser explotado

⁽¹⁶⁾ *La Veu de Catalunya*, 15 de julio de 1931.

⁽¹⁷⁾ *La cuenta corriente de efectos o valores en un sector de la banca catalana y el Mercado Libre de Valores de Barcelona*.

⁽¹⁸⁾ *Diario del Comercio*, 28 de enero de 1936.

por otro más fuerte, protege al acreedor limitando los derechos del deudor. Pero es frecuente, por el contrario, que el deudor sea el débil y el acreedor el fuerte, y entonces la intervención estatal ha de tener una finalidad distinta. En otras palabras, conjugando adecuadamente las dos clases de intervenciones, debe llegarse al justo medio defendiendo a la vez los intereses de deudores y acreedores en el ámbito del interés colectivo.

La legislación contra la usura, modalidad clásica de las intervenciones de este tipo, en principio, sólo ofrece ventajas. Pero los inconvenientes resultan a menudo del detalle de las disposiciones y de las consecuencias a que puede conducir el suprimir una institución sin reemplazarla por otra que venga a continuar las funciones que aquélla realizaba. Es así como las casas de empeños se han convertido en de compraventa; y si antes, pagando un interés usurario, podía recuperarse el objeto empeñado, ahora sólo es ello posible — como decía con frase gráfica un amigo nuestro — si lo consiente la buena fe del usurero.

De aquí resultan las ventajas de los Montes de Piedad, aunque a veces otorguen de momento menos facilidades a la clientela; así como las de las instituciones dedicadas a conceder préstamos con la sola garantía de la honradez y laboriosidad del deudor, por más que en la práctica les resulten cierto número de créditos fallidos.

Finalmente, en la protección del deudor hipotecario para que no pueda ser explotado por el prestamista, aunque ello forme parte de la legislación contra la usura, son interesantes las disposiciones tendentes a que con el rendimiento de la finca hipotecada puedan satisfacerse ampliamente los intereses del préstamo, ventajosas tanto para el deudor como para el acreedor, ya que constituyen la mejor garantía del pago de aquéllos.

IV. TASAS Y RACIONAMIENTOS

La política de tasas y racionamientos, inseparable hasta cierto punto, como una de sus manifestaciones más características, de toda política de guerra, es consecuencia, asimismo, del principio éticosocial que informa el régimen de mercado vinculado, en contraposición a la ley de la oferta y la demanda, base del mercado libre.

Este último — dijo GUAL VILLALBÍ el 5 de diciembre de 1940 en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid ⁽¹⁹⁾ — “espera que de la concurrencia mercantil queden los mejores, y con la eliminación absoluta o relativa de los elementos inferiores, se realice un incremento de la producción, una mejora de calidad, un abaratamiento de productos, y se llegue a precios razonables. En este caso — añade — los factores extraeconómicos quedan excluidos de toda consideración en el mercado, y no cuentan en la formación del precio”.

Frente a esta “interpretación anglosajona — continúa — que considera el mercado libre... como la médula de todo lo económico”, se levantó lo “que los modernos economistas reivindican como iniciativa de origen germano”, el mercado vinculado. “Los partidarios de éste — prosigue el propio conferenciante — desconfían de la eficacia de la concurrencia. No creen en la preponderancia absoluta de la idoneidad para asegurar las mayores ventajas sociales. Al contrario, consideran que no estando suficientemente preparado el mercado, hay que tener en cuenta otros elementos, e introducen el factor ético en la evaluación de los medios adoptados por la concurrencia. Es decir, que consideraciones morales o de orden legal, ideales nacionales o necesidades colectivas de los pueblos, aconsejan la intervención obligada del poder público, y de esta manera se va sacrificando más y más el provecho individual,

⁽¹⁹⁾ *Ante una transformación profunda del concepto de Mercado*, página 13.

interviniéndose el mercado a expensas de la iniciativa individual.”

Por lo demás, ha sido a menudo la política de tasas y racionamientos defendida por los que, en circunstancias anormales, la consideran imprescindible. Se ha dicho, por ejemplo, que lo era en España, ya que “tras su propia guerra y los ensayos revolucionarios marxistas, que dejaron exhausta la parte roja de su territorio, tuvo que afrontar las dificultades que creó la nueva contienda europea” ⁽²⁰⁾, y por ello “constituiría una catástrofe nacional el dejar libre el comercio de artículos intervenidos”, ya que “el encarecimiento no tendría más límite que el asalto de los hambrientos” ⁽²¹⁾.

Prescindamos, no obstante, de estas opiniones — que podríamos llamar oficiosas — y recordemos, tan sólo, con FUENTES IRUROZQUI ⁽²²⁾, que “el racionamiento nace y se origina en la escasez y en las dificultades de precios y de transportes”, de manera que “si hubiera abundancia de mercaderías..., no habría necesidad de subordinar el abasto a un régimen de intervención” ⁽²³⁾. Y, en efecto, se lee en la Orden Ministerial de 26 de enero de 1943 que “ante las dificultades con que tropieza la exportación y el consumo de la naranja... se encomienda al Sindicato Nacional de Frutos y Productos hortícolas, la intensificación del consumo... en el mercado interior” y “se declara libre el comercio... sin que, por consiguiente, esté sujeto a tasa”.

Hemos de considerar, por tanto, de una manera especial, el régimen de tasas y racionamientos como cosa anormal que se adopta como mal menor en circunstancias críticas, esperando la oportunidad de iniciar “un cierto y prudente retorno al mercado libre” ⁽²⁴⁾. Y es que “la tasa — según FUENTES IRU-

⁽²⁰⁾ *El Noticiero Universal*, 4 de octubre de 1940.

⁽²¹⁾ *Levante*, 18 de abril de 1942.

⁽²²⁾ *Abastecimientos, Tasas y Racionamientos*, página 187.

⁽²³⁾ *Diario de Barcelona*, 8 de noviembre de 1942.

⁽²⁴⁾ GUAL, VILLALBÍ, l. c., página 12.

ROZQUI (25) — parte de un principio contrario a la lógica, puesto que falsea el mecanismo de ofertas y demandas, priva de estímulo a los productores, disminuye la oferta y suprime el freno que contiene el consumo”.

Por lo demás, “la intervención del comercio en materia de abastecimientos — dice el mismo autor (26) — ha de ser... presidida de la mayor sutilidad y tacto. Nada ha de quedar a la improvisación. Todo debe estar calculado: la producción, los rendimientos de cultivos e industrias, las importaciones, las exportaciones, los márgenes de beneficio, el transporte, la distribución, el racionamiento, las necesidades del consumo, los posibles imponderables, la influencia del medio, del clima, de la demografía, el valor de la moneda, su velocidad de circulación, los medios de pago, la salud y las profesiones de los individuos, la calidad de los bienes y artículos de consumo, la presencia o ausencia de sucedáneos, etc.”.

Y no se olvide que “la tasa es difícil de mantener cuando se trata de un aumento de precios impuesto por deficiencia de la oferta, es decir, por insuficiencia de productos o por su inexistencia. Entonces, cuando la tasa está en contradicción con las leyes naturales, es decir, con el alza espontánea de precios, producto de falta de mercancías, incremento de demanda o superabundancia de moneda, los esfuerzos de las autoridades encargadas de la política de precios, de la del reparto de abastecimientos o de la vigilancia de la distribución en valoraciones asequibles por igual, son inútiles, pues a lo que hay que acudir es a poner remedio a las causas del alza espontánea, y no a tasar los precios directamente” (27).

No se olvide, tampoco, que — como dijo GUAL VILLALBÍ en la repetida conferencia (28) — “el precio ha de rehacer materialmente, bajo forma de análoga utilidad, en una perfecta

(25) l. c., página 140.

(26) Ídem, página 79.

(27) Ídem, páginas 137 y 138.

(28) l. c., página 32.

igualdad económica, el valor de coste del producto, el sacrificio realizado en la obra productiva. Cuando este límite no se alcanza, cuando por imposición de autoridades se olvida este principio y la tasa se fija por debajo del coste de producción, el estímulo económico para continuar la obra productora desaparece y entonces el productor se encuentra ante el dilema de sostener la producción arruinándose o infringir la ley". Y "la experiencia nos demuestra — añade — que esto último es más frecuente que lo primero". Es lo que escribe LACTANCIO ⁽²⁹⁾ con referencia al célebre Edicto de DIOCLECIANO, que, lejos de conseguir su objeto, "dió lugar a la ocultación y a un mayor encarecimiento, hasta que la ley fué deshecha por la misma necesidad".

Prescindiendo de la ganancia abusiva — que, por lo demás, no se da siempre, como GUAL VILLALBÍ pone de manifiesto ⁽³⁰⁾ — y que, en todo caso incluye — con palabras de VENTOSA ⁽³¹⁾ — "la prima impuesta por el riesgo, que es consecuencia de la ilegalidad de la operación", no puede negarse que el "estraperlo" en cuanto a mero comercio clandestino — aunque sea doloroso confesarlo — realiza a menudo una función social que el comercio lícito no está siempre en condiciones de atender.

Es por ello que el propio GUAL VILLALBÍ, en la tantas veces citada conferencia ⁽³²⁾, dice que cuando "el "estraperlo" culmina, el remedio no consiste ya en la acción violenta, represiva contra el aspecto delincuente", pues "en cuanto es una epidemia social, necesita para ser curado que se vigore y se higienice a la vez todo el ambiente social". Y así "no hay más remedio que vigorizar la producción y vigorizarla por todos los medios"; pero "en algunos casos esto sólo puede ser un remedio a largo plazo. Y entonces hay que verter sobre el

⁽²⁹⁾ *De mortibus persecutorum*, VII, 6-7.

⁽³⁰⁾ l. c., página 29.

⁽³¹⁾ *La permanencia de las leyes económicas*, página 18.

⁽³²⁾ l. c., página 30.

mercado una oferta abundante de los productos que en él escasean, porque esto será lo único que pueda tonificarle” y “cuando la producción interna no da lo necesario, es obvio que las importaciones se imponen”.

Y terminaremos este apartado aludiendo a los medios para aumentar la oferta o reducir la demanda de mercancías. Para conseguir lo primero, “los sistemas pueden ser los de estimular la importación, premiándola o auxiliándola, prohibir las exportaciones, requisar las industrias y los campos y obligar a su cultivo, o, finalmente, transformándose los organismos de abastos en vendedores, comprando en gran escala y abriendo almacenes y comedores” ⁽³³⁾. De los primeros medios nos ocuparemos más adelante; y los últimos, implantados en Francia durante la guerra de 1914-18, beneficiaron a los consumidores, pero perjudicaron al Erario público.

“La libre formación de precios en el mercado — dice WEBER ⁽³⁴⁾ — produce una escala de necesidades orientada de un modo puramente económico y garantiza una elasticidad de la producción basada en ella”; y “la política autoritaria de precios tiene que encontrar algún substitutivo para orientar el consumo y garantizar la necesaria adaptación de la producción”. Pero como “la Administración del Estado — continúa — no está en condiciones de crear una diferenciación de precios que satisfaga esas condiciones y se adapte a circunstancias tan variables”, “en lugar de la limitación de la demanda por el movimiento de precios”, ha recurrido a implantar el racionamiento de las cantidades demandables y de los elementos de producción”, aunque con ello “a la larga, la marcha progresiva de la economía pueda ser dificultada”.

Sobre la demanda puede actuarse con “los llamados racionamientos de los consumidores, es decir, la fijación de la cantidad límite de cada artículo atribuible a cada comprador presunto, bien por medio de cartillas o tarjetas, o por restric-

⁽³³⁾ FUENTES IRUROZQUI, I. c., página 141.

⁽³⁴⁾ *Compendio de Política Económica*, página 29.

ciones o prohibiciones, tales como los métodos de abstinencias obligadas o supresión de productos de lujo” (35).

Las tasas y racionamientos deben considerarse, según se ha dicho, como a mal menor y, por tanto, hemos de prescindir de sus inconvenientes que, en todo caso, deberán imputarse a las aplicaciones prácticas de unas y otros, o a la política general de abastecimientos que hace imprescindible su adopción; aunque sin olvidar que “la tasa, como toda atadura económica, lleva en sí la tendencia a un anquilosamiento económico-nacional indeseable”, que no se limita “a la esfera de la distribución de bienes, sino que se extiende a todos los estadios de la elaboración de los mismos, y en especial a la producción” (36).

V. LUCHA CONTRA EL PARO FORZOSO

Hemos visto que el paro forzoso se ha combatido, en su origen o en sus efectos, directamente mediante subsidios, seguro obligatorio, obras públicas, limitación de despidos y colocación forzosa de parados; y, de manera indirecta, estimulando la construcción y la industria privada, reduciendo el horario o el período de trabajo, por suspensión de los progresos técnicos y mediante la reeducación profesional. Vamos a ocuparnos separadamente de las ventajas e inconvenientes respectivos.

Aparte de la legión de parados profesionales, creada o favorecida por el seguro de paro, como se ha dicho anteriormente, de una manera especial en Inglaterra donde poco “interés podían tener muchos obreros en buscar trabajo cuando el salario que cobrarían al trabajar no sería en muchos casos muy superior a la indemnización de paro”, este seguro “ha

(35) FUENTES IRUROZQUI, l. c., página 140.

(36) WEBER, l. c., página 29.

contribuido evidentemente a que los costos de producción de la industria inglesa fueran muy elevados, dificultando por ello la exportación". Y "disminuyendo las cantidades exportadas, disminuía paralelamente el número de obreros a que la industria podía dar ocupación y por ello el paro forzoso era a la vez consecuencia y nueva causa de la crisis industrial inglesa" ⁽³⁷⁾.

"De todos modos — prosigue más adelante TALLADA, a quien reproducimos — el seguro inglés contra el paro constituye un meritorio esfuerzo de un país para poner remedio a una enfermedad grave del cuerpo social... Inglaterra ha comprendido que en la Sociedad moderna no es justo que los hombres pasen hambre por causas en las que no tienen culpa ni participación. Puesto que el paro forzoso nace de defectos en la organización económica, es la Sociedad la que debe poner remedio a sus consecuencias."

No por otro motivo, el subsidio de paro en una u otra forma ha sido aplicado — como precedentemente hemos dicho — en numerosos países y, recientemente ⁽³⁸⁾, en los Estados Unidos, TRUMAN se ha dirigido al Congreso solicitando la urgente votación de créditos precisos para ello. Pero las ventajas e inconvenientes del sistema, más que del hecho en sí, dependen de sus modalidades y del modo cómo se lleve a la práctica. Lo mismo puede decirse del seguro, con mayor razón por cuanto el primero deriva casi siempre de este último cuando el Estado ha de incrementar su aportación normal por no ser ésta suficiente, en circunstancias excepcionales, junto con las patronales y obreras, para indemnizar a los parados.

De "remedio limitado y carísimo" ha sido calificada ⁽³⁹⁾ la práctica de las obras públicas para solucionar el paro obrero. Lo segundo, ya que "por sencilla que sea la ejecución de

⁽³⁷⁾ TALLADA, *Política económica en tiempos de crisis*, página 71.

⁽³⁸⁾ *El Noticiero Universal*, 30 de mayo de 1945.

⁽³⁹⁾ TALLADA, en *Conferència sobre l'Atur Forçós*, página 9.

un trabajo, no representa solamente mano de obra, sino que requiere, además, el empleo de utillaje, materiales de construcción, gastos de dirección técnica y administrativa, intereses y amortización de empréstitos"; y lo primero porque "llevar, como se ha hecho con harta frecuencia, a mecánicos, tejedores y carpinteros a cavar tierra y transportar capazos de un lado para otro, resulta, además de caro, desmoralizador para aquellos tipos de obreros calificados".

Por lo demás, como hace notar RIBÓ ⁽⁴⁰⁾, "o bien dichas obras son tales que su conveniencia ya se había considerado antes de la crisis y no se habían puesto en práctica a causa de su coste... o bien son obras en las cuales jamás nadie había pensado. En el primer caso, si dichas obras no eran convenientes antes, a causa de su coste, menos lo serán en tiempo de crisis, cuando las finanzas del Estado se encuentran en las máximas dificultades y cuando son casi imposibles las emisiones a largo plazo".

"Y en el segundo caso — continúa — ¿qué obras pueden ser éstas en que jamás se había pensado?... Entonces, queriendo hacer obras extraordinarias, se emprenden forzosamente... obras que no son reproductivas... Son los ferrocarriles con déficit de explotación permanente, son las carreteras de poco tráfico que representan, no obstante, cargas gravosas de entretenimiento". Y por ello "se ve forzado a concluir que, si se quiere socorrer a los parados haciéndoles trabajar (cosa mejor, siempre, que un subsidio), lo más barato es ocuparlos en obras perfectamente inútiles o, al menos, que no dejen ningún gasto para después. En este caso, lo que resulta más productivo y oportuno es lo que parece más improductivo e inoportuno".

Pero, frente a estos inconvenientes, nadie niega las ventajas de dar trabajo a los parados, con cargo al Presupuesto estatal, provincial o municipal, en épocas en que la iniciativa

(40) *La Veu de Catalunya*, 5 de marzo de 1933.

privada se encuentra impotente para ello. Y de un modo especial si puede llevarse a la práctica el plan de KEYNES, a que precedentemente nos hemos referido u otro análogo para “acomparar la política de inversiones públicas de manera que — opuestamente a lo que antes se hacía — lleven un ritmo contrario al de las inversiones privadas” ⁽⁴¹⁾, finalidad esta última perseguida, por ejemplo, en la *Employment Policy* de 27 de mayo de 1944, aunque ello ofrezca sus inconvenientes por lo que afecta a las finanzas públicas.

Pero, además, no debe olvidarse que, en todo caso, “en la ejecución de las obras emprendidas se consumirán grandes cantidades de cemento, hierro y utillaje mecánico, y los pedidos que deberán hacerse de todos estos productos a la industria privada incrementarán a su vez la actividad de aquellas diversas industrias. Los salarios distribuidos entre los obreros ocupados en la ejecución de las obras y en las industrias auxiliares, al distribuirse por el país por intermedio del comercio al detall, mantienen y mejoran la actividad de las industrias del consumo, alimentación, vestido, distracciones, etcétera” ⁽⁴²⁾.

Se comprende, no obstante, que “si las obras se hacen para atenuar el paro, es indispensable crear antes un ambiente de confianza, a fin de que, estimulando el cuerpo económico por sensación de estabilidad... el esfuerzo del Estado sea un acicate que dé nueva vida y nuevo impulso a todos los órganos de nuestra vida económica” ⁽⁴³⁾.

Este es el fundamento de la teoría del multiplicador, a que precedentemente hemos aludido; y, aunque más adelante insistamos, desde otro punto de vista, acerca del asunto, hemos de recordar los estudios de HUBBARD ⁽⁴⁴⁾ acerca del poder del impuesto para crear renta, o sea de la posibilidad de incre-

⁽⁴¹⁾ *Documentación Económica*, febrero de 1945, página 6.

⁽⁴²⁾ TALLADA, *La política económica en los tiempos de crisis*, página 74.

⁽⁴³⁾ BAUSILI, *Diario del Comercio*, 8 de marzo de 1936.

⁽⁴⁴⁾ *The Quarterly Journal of Economics*, febrero de 1944, páginas 265 a 289.

mentar esta última imponiendo un tributo sobre ella y gastando los ingresos que con el mismo se obtengan.

La prohibición de despidos y las admisiones y readmisiones obligatorias pueden ofrecer las ventajas dimanantes de un incremento en la capacidad adquisitiva de las masas obreras, con sus repercusiones humanitarias y en la cifra de ventas del comercio al detall; aspectos, principalmente el primero, que los poderes públicos no pueden dejar desatendidos.

Pero, aun prescindiendo de las circunstancias personales de los individuos cuyo despido se impide o cuya readmisión se ordena, no deben perderse de vista los perjuicios que se irrogarán a la empresa si por falta de pedidos, de primeras materias o de energía, no puede darles trabajo en condiciones aceptables. Mucho se ha escrito acerca de las ventajas e inconvenientes de tales medidas, de un modo especial con motivo del tristemente célebre Decreto de 29 de febrero de 1936; pero, para no alargar este punto, nos limitaremos a reproducir comentarios recientes de carácter más o menos oficial.

“El despido o suspensión temporal de trabajo de todos o gran número de los obreros de una empresa o patrono, no siempre plenamente justificado — se lee en el preámbulo de una orden sobre despidos firmada en 18 de febrero de 1941 por el Gobernador Civil de Barcelona ⁽⁴⁵⁾, — es notorio que constituye una evidente perturbación en el orden social, aumentando el paro existente. No sólo factores puramente económicos deben presidir la política social del Gobierno y por ello nunca como en etapas difíciles similares a las que atravesamos está más justificada la apelación a los principios de solidaridad y sacrificio común en la medida de lo humanamente posible, gracias a los cuales podrá hacerse frente a aquellas circunstancias y superar las dificultades del momento.”

Y unos meses más tarde, el propio Gobernador, CORREA,

(45) *El Noticiero Universal*, 4 de marzo de 1941.

defendiendo “la absorción por las empresas de los productores en paro”, dijo “que salen al paso de la miseria y de la desesperación de los productores alejados del trabajo” las bases expuestas por el jefe provincial de la C. N. S., ZORRILLA DE GÁNDARA, quien hizo notar, a su vez, que en su estudio se había “subordinado al problema social el económico, por carecer de importancia este último en relación con el imperativo trascendente” del primero ⁽⁴⁶⁾.

Pone, en cambio, de relieve algunos de los inconvenientes a que pueden dar lugar ciertas readmisiones, el Ayuntamiento de Barcelona cuando, en sesión del Pleno de 15 de septiembre de 1939, acordó expresar “al Ilre. señor Magistrado del Trabajo número 3 el indudable trastorno y la baja que, en cuanto a eficiencia y rendimiento, produciría en los obreros que hoy vienen trabajando normalmente, la imposición de una jornada restringida para dar paso a los que, precisamente en épocas anteriores, más perturbaron con su actuación el natural desarrollo de los trabajos de la contrata” ⁽⁴⁷⁾.

Dejando para más adelante los estímulos a la construcción y a la industria privada, así como la suspensión de la puesta en práctica de los progresos técnicos, terminaremos este apartado con las ventajas e inconvenientes de la reducción de jornada o de semana de trabajo.

Teóricamente, el problema no parece ofrecer dificultades, por reducirse a dividir el número total de horas-obrero que la industria necesita por el de obreros disponibles. El cociente expresará las horas que habrá de trabajar cada uno de ellos.

En la práctica, no obstante, la extensión alcanzada por el *short time*, haría sus efectos menos visibles; aparte del hecho que, como resulta de una publicación del B. I. T. dirigida a la Conferencia llamada de las cuarenta horas ⁽⁴⁸⁾, “el porcen-

⁽⁴⁶⁾ *Diario de Barcelona*, 26 de noviembre de 1941.

⁽⁴⁷⁾ *Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona*, 29 de marzo de 1940.

⁽⁴⁸⁾ *Durée de Travail et Chômage*, página 37.

taje de los obreros trabajando a horario reducido, varía considerablemente de un país a otro” y “acusa fuertes variaciones de una a otra industria”.

Por lo demás, tampoco es constante, en las diversas industrias y en los diferentes países, el porcentaje de obreros en paro, de manera que una reducción uniforme podría conducir, en ciertos casos, a escasez de personal especializado, al paso que en otros resultaría insuficiente el utillaje industrial al aumentar la mano de obra, salvo la posibilidad de reemplazar por cuatro turnos de a seis horas los tres clásicos de a ocho, en el trabajo continuo.

Complemento de tales medidas habría de ser una reeducación profesional para armonizar el número de operarios disponibles de cada especialidad con las nuevas necesidades que de ellos tuviese la industria y una orientación en el mismo sentido en las Escuelas de preaprendizaje.

El principal inconveniente de la reducción de jornada debe, sin embargo, buscarse, como en otra parte ⁽⁴⁹⁾ hemos indicado, “en la repercusión en la demanda de productos, tanto si se conserva la retribución horaria (reducción en la capacidad adquisitiva de los obreros), como si se conserva la semanal (aumento del precio de coste y, en consecuencia, reducción de los salarios reales y, en definitiva, reducción, también, en la capacidad adquisitiva de los asalariados)”. Es cierto que en este último caso otras circunstancias — y en especial un mayor rendimiento — pueden compensar, en el precio de coste, la mayor retribución a la mano de obra; pero entonces la necesidad de ocupar un mayor número de obreros dependerá de la elasticidad en la demanda del producto, y no será, por tanto, efecto automático de la reducción de jornada.

Si en vez de reducir el número de horas de trabajo a efectuar por cada operario en el curso de una semana, reducimos los totales de su vida laboral, llegaremos a la solución

(49) *Diario del Comercio*, 3 de noviembre de 1933.

defendida, por ejemplo, por DUBOIN ⁽⁵⁰⁾ al preconizar una edad más alta para empezar el aprendizaje y una jubilación más temprana. Así los operarios estarán mejor instruídos y serán de edad más apropiada, en general, para máximos rendimientos. Deberá prescindirse, en cambio, de los más experimentados; y quizá los mayores gastos de instrucción y retiro compensen la baja en los subsidios de paro.

VI. LUCHA CONTRA EL PÁNICO

El cierre de Bolsas, las moratorias y la circulación forzosa de papel moneda son, como hemos dicho, las principales medidas dirigidas a evitar los efectos del pánico; enfermedad contagiosa, como todo el mundo reconoce, para el cuerpo social.

Su aplicación se contrae a circunstancias excepcionales, por un plazo más o menos largo y a fin de evitar mayores quebrantos económicos. En ello estriban, pues, sus ventajas, mientras sean oportunas y en la justa medida, aunque un cierto número de individuos poseedores de valores, bolsistas, acreedores, etc., puedan salir perjudicados en sus particulares intereses.

(50) *La grande relève des Hommes par la Machine*, página 310.

CAPÍTULO VII

VENTAJAS E INCONVENIENTES

(Continuación)

Continuando con las ventajas e inconvenientes de las diversas modalidades de la intervención estatal en las actividades económicas, pasemos a ocuparnos ahora de las dimanantes de aquellas cuya finalidad principal es proteger, controlar o dirigir las actividades expresadas y, de un modo especial, la industria del país.

I. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La protección a la producción nacional, dificultando la competencia extranjera mediante el impuesto de aduanas, ofrece las ventajas e inconvenientes que, en el curso del pasado siglo, pusieron de manifiesto las clásicas discusiones entre proteccionistas y libremercistas, que nos recuerda PUGÉS en la obra precedentemente citada; discusiones a menudo más políticas que económicas, dándose, por lo que afecta a España, el “hecho paradójico”, a juicio de FRANCO ⁽¹⁾, de que la protección arancelaria fuese “tercamente combatida por la Castilla libremercista y defendida con tesón por aquellas regiones en que se cultivaba la aberración separatista”.

Es, por lo demás, interesante hacer notar, con GUAL VI-

⁽¹⁾ Discurso ante el Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S., 17 de julio de 1941.

LLALBÍ (2), que “en los proyectos de la Sociedad de las Naciones, en las discusiones promovidas en cada país en torno del Arancel y en las sugerencias brindadas por los teorizantes, apenas si se descubre novedad alguna, ni una fórmula ni una idea que no se pueda encontrar, en germen o totalmente desenvuelta en los libros de los que trataron los temas de la política comercial en el lapso que ha venido a constituir el período clásico de la controversia arancelaria”.

Y lo mismo podríamos decir, aunque no se trate de discusiones o diálogos, sino de dos monólogos, acerca de los argumentos aducidos en favor de la autarquía por un lado, y de los Grandes Espacios Económicos — especialmente del llamado Nuevo Orden Económico de Europa, propugnado por Alemania en el curso de la última guerra — por el otro.

Quizá tan sólo MANOILESCO, con sus aplicaciones de la teoría de la productividad, ha conseguido demostrar que el proteccionismo deja “de ser como una concesión hecha al punto de vista social”, ya que, por el contrario, “legitimado — en los límites trazados por la teoría — desde el punto de vista económico, está reducido y limitado por el punto de vista social” (3).

“Para determinar — dice — si una mercancía debe importarse del extranjero o producirse, en condiciones de manifiesta inferioridad frente al extranjero en el propio país, no juega papel alguno el grado de esta inferioridad”. Tan sólo ha de verse “si, no obstante, el grado de productividad de esta mercancía... se puede todavía clasificar... en lo alto de las más productivas del país”, pues en este caso “la protección que permite la fabricación de esta mercancía... es francamente ventajosa” (4).

(2) Prólogo a *Cómo triunfó el proteccionismo en España*, de PUGÈS, páginas 17 y 18.

(3) *Teoría del Proteccionismo y del Comercio internacional*, páginas 185 y 186.

(4) Ídem, páginas 180 y 181.

Por lo demás, aun admitiendo que, como escribe PUGÉS ⁽⁵⁾, “si todos los pueblos por un igual, con perfecto sincronismo, hubiesen logrado el máximo desarrollo de sus respectivos recursos y facultades, toda traba opuesta al intercambio habría de resultar absurda, pues del libre comercio entre ellos, como ocurre con el tráfico interior, no podrían esperarse sino ventajas mutuas”, el hecho es que “si de la esfera puramente especulativa pasamos al terreno de la práctica, una ligera ojeada ha de bastar para convencernos de que la política proteccionista se extiende y acentúa hoy día con rapidez por todo el mundo”.

No olvidemos tampoco de consignar, entre las ventajas del sistema, el que — como dice ROBERT ⁽⁶⁾ — “la política arancelaria, adecuadamente manejada permite — en tiempos de normalidad — la regulación de los precios con mucha mayor facilidad que mediante la fijación estatal de los mismos”, ya que puede hacer indispensable una baja en “el nivel preciarío en forma que las industrias se vean forzadas a mejorar sus instalaciones y sus sistemas de trabajo” graduando la protección. Y es que — como afirma LIST ⁽⁷⁾ — “la legislación aduanera tiene que acompañar siempre a la evolución de la industria nacional, si quiere cumplir su cometido”.

Las intervenciones del Estado en materia arancelaria, mediante tarifas prohibitivas, protectoras o meramente fiscales, deben guardar, por lo demás, la debida armonía para que cumplan su cometido y se eviten las “aberraciones arancelarias”, a que precedentemente hemos aludido. Pero, puede también proponerse el proteger las exportaciones mediante primas, subvenciones u otras modalidades de la política comercial, para llegar al *dumping*, que permite la venta al extranjero a precios inferiores a los que rijan en el mercado nacional y hasta — en ciertos casos — al de coste del producto. No es pre-

(5) *Cómo triunfó el proteccionismo en España*, páginas 27 y 28.

(6) *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 174.

(7) *Sistema Nacional de Economía Política*, página 281.

ciso, sin embargo, que el precio de venta interior exceda en régimen de *dumping* al que regiría en otro caso, ya que — como VITO hace notar ⁽⁸⁾ — el incremento en la fabricación, consecuencia de aquél, puede dar lugar a un menor precio de coste.

El *dumping*, no obstante, es compensado, en los países afectados, mediante las disposiciones *antidumping*, de las que pueden considerarse como derivativos los recargos por moneda depreciada. Pero no es raro que el propio país que lo practica salga perjudicado con sus consecuencias; y MARÍN LÁZARO ⁽⁹⁾ cita lo ocurrido con las fábricas de clavos alemanas, que hubieron de sufrir la competencia de las que, instaladas en Bélgica y Holanda, utilizaban alambre exportado de Alemania en régimen de *dumping* y “la metalurgia de Rotterdam se enriquecía vendiendo a los alemanes los aparatos y calderas fabricados con planchas de hierro expedidas por ellos mismos a precios de exportación. Más tarde, sin embargo, mediante los llamados acuerdos A. V. I. los elaboradores alemanes percibieron, en forma de prima a la exportación, la diferencia entre los precios interno y externo de la materia prima empleada en los productos exportados ⁽¹⁰⁾.”

Consideración especial merecen los contingentes, ya que — como dice OTERO ⁽¹¹⁾ — “una sola contingentación trae perturbaciones tan enormes que pueden hundir a un sector del comercio o de la industria de la forma más definitiva”; pues, por ejemplo, un “fabricante de tejidos... que compraba sus lanas... de calidad máxima y que, dentro de la técnica de su industria, elaboraba el tejido de la mejor calidad, habiendo acreditado en muchos años de esfuerzos financieros, técnicos y morales, una marca o una firma, deberá, según se le autorice, importar sus lanas de uno u otro país cuya compensación

⁽⁸⁾ *Las Uniones de Empresas en la Economía fascista*, página 139.

⁽⁹⁾ *La actuación de las Economías nacionales dentro de la vida económica internacional*, páginas 118 y 119.

⁽¹⁰⁾ VITO, l. c., página 140.

⁽¹¹⁾ *Diario del Comercio*, 2 de abril de 1935.

económica lo permita” y posiblemente “se verá obligado a descender perpendicularmente en la calidad de su fabricación”.

“Aquella firma — continúa — cuyo solo nombre era patente de máxima calidad, se ve obligada, sin respetársele el libre desenvolvimiento de su industria, a ejercerla al dictado y sujeta a las alteraciones que al Estado, convertido en administrador de la economía nacional, le plazca”; ya que “si se compra un artículo en determinado país es porque su precio, su calidad, condiciones de venta, etc., convienen al importador. No se compra caprichosamente al extranjero, se compra porque se necesita, y se debe comprar donde convenga, por el concepto que sea”.

Esto por lo que respecta a la posible calidad de los artículos importados en régimen de contingente; pero, aparte de ello y de los abusos e injusticias, favoritismos y especulaciones a que puede dar lugar su reparto, han sido impugnados por lo que se refiere a la limitación en la cantidad de las importaciones. “Si el contingente afecta a mercancías de sustitución relativamente fácil por otras del país o de producción algo atrasada en él, se puede lograr, con el manejo del contingente, un estímulo para la producción nacional. Pero si el contingente se aplica sobre mercancías que no pueden producirse en el propio país ni substituirse por otras y, en cambio, son aquellas esenciales para el normal funcionamiento de la industria, por servir de primera materia a ésta, no cabe duda que en tal caso el contingente será causa no sólo de rareza y encarecimiento, sino que puede llegar a producir el aumento del paro obrero” ⁽¹²⁾.

Como contrapartida a estos inconvenientes del sistema — más o menos pronunciados según los detalles reglamentarios y las modalidades de aplicación — se ha pretendido conseguir un incremento en las exportaciones y, por tanto, en la producción nacional. Pero la experiencia no ha confirmado, en general, como hemos visto, tales previsiones optimistas.

(12) Ídem, 31 de marzo de 1936.

“La experiencia demuestra — se lee en la Exposición del Real Decreto de 30 de abril de 1924 — que no basta en muchos casos la protección arancelaria” para impulsar el establecimiento de nuevas industrias de interés para el país o la ampliación de las ya existentes; y por ello se han ideado otras protecciones en forma de préstamos, subvenciones, garantías de interés, exenciones tributarias.

“Debemos procurar a todo trance — dijo CAMBÓ en el Congreso de los Diputados ⁽¹³⁾ — que allí donde se produzca una iniciativa española encaminada a crear una industria que sea de interés general, allí se encuentre la mano protectora del Estado”; pero si — como se lee en la Exposición del expresado R. D. de 30 de abril de 1924 — “vivos están no pocos casos que acreditan la eficacia de aquellos estímulos..., tampoco es posible desconocer que no han alcanzado éstos todo lo que había derecho a esperar”.

“La economía nacional — dijo ROBERT el 31 de octubre de 1942 en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona ⁽¹⁴⁾ — es un conjunto de recursos naturales, de mano de obra y de capitales que es preciso administrar de modo que se obtenga de ellos, en cada momento, el máximo provecho para el país. De ahí que el desenvolvimiento industrial deba realizarse conforme a una ordenación programática previa, establecida por el Estado.”

De esta idea, en su aspecto general, nos hemos ya ocupado al tratar de las intervenciones de finalidad política y volveremos sobre ella en la regulación industrial; pero, por lo que afecta a las industrias protegidas, había sido ya lanzada por CAMBÓ en su expresado discurso al propugnar para que “en una intervención del Estado”, sea “el Estado quien fije y determine las industrias que deben protegerse, en qué forma deben protegerse y hasta en qué medida”.

⁽¹³⁾ Sesión del 1.º de febrero de 1917.

⁽¹⁴⁾ *Diario de Barcelona*, 1.º de noviembre de 1942.

Es lo que veintitrés años más tarde, el 5 de febrero de 1940, dijo ALARCÓN DE LA LASTRA en el Instituto de Estudios Políticos: “en lugar de aguardar el Estado que la iniciativa particular se acerque a él solicitando amparo y protección para sus empresas, es él quien marca los objetivos que es preciso alcanzar, ofreciendo de antemano su amparo y auxilio en forma específica, fijando las condiciones que deben reunir las empresas, orientando y encauzando de este modo las actividades privadas, antes dispersas y deslabazadas, en dirección a los fines que el interés nacional aconseje, actuando como rector supremo de la economía del país y representante genuino del bien colectivo” (15).

Así se instaura “una verdadera dirección del desenvolvimiento industrial por parte del Estado”, pues “no sólo dejan de implantarse aquellas industrias que la Administración juzga improcedentes en el momento actual, sino que se establecen precisamente aquéllas que se estiman indispensables para la economía o la defensa de la Nación” (16).

El estímulo a la iniciativa privada, en la construcción principalmente, mediante exenciones tributarias, fin principal perseguido, por ejemplo, según LORENZO PARDO (17), en la que fué luego Ley contra el Paro de 25 de junio de 1935, ha dado a menudo satisfactorios resultados; y a ello se sumaron, en Barcelona, las concedidas poco antes por el Ayuntamiento. Los permisos solicitados en dicho año 1935 para edificios de nueva planta, ascendieron a 1.129 contra 375 en 1934, y en el 1936 el ritmo era todavía creciente — a pesar de las adversas perspectivas políticas — por cuanto tan sólo en el primer semestre — ya que, prácticamente hemos de prescindir del segundo — dicha cifra llegó a 723, no alcanzada de mucho todavía, por lo demás en estos últimos años.

(15) *El triunfo nacional y su repercusión en la industria y el comercio*, páginas 18 y 19.

(16) DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA, *La política industrial en la Nueva España*, página 11.

(17) *El Sol*, 30 de abril de 1935.

1939	73	1942	452
1940	292	1943	247
1941	346	1944	338

según resulta de las Memorias de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Barcelona.

A las exenciones tributarias con finalidad estimulativa podría aplicarse casi siempre lo que BUGALLAL consigna en el preámbulo del proyecto de ley de 30 de noviembre de 1915 acerca de los Sindicatos industriales, mercantiles o de artesanos y sus Federaciones. “No se lesionarán los intereses del Erario — dice — porque sólo ante el estímulo que se ofrece cabe alentar la esperanza de que lleguen a constituirse. La renuncia, pues, a percibir tales impuestos hace relación tan sólo a tributos que no se cobrarían tampoco si la exención no se acordase, y en cambio cabe confiar en que el funcionamiento de las entidades referidas será fecundo para el desarrollo de la economía nacional.”

La protección del Estado a las actividades industriales o agrícolas del país no ha dado siempre, empero, buenos resultados. CAMBÓ, por ejemplo, en la conferencia del Cine Goya de Madrid, a que precedentemente hemos aludido, se refiere a la crisis del trigo, cuya agravación atribuye en gran parte a las intervenciones gubernamentales — en el Canadá y los Estados Unidos — que con la pretensión de ocultarla, dieron lugar a que continuara “extendiéndose el área de cultivo” hasta que “llegaron las cantidades de trigo acaparadas por los Gobiernos a proporciones tales que tuvieron finalmente que venderlas, renunciando a la política intervencionista” y entonces se produjo la caída de precios ⁽¹⁸⁾.

Y con referencia a otro producto agrícola, escribe al poco tiempo MARIANO MARFIL ⁽¹⁹⁾, “que ROOSEVELT, con su economía dirigida respecto al algodón, lo que ha logrado es excitar

⁽¹⁸⁾ *La Veu de Catalunya*, 27 de abril de 1935.

⁽¹⁹⁾ *Diario de Barcelona*, 11 de agosto de 1935.

la producción rival extranjera”, y, por ejemplo, en el “Brasil, no sólo se ha intensificado la producción indígena en un 68 por 100..., sino que la producción norteamericana ha sido desplazada en un 43 por 100”. Consecuencia, por lo demás, de esta “intervención estatal, encaminada a valorizar artificialmente un producto, alterando el libre juego de las leyes económicas”, ha sido “esa destrucción de mercancías que a menudo se presenta como una manifestación escandalosa de las taras del régimen de libertad económica”, no siendo “en realidad, consecuencia de él, sino precisamente de su derogación por efecto de la intervención expresada” ⁽²⁰⁾.

“No ignoramos — hemos dicho en otro lugar ⁽²¹⁾ — la necesidad en que se encuentran las nuevas industrias de verse particularmente protegidas durante los primeros años de vida; pero si especiales razones políticas no lo aconsejan, no creemos prudente establecer nuevas industrias o ampliar las existentes, si ello requiere auxilios permanentes de los poderes públicos.”

“La eventualidad de terminarse el auxilio con la probable pérdida, después de un tiempo más o menos largo, de los capitales invertidos, y el paro forzoso de la mano de obra que en la citada industria se había especializado, aparte de los perjuicios que puede haber producido a los forzados consumidores, no son perspectivas demasiado halagüeñas.”

Y, desde otro punto de vista, GARLOT, en un estudio acerca de la industria argentina del cemento ⁽²²⁾, dice que “una industria que depende exclusivamente de las obras de gobierno..., corre el peligro de que, por una razón política o de prosperidad momentánea, la demanda sea tal que le exija costosas ampliaciones, y que acabadas éstas, el consumo, en vez de aumentar, disminuya, dejando improductivos los capitales empleados”.

(20) VENTOSA, *La permanencia de las leyes económicas*, página 20.

(21) *Reorganización de Empresas Industriales*, páginas 280 y 281.

(22) *Cemento*, mayo de 1942, página 108.

Y terminaremos este apartado refiriéndonos brevemente a la protección a la propiedad industrial, o sea al derecho reconocido al autor o introductor de un invento para explotarlo por sí o disponer de él como mejor le convenga, durante el período de tiempo determinado por la ley. Es una intervención del Estado en materia económica, en cuanto concede al beneficiario el derecho exclusivo de explotar el invento o de utilizar la marca, para concretarnos a estas dos modalidades. En ello radican sus ventajas, ya que, contando con tal garantía, se estimula al inventor, y el invento podrá ser explotado en beneficio, no sólo del propietario de la patente o de sus derechohabientes, sino también de los que utilicen los productos fabricados al amparo de la misma, aun prescindiendo del hecho de pasar al dominio público una vez transcurridos cierto número de años.

El interés público puede, no obstante, aconsejar en ciertos casos la expropiación de patentes o la caducidad de aquellas que no se pongan en marcha en un plazo prudencial a partir de su concesión; y además, concediéndose las patentes "sin previo examen de novedad ni utilidad" ⁽²³⁾, no es raro el que se otorguen algunas sin existir tal novedad, ya por estar comprendidas sus reivindicaciones en las de otra anterior, ya por tratarse de dispositivos, procedimientos, etc., de dominio público. Pero los perjuicios que de ello resultan para industriales de buena fe, no tienen su origen en la protección en sí, sino en la forma como ha sido llevada a la práctica.

II. REGULACIÓN INDUSTRIAL

La regulación industrial, en el doble aspecto de dirigir la economía industrial del país y de reducir o regularizar la competencia — aparte de las protecciones a que acabamos de referirnos y de las disposiciones que más adelante examinaremos,

(23) R. D.-Ley, texto refundido de 30 de abril de 1930, artículo 61.

dirigidas a mejorar los rendimientos y a regular las inversiones o capitalizaciones, — puede ofrecer tres modalidades: la necesidad de autorización previa para la instalación y modificación de industrias, la obligatoria aceptación de códigos o acuerdos hasta llegar a las coaliciones forzosas, y la concesión de monopolios.

La autorización previa para instalar o modificar industrias, se propone “regular la actividad espontánea de la iniciativa particular para evitar que, persiguiendo exclusivamente el lucro, sin tener en cuenta los altos intereses nacionales, entorpeciera y dificultara el resurgimiento, empleando inadecuadamente materias primas que escaseaban, divisas precisas para otras atenciones más urgentes, y capitales que podrían consagrarse a menesteres más interesantes para la Nación” (24).

Y es que, como dice ABOLLADO (25), “la iniciativa desordenada polarizó la atención del capital hacia aquellos asuntos de más fácil logro, produciéndose en determinados sectores una competencia ruinosa que, si aparentemente beneficia al consumidor, empobrece la Economía nacional, que es la suma de las economías individuales”.

Por otro lado, defendiendo la política industrial alemana, escribe el Profesor doctor B. (26), que “la libre disposición, puramente individual, del empresario particular en la inversión de capitales, ha conducido en todo el mundo al desarrollo exagerado del aparato industrial” y que “en ello radica un enorme despilfarro de capital que reduce inútilmente el *standard* de vida de todos los países”; y en Alemania mismo, para evitar al mismo tiempo, en los años inmediatamente anteriores a la última guerra, tanto “el hundimiento de las industrias de bienes de inversión”, caso de haber “cortado o reducido sus gastos de rearme”, como la inflación a que habría conducido “la mera continuación de la política de gastos”, “ha sido pre-

(24) DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, I. c., página 10.

(25) *El Español*, 13 de enero de 1943.

(26) *Diario del Comercio*, 3 de julio de 1935.

ciso hacer intervenir la... de control de consumo y de control de las inversiones privadas" (27).

Pero al lado de las expresadas ventajas que, no sólo en períodos transitorios, sino en época normal, aducen sus partidarios en favor de la prohibición de fundar nuevas empresas o de ampliar las existentes, ofrece ello diversos inconvenientes, aparte de la dificultad a que nos hemos referido, en encontrar un organismo interventor que actúe con perfecto conocimiento de causa y cuyas decisiones no puedan ser influidas por intereses particulares de empresas competidoras.

"La regulación desde arriba impuesta — escribe NAHARRO, reproduciendo ideas de BRESCIANI (28) — se traduce en una serie de efectos psicológicos perjudiciales: desaparece el espíritu de iniciativa, temeroso de no ir paralelo al pensamiento estatal; se violan de manera constante los reglamentos y las disposiciones prohibitivas, con lo que decae y se aminora el principio de autoridad de la ley; la gran masa presencia atónita la enorme desproporción del castigo entre los delitos de carácter económico, que habían sido olvidados en la historia de los hechos punibles, y otros de mayor gravedad moral y de mayor tradición, cuyas sanciones son, a veces, inferiores. Y esta subversión en la escala de valores conduce a un desconcierto general en la totalidad de la conducta social."

Nos hemos referido ya a la posible influencia del intervencionismo estatal en el adormecimiento del espíritu de empresa; pero séanos permitido insistir brevemente por lo que afecta a la clase de intervención que ahora comentamos. Si — en opinión de FÉLIX GONZÁLEZ (29) — "cualquier idea merece experimentarse, y sólo desecharse cuando los resultados así lo aconsejen", el denegar una solicitud de autorización de nueva industria o para ampliar, horizontal o verticalmente, las que

(27) M. P. M., *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 163.

(28) *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 153.

(29) *Cemento*, marzo de 1945, página 56.

ya existen, se corre el peligro — con palabras de MARÍN LÁZARO en su Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ⁽³⁰⁾ — de intervenir para “matar de oficio toda concurrencia” y “ahogar en germen hasta el propósito de venturosas iniciativas”.

El técnico textil, por ejemplo, que, después de unos años de práctica y habiendo ahorrado unos pocos miles de pesetas, decide adquirir cuatro telares y establecerse por su cuenta, quizá llegará con el tiempo a poseer una gran fábrica, contribuyendo a dar un mayor auge a la industria nacional, e indirectamente y en la medida de sus fuerzas, a desarrollar el comercio, a incrementar los ingresos del Estado y a elevar el nivel de vida de los trabajadores. No de otro modo empezaron sus abuelos en el siglo XIX.

Es, pues, peligroso, desde el punto de vista que nos ocupa, por matar el espíritu de iniciativa — aunque pueda ser aconsejable en otros aspectos — el dificultar con medidas burocráticas el establecimiento o la ampliación de las industrias; y lo son de un modo particular denegaciones fundamentadas, por ejemplo, en “que los elementos de tisaje actualmente establecidos son en número más que suficiente para el abastecimiento normal de nuestro mercado nacional” ⁽³¹⁾, o en que “la instalación proyectada no vendría a satisfacer necesidad alguna” ⁽³²⁾, o en que “la Superioridad no estima conveniente aumentar el número de telares en las zonas de gran concentración de Industrias textiles” ^(32 bis).

Prescindamos del monopolio de hecho a que la repetida intervención puede dar lugar, “asegurando a cada industria su propio coto — como dice MARÍN LÁZARO ⁽³³⁾, — donde vegeta más que vive merced al acordonamiento que el poder pú-

⁽³⁰⁾ 1. c., página 208.

⁽³¹⁾ *Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona*, 3 de abril de 1945.

⁽³²⁾ Ídem, 4 de abril de 1945.

^(32 bis) Ídem, 6 de noviembre de 1945.

⁽³³⁾ 1. c., página 208.

blico ponga para resguardarla de todo riesgo”; y aun admitamos con NAPOLITANO ⁽³⁴⁾ que el temor de “privilegio casi monopolístico a los que poseen instalaciones industriales o logran obtenerlas... carece de fundamento si se considera que el Estado y los órganos corporativos no sólo actúan sobre la producción, sino también sobre los precios”.

Es un hecho, dice ROBERT ⁽³⁵⁾, que en nuestro país “tan pronto como un obrero aventaja a la media, aspira a tener un taller propio, consiguiéndolo por medio del ahorro o con la ayuda ajena que capitaliza sus esfuerzos”; y si, en cierto aspecto, la atomización industrial que de ello resulta ofrece desventajas, “cabe preguntarse si los jefes de estas empresas hubieran dado el mismo rendimiento a la nación como encargados de taller o jefes de sección de una gran fábrica”.

Pero, además, la iniciativa privada, aun sin auxilio alguno por parte del Estado, ha encontrado casi siempre el modo de hacer frente, como hemos dicho, a las dificultades imprevistas, al compás de los acontecimientos. En Canarias, por ejemplo, cuando la cochinilla, que era su principal riqueza, fué desplazada por los colorantes sintéticos, se produjo una “admirable reacción de la iniciativa privada, que ha hecho de Canarias la productora de los mejores plátanos del mundo, que inundan todos los mercados y que le aseguran una riqueza mucho mayor que la que tenía en la época de la cochinilla” ⁽³⁶⁾.

En Francia, en cambio, cuando, en 1894, hacía algunos años que la preparación sintética de la alizarina había asesado un rudo golpe al cultivo de la *Rubia tinctorum* — que en 1835 ocupaba sólo en Vaucluse más de 1.900 hectáreas, — los cultivadores pidieron auxilio al Estado y consiguieron del Ministerio de la Guerra que los pantalones rojos del ejército fuesen teñidos exclusivamente con el colorante extraído de las raíces de la rubia. La protección fué, no obstante, insuficiente

⁽³⁴⁾ *Instituciones de Economía Corporativa*, página 306.

⁽³⁵⁾ I. c., páginas 152 y 153.

⁽³⁶⁾ CAMBÓ, Discurso en el Cine Goya de Madrid, 11 de abril de 1935.

y el cultivo desapareció del todo, importándose luego de Holanda la rubia para teñir, hasta 1914, los últimos pantalones rojos del ejército francés ⁽³⁷⁾.

Interesante es, también, la reacción de la industria del gas ante la crisis provocada por la aparición de la lámpara eléctrica de incandescencia ⁽³⁸⁾. De ella son fruto el mechero Auer y el de gas a presión, pues dicha industria “se ha defendido brillantemente en la lucha con la electricidad, cuando no ha tenido que contar más que con su propio esfuerzo y nadie ha puesto trabas a su esfuerzo para defenderse”.

Escribe un comentarista de la obra de DUBOIN a que nos hemos referido ⁽³⁹⁾, que “parar el empuje de las invenciones sería una manifestación de impotencia o de locura, pero puede ser prudente... controlar su aplicación”, y más adelante, que “ya que el gran relevo [del hombre por la máquina] se realiza, en vez de combatirlo aceptémoslo, pero disciplinándolo, adaptando el régimen económico a los nuevos fenómenos”. Es lo que OLIVETTI y PAUWELS llamaron “racionalizar la racionalización” ⁽⁴⁰⁾.

Ha dicho GARAU ⁽⁴¹⁾ que “la parte más saneada de nuestra economía nacional es aquella que está en manos de los industriales individuales y que podríamos clasificar en empresas pequeñas y medianas, las que precisamente son las que menos acceso tienen al crédito bancario y a la protección de los poderes públicos, y ello es debido a que precisamente por carecer de aquella protección, han tenido que desenvolverse al amparo del negocio industrial y al margen del financiero”.

Y terminaremos este apartado con las palabras de TIBERIO que reproduce TÁCITO en sus *Anales*: “Te dió dinero, HOR-

⁽³⁷⁾ DUBOIN, *La grande relève des Hommes par la Machine*, páginas 195 y 196.

⁽³⁸⁾ CAMBÓ, l. c.

⁽³⁹⁾ O. R. T., *Diari Mercantil*, 25 de julio de 1933.

⁽⁴⁰⁾ I. I. O. S. T., *Deuxième Conference Internationale*, volumen IV, páginas 10 y 20.

⁽⁴¹⁾ *Las Empresas*, página 84.

TAL, el divino AUGUSTO, pero sin estar obligado a ello, ni con la condición de dártelo siempre. En otro caso, languidecerá la actividad, aumentará la desidia, si ningún temor ni ninguna esperanza proviene de uno mismo, y todos esperan, seguros, el socorro ajeno, cobardes ante ellos mismos, onerosos para nosotros ⁽⁴²⁾.

La obligatoria aceptación de códigos o acuerdos entre productores ha tenido su principal exponente en los Estados Unidos, como parte integrante de la política económica de ROOSEVELT en los años 1933-35, de la que nos ocupamos hace tiempo ⁽⁴³⁾, y una de cuyas consecuencias fué, según ROBERT ⁽⁴⁴⁾, “la atribución de hecho del poder económico a las asociaciones de empresarios, con algunas limitaciones, que incluso fueron en parte soslayadas por otros métodos”.

La intervención estatal en el extremo de que ahora nos ocupamos ha sido reflejo de las opiniones contradictorias defendidas por diversos autores acerca de sus ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista del interés colectivo. Y así, ora se prohíben o dificultan las coaliciones, ora se hacen obligatorias, si unas disposiciones ponen obstáculos a la creación de grandes empresas, otras dan facilidades para ello, si por un lado se protegen las pequeñas industrias, hasta las de carácter familiar o artesanal, se favorece por otro su desaparición, absorbidas por otras más importantes.

“En los países de industria adelantada — escribe VITO ⁽⁴⁵⁾ — los poderes públicos han advertido la necesidad de tomar posición respecto a ellas, unas veces favoreciendo su constitución y desarrollo, y hasta promoviendo su estabilidad mediante la sindicación obligatoria, otras veces instituyendo formas es-

⁽⁴²⁾ II, XXXVIII, [5]-[6].

⁽⁴³⁾ Conferencia pronunciada en la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, 12 de marzo de 1936; resumen radiado desde Radio Asociación de Cataluña, E. A. J. 15, el 21 de abril de 1936.

⁽⁴⁴⁾ *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 130.

⁽⁴⁵⁾ I. c., página 2.

pecíficas de control administrativo o dictando normas jurídicas de carácter restrictivo.”

Y es que, en un principio, en toda concentración se veía tendencia a monopolio, o sea, una maquinación para alterar los precios en perjuicio del consumidor, contra lo que debía actuar el Estado para restablecer el libre juego de la oferta y la demanda. Pero más tarde se vió que la finalidad podía ser otra ⁽⁴⁶⁾, por ejemplo, mejorar el precio de coste o la calidad del producto; y desde este nuevo punto de vista, el Estado, como depositario del interés colectivo, puede favorecer su desarrollo, e incluso declarar obligatoria la agrupación o sindicación, y el cumplimiento de las normas que las agrupaciones o sindicatos intervenidos o no por el Estado, estimen necesario.

Y téngase en cuenta que la debilitación del capitalismo que dichas agrupaciones representan — ya que si todas las empresas agrupadas, como ha dicho VON MISES, fueren lo bastante fuertes para no temer la concurrencia de las otras, la concentración no tendría sentido — no ha de desembocar necesariamente en el socialismo o en la economía dirigida. “La economía de concurrencia — se lee en la citada obra de VITO ⁽⁴⁷⁾ — puede muy bien superarse sin recurrir a la socialización”, pues “conservándose la iniciativa individual y la propiedad privada, los desórdenes de la concurrencia pueden obviarse instaurando un sistema de disciplina de la producción, en el que los mismos interesados tengan su parte principal”. Es la economía autodirigida a que ya nos hemos referido.

Por lo demás, el hecho de si la existencia de grandes empresas o agrupaciones es o no perjudicial para los pequeños industriales, ha sido asunto muy discutido. Dice VITO ⁽⁴⁸⁾ que “así como en los bosques seculares los árboles añosos no

⁽⁴⁶⁾ BORRELL, *Reorganización de Empresas Industriales*, pág. 108 y sig.

⁽⁴⁷⁾ l. c., página 13.

⁽⁴⁸⁾ l. c., página 44.

siempre sofocan a las plantas jóvenes, sino que a veces las protegen, así también algunas grandes industrias hacen surgir y conservan en vida gran número de pequeñas... de accesorios y de manutención". No otra cosa resulta de los estudios acerca de la aglomeración industrial.

Lo mismo puede decirse, en cierto aspecto, de los grandes almacenes — de un modo especial, de los llamados a precios únicos, — en contraposición a las pequeñas tiendas que realizan, también, su función social, proporcionando a la clientela artículos, más o menos especializados, que aquéllos no están en condiciones de suministrar.

Finalmente, la regulación de la competencia, eliminando la calificada de desleal y la que tenga por base un menor precio de coste conseguido por incumplimiento de la legislación social o mala calidad de los artículos fabricados, sólo ofrece — en principio — ventajas para la colectividad; pero debe evitarse que las normas reglamentarias impuestas al efecto, constituyan un obstáculo a la libre iniciativa y a la puesta en práctica de los progresos industriales.

III. MEJORA DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL

Sabido es — y de ello nos hemos ocupado en otra parte ⁽⁴⁹⁾ — que la presencia de personal especializado, en todas las categorías profesionales, constituye un elemento determinante en la localización industrial; y que causa y efecto de esta última, son las escuelas donde aquél cursa sus estudios, los laboratorios y seminarios, y las instituciones y centros de investigación científica, técnica y económica.

Mucho se ha discutido acerca de si la enseñanza y la cultura son funciones privativas del Estado o si es preferible con-

⁽⁴⁹⁾ Conferencia pronunciada en la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, el 4 de noviembre de 1944.

fiarlas a los organismos locales o provinciales, o a corporaciones o patronatos de origen privado. El estudio de las ventajas e inconvenientes de cada solución nos apartaría — por tratarse más de razones políticas que económicas — del tema que nos hemos propuesto desarrollar en este ensayo.

Pero, en todo caso, creemos de interés reproducir las ideas expuestas recientemente por ABOLLADO en el Instituto de Ingenieros Civiles, acerca de la función del doctor o licenciado y la del ingeniero en la industria química. “Una industria instalada por los mejores técnicos — dice ⁽⁵⁰⁾ — se hace vieja en pocos años si no tiene una constante renovación que sólo puede hacer el técnico propio. Pero éste está de tal modo polarizado en el ambiente específico de su industria, que nada podrá hacer si no existe en el país un clima científico suficientemente elevado que permita mantener una investigación general que suministre los materiales de progreso necesarios, tanto en ciencia como en técnica, que luego los técnicos y científicos peculiares de la industria habrían de aplicar.”

“La Universidad — prosigue más adelante — tiene ese enorme cometido... de mantener en todo su vigor el progreso de la ciencia en sí”; y al paso que “el químico no ha de tener sentido económico, en el ingeniero esa es su facultad más característica”, junto con la resolución de “los problemas mecánicos y físicos de movimientos de grandes masas y construcción, con materiales apropiados, de los aparatos convenientes”.

El químico y el ingeniero — a juicio del conferenciante — tienen sus campos de actuación bien delimitados, por lo que debe evitarse el “que por querer especializar”, se perdiese “precisamente la especialización, pues ésta no consiste... en el conocimiento monográfico, sino en la formación; y el hombre de ciencia, el investigador, el analista, tiene una concepción completamente distinta al realizador, al constructor, al economista práctico” ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵⁰⁾ *La industria química y la química industrial*, página 39 y sig.

⁽⁵¹⁾ *Idem*, página 44.

Al tratar de la regulación de la competencia, nos hemos referido a la intervención estatal en pro y en contra de las agrupaciones industriales; y así como vimos en el capítulo I que en diversas épocas se ha querido combatir el paro obrero mediante la suspensión de la puesta en práctica de los progresos técnicos, aludimos en el II a ciertas medidas tendentes a favorecer la organización científica del trabajo en sus diversas modalidades.

En otras partes, y singularmente en la Conferencia que dimos el 17 de octubre de 1931 en la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona ⁽⁵²⁾, nos hemos ocupado de las ventajas e inconvenientes de la Racionalización y de la Organización Científica del Trabajo, y concretándonos a su aspecto social, hemos concluído recientemente ⁽⁵³⁾ que “las consecuencias desfavorables son debidas casi siempre a... causas que... pueden resumirse en desconocimiento del asunto [por parte del organizador] o en falta de la prudencia necesaria en toda innovación”. Y por ello, “antes de atribuir a la racionalización consecuencias socialmente desfavorables, es preciso asegurarse de que en el caso concreto que se estudia, no nos encontremos ante una irracionalización”.

Pero el que la Organización Científica del Trabajo sea cosa ventajosa, no implica el que necesariamente lo sea la intervención estatal para introducirla y desarrollarla en las actividades privadas. Esta intervención, en efecto, puede irrogar perjuicios, aunque se proponga una racionalización verdadera — no una falsa racionalización — en determinadas circunstancias y según sean las modalidades prácticas de la misma.

La normalización, por ejemplo — una de cuyas ventajas es el permitir fabricar en mayores series los tipos conservados, “ampliándose virtualmente la capacidad del mercado” ⁽⁵⁴⁾,

⁽⁵²⁾ *Técnica*, marzo de 1932, pág. 34 y sig.

⁽⁵³⁾ *Revista de Trabajo*, febrero de 1945, página 163.

⁽⁵⁴⁾ ROBERT, *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 151.

— de la que nos hemos ocupado en otra parte ⁽⁵⁵⁾ — puede llevarse naturalmente a la práctica por solo convenio entre los industriales interesados; pero en último término, la coacción estatal es siempre indispensable para conseguir — si interesa — una completa aceptación. Y este “si interesa”, en los aspectos técnico y económico, es de la máxima importancia para conseguir normalizaciones científicamente justificadas y evitar los perjuicios a que, en otro caso, darían lugar.

Y prescindiendo de las otras modalidades que la racionalización puede revestir, terminaremos este apartado tratando ligeramente de la lucha contra los desperdicios, tema del que nos hemos ocupado en diversas ocasiones ⁽⁵⁶⁾ y últimamente en la Conferencia que dimos el 28 de mayo de 1945 en la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Diremos, pues, tan sólo que el máximo aprovechamiento de los desperdicios — finalidad a conseguir a menudo con sólo un poco de atención y buena voluntad — no puede menos de contribuir a la reducción de precios y, por tanto, a incrementar las transacciones comerciales, reanimando el consumo y la producción. Y lo mismo puede decirse del aprovechamiento de las energías, de un modo especial habida cuenta del gran consumo requerido para el funcionamiento de la moderna industria.

Podría creerse que el ahorro de primeras materias había de tener como consecuencia el contribuir al subconsumo, aumentando el desequilibrio entre oferta y demanda. No olvidemos, sin embargo, que se produce para consumir; y si la producción efectiva excede de la necesaria para atender al consumo normal, se presenta el dilema de incrementar este último o reducir la primera. Pero si adoptamos aquella solución, no ha de recurrirse en modo alguno a un consumo específico superior al técnicamente necesario.

⁽⁵⁵⁾ *Economía y Organización Industrial*, página 276 y siguientes.

⁽⁵⁶⁾ *Reorganización de Empresas Industriales*, página 1 y siguientes; *Economía y Organización Industrial*, página 245.

En otro orden de ideas, ha dicho ROBERT ⁽⁵⁷⁾ que “si la tarea que pudiera hacer un obrero han de realizarla dos, se substraen indebidamente un productor a otras actividades que pudieran acrecer la riqueza y la renta nacional”.

IV. POLÍTICA DE CAPITALIZACIONES

Aunque en el capítulo precedente nos hayamos ocupado del ahorro — que consiste, en esencia, en diferir un goce o un consumo de riqueza para tenerla disponible más adelante, en ocasión que se conceptúe más apropiada — conviene referirnos de nuevo al mismo, por su relación con la política de capitalizaciones. “Allí donde cada uno ahorra y se priva del máximo posible — dice LIST ⁽⁵⁸⁾ — no hay ningún estimulante para producir.”

Y empecemos por la dificultad de concretar lo que se entiende por “gastos superfluos”, cuya supresión es la base del ahorro. “Poco a poco primero — dice FUENTES IRUROZQUI ⁽⁵⁹⁾ — y a gigantescos pasos, con los que se anda en los últimos tiempos en el camino de la vida y de la historia, el número de necesidades son más crecientes, y lo que un día se pudo considerar lujo, es decir, superfluo por contraste con lo imprescindible o menos ineludible, se convierte rápidamente en necesario”, concepto expresado por GIDE ⁽⁶⁰⁾ más brevemente al afirmar que “civilizar un pueblo... no es más que hacerle sentir nuevas necesidades”.

El lujo, por lo demás, según FERNÁN CABALLERO ⁽⁶¹⁾, es un “tributo obligatorio del rico a las manos e inteligencia que lo confeccionan, bella fuente que estimula el genio, que sostiene la industria y que mantiene a miles de obreros. Si cesase

⁽⁵⁷⁾ l. c., página 171.

⁽⁵⁸⁾ *Sistema Nacional de Economía Política*, página 179.

⁽⁵⁹⁾ *Abastecimientos, tasas y racionamientos*, página 38.

⁽⁶⁰⁾ *Cours d'Economie Politique*, volumen I, página 48.

⁽⁶¹⁾ *Lady Virginia*, capítulo I.

el lujo — continúa, — si faltasen los capitales que en él se invierten, ¿qué sería de vosotros, miopes que lo censuráis, siendo vuestra Providencia? Anatematícese, ridiculícese en buena hora la loca vanidad, que quiere igualar al que no tiene con el poderoso, y que menospreciando la honrada y tranquila medianía, pretende subir en zancos de este vicio dañino a esfera distinta de la que en suerte le cupo; pero no se confunda este punible y despreciable afán con la necesaria y equitativa esplendidez del poderoso, que por este medio hace circular sus mayores rentas, en lugar de atesorarlas”.

En diversas ocasiones ha sido gravado el lujo con impuestos que contribuyen a incrementar los ingresos estatales, aparte de los progresivos o progresionales sobre la renta o sobre las utilidades o beneficios, que reducen el margen que puede destinarse a gastos más o menos superfluos. De ellos nos ocuparemos en el capítulo próximo; pero no olvidemos que al reducirse el beneficio, el afectado no sólo reducirá sus capitalizaciones en perjuicio de la futura renta nacional, sino que habrá “de restringir sus gastos generales, que no son otra cosa que la cifra de negocios de otras personas” ⁽⁶²⁾.

Donde, como en el Japón, se ha buscado un ahorro forzoso para canalizarlo hacia las arcas del Tesoro, no se ha descuidado este aspecto social de tales medidas; y así, aparte de reemplazar la capitalización privada por la estatal, la mano de obra que quedaba en paro forzoso, “como ocurría con los artífices que labraban esas maravillosas figuritas de marfil, típicamente niponas, podía ser empleada en la industria mecánica de guerra, falta de obreros especializados” ⁽⁶³⁾. Y en Alemania, a primeros de 1943, se decretó “la desaparición total y absoluta de la moda: las tiendas de alta costura quedan clausuradas — se lee en una crónica periodística ⁽⁶⁴⁾, — las revistas de moda suprimidas, y los dibujantes y artistas crea-

⁽⁶²⁾ *Un Plan francés de Economía Dirigida*, página 36.

⁽⁶³⁾ ROBERT, *Dyna*, septiembre de 1941, página 346.

⁽⁶⁴⁾ ALCÁZAR, *Diario de Barcelona*, 3 de marzo de 1943.

dores de la moda pasarán a incorporarse a la industria de guerra”.

En circunstancias excepcionales puede todo ello admitirse como mal menor, análogamente a la práctica de combatir el paro llevando “a mecánicos, tejedores y carpinteros a cavar tierra y a transportar capazos de un lado para otro”, aunque ello resulte “además de caro, desmoralizador para aquellos tipos de obreros calificados” ⁽⁶⁵⁾. Pero en otro caso, aun prescindiendo de la selección profesional — prevista ya por BALMES al decir ⁽⁶⁶⁾ que “cada cual ha de dedicarse a la profesión para la que se sienta con más aptitud”, ya que si “la palabra talento expresa para algunos una capacidad absoluta, creyendo equivocadamente que quien está dotado de felices disposiciones para una cosa, lo estará igualmente para todas”, el insigne filósofo afirma que “nada más falso” que tal opinión, — no debe perderse de vista que “no sólo de pan vive el hombre” y que las satisfacciones del espíritu son tan necesarias como las del cuerpo.

Por lo demás, afirma WEBER ⁽⁶⁷⁾ que “la limitación de los beneficios extraordinarios — sea mediante medidas de limitación de beneficio o por medio de impuestos — no será fácil de realizar sin afectar profundamente la formación de capital y el incentivo al trabajo”. Y antes ⁽⁶⁸⁾ había dicho que “la absorción general de los beneficios excesivos tiene el peligro de que, en vez de conseguir una tensión de energías económicas por encima de la normal, se alcance una normalización de rendimiento, lo que no es de desear”.

Y añade que “el tratamiento rígido de las amortizaciones y las reservas tácitas con la aplicación rigurosa de la absorción de beneficios, puede exteriorizarse fácilmente en el fu-

⁽⁶⁵⁾ TALLADA, *Política económica en los tiempos de crisis*, página 73.

⁽⁶⁶⁾ *El Criterio*, capítulo III, § 1.

⁽⁶⁷⁾ *Compendio de Política Económica*, página 55.

⁽⁶⁸⁾ Ídem, página 34.

turo, en una cobertura de necesidades menos favorable”, ya que “no puede determinarse desde fuera, ordenando las cantidades de dinero que pueden aparecer en balance”, la suma precisa para “el desarrollo de las explotaciones” y para hacer frente, en su caso, a “las dificultades de adaptación” en un futuro más o menos próximo.

Dice BOSCH AYMERICH ⁽⁶⁹⁾ que “es altamente beneficioso para un país la continuada depreciación del poder adquisitivo de la moneda”, aunque reconozca que ello “no deja, en ciertos casos particulares, de ocasionar graves injusticias sociales”. Pero no se olvide que — con palabras de WEBER ⁽⁷⁰⁾ — “la fuente principal de la creación de capital, en sentido económico-político, es la ganancia del empresario y el progreso técnico y de organización”. Si aquélla es reducida, decrecerá, pues, el ritmo de las capitalizaciones, y sin capitales frescos, no hay progreso industrial.

Es, en efecto, cuando las necesidades del consumo están satisfechas, que puede empezarse la creación de bienes fijos, y sólo con el sobrante de los ingresos o rentas, después de atendidas aquéllas, pueden financiarse las empresas dedicadas a otra clase de actividades. “Un país — dice el propio BOSCH AYMERICH ⁽⁷¹⁾ — está en condiciones de crear bienes fijos cuando, para atender a las necesidades del consumo corriente... no precisa el trabajo de todos, es decir, cuando el consumo directo del país es inferior al que se podría disfrutar, dado su presente desenvolvimiento técnicoeconómico”.

La inversión es igual al ahorro, según la ecuación tan conocida; y no podrá, por tanto, existir la primera sin que aparezca el segundo, voluntario o forzoso, en los individuos o en el Estado. Pero no olvidemos que — con palabras de PARÍS EGUILAZ ⁽⁷²⁾ — el aumento de las capitalizaciones debe reali-

⁽⁶⁹⁾ *El paro obrero*, página 21.

⁽⁷⁰⁾ *l. c.*, página 31.

⁽⁷¹⁾ *l. c.*, página 11.

⁽⁷²⁾ *El Estado y la Economía*, página 254 y siguientes.

zarse “proporcional y armónicamente, es decir, de una manera equilibrada en los cuatro grupos”: industrial, agrícola, vivienda y obras públicas.

Es por ello que “las capitalizaciones deficientes o ineficaces derivan de encomendar en grado excesivo esa función al Estado o entidades menores, Provincia o Municipio; y la falta fundamental es la... del sentido de iniciativa de los particulares y la aspiración de poner los ahorros fuera de todo riesgo”, ya que “si no hay cierta acometividad en el carácter de los individuos que haga posible el desarrollo de gran número de empresas, es decir, si no hay gran número de personas con aptitud de empresarios, se cae fatalmente en la capitalización desequilibrada y deficiente, propia de una acción forzada estatal o municipal”.

Por lo demás, la necesidad de las capitalizaciones ha sido reconocida incluso en la U. R. S. S., como pone de manifiesto TALLADA ⁽⁷³⁾ al decir, con referencia al plan quinquenal, que “toda esta creación de grandes fábricas, de presas colosales, de producción en gran escala de tractores y maquinaria agrícola, toda la industrialización que rápidamente se ha querido llevar a cabo, de la economía rusa, no es más que la obtención de un aumento de capital poseído por el único capitalista existente que es el Estado”.

“Y esta obtención y creación de nuevo capital — continúa — se ha hecho en Rusia precisamente siguiendo los mismos procedimientos que los marxistas tanto han censurado en el régimen económico capitalista. En nombre de un ideal se ha sometido al obrero ruso a un régimen de trabajo muy duro, a la creación de enormes supervalúas de las que se ha apropiado el Estado para satisfacer sus necesidades y posibilitar la ejecución del plan quinquenal.”

No faltan, sin embargo, quienes estiman que debe favorecerse más el consumo que la inversión. En el plan francés a

(73) *L'Organització econòmica a la Rússia soviètica*, página 26.

que precedentemente nos hemos referido, de cuyo Comité era DEAT secretario general, se lee, por ejemplo ⁽⁷⁴⁾, que “hay tendencia a traducir siempre en inversiones nuevas un poder de compra del cual una parte cada vez mayor debería ser reservada para el consumo inmediato, puesto que tenemos ahora mucha menos necesidad de nuevos medios de producciones que de medios de consumo”.

Y añade que “por esto, en el estadio de la economía a que hemos llegado, pertenece desde ahora, no ya al único patrono aislado, sino a los representantes cualificados de la comunidad, el determinar en qué medida y en qué direcciones las inversiones pueden ser útiles al interés general”.

(74) *Un Plan francés de Economía Dirigida*, página 169.

CAPÍTULO VIII

VENTAJAS E INCONVENIENTES

(Conclusión)

Después de las modalidades de intervencionismo estatal estudiadas en los precedentes capítulos, nos ocuparemos en éste de aquéllas cuya finalidad inmediata es subvenir a las necesidades dinerarias del Estado, o defender el valor externo e interno de la moneda nacional.

I. INGRESOS DEL ESTADO

Dice GUAL VILLALBÍ ⁽¹⁾ que “el poner de acuerdo el modo de subvenir a las necesidades económicas del Estado con los intereses singulares de los contribuyentes, ha sido siempre problema delicado y harto difícil, que explica la abundante literatura producida alrededor del tema de la naturaleza y ordenación de los impuestos”.

No pretendemos nosotros hacer oír nuestra voz en este conjunto de opiniones contradictorias, ni reproducir las más autorizadas de los dos bandos, porque esto exigiría un espacio muy superior al de que podemos disponer. Diremos tan sólo que estamos de acuerdo con el autor expresado en no subscribir la opinión de los que afirman que “en materia de impuestos, la justicia es un concepto relativo” y en admitir “que el fin de la economía del Estado no descansa en la producción de riqueza, sino en la producción de fuerzas productivas”, o

(1) *La Vanguardia Española*, 22 de abril de 1939.

sea “que el egoísmo bien entendido de la Administración pública le debe llevar a favorecer el desarrollo económico y bienestar de la colectividad, porque si se atiende solamente a la inmediata función recaudatoria, se perjudica o destruye la eficacia del instrumento productivo (industria y comercio), y la propia Hacienda nacional recibe, a la corta o a la larga, el contragolpe, ya que se acortan o se agotan las fuentes de las cuales provienen sus ingresos”.

Todos los impuestos presentan sus ventajas y sus inconvenientes, con independencia de la cuantía de las tarifas y condiciones de aplicación. Los indirectos, por ejemplo, ofrecen mayor generalidad que los directos, una gran productividad y elasticidad, y su pago es, hasta cierto punto, voluntario. Encarecen, en cambio, el coste de la vida y — si gravan artículos de primera necesidad — repercuten en mayor proporción sobre las familias modestas y numerosas. Su administración, por lo demás, se ha dicho que es cara y difícil; y así lo reconoce en su preámbulo, para casos concretos, la Ley de 22 de enero de 1942 que suprimió el impuesto de usos y consumos — al año de vigencia — sobre diversos artículos. Sin embargo, con carácter más general, el coste de gestión de este impuesto fué en 1943 un 0,66 por 100 de la suma recaudada, al paso que el del conjunto de los servicios fiscales del Ministerio de Hacienda ascendió a un 2 por 100 ⁽²⁾.

Si, concretándonos a la finalidad de este ensayo, consideramos los impuestos tan sólo como intervención estatal en la economía privada, en forma de una participación en los beneficios netos o en los ingresos brutos de la misma, ORBANEJA, por ejemplo, ha estudiado recientemente ⁽³⁾ los efectos de la imposición sobre la tendencia del empresario a invertir, y deduce que aquélla puede afectar a la escala de preferencia y al deseo de soportar el riesgo, influyendo — en general — des-

(2) DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE USOS Y CONSUMOS, *Memoria correspondiente al Ejercicio de 1943*, página 132.

(3) *Moneda y Crédito*, marzo de 1944, página 22.

favorablemente sobre las inversiones en bienes-capital con períodos largos de producción, y, por tanto, con altos tipos de riesgo.

Interesante es, también, el estudio de CIRIACY ⁽⁴⁾ acerca de las relaciones entre el sistema tributario y la conservación de los recursos. De él deduce que sólo dos tributos, el que grava las transmisiones *mortis causa* y el proporcional sobre la renta, son casi neutrales respecto del estado de conservación de los recursos anterior a su imposición; y que, por tanto, desde el punto de vista de una política nacional de conservación de recursos hay que acudir al impuesto sobre la renta, al de utilidades y al de beneficios extraordinarios, contrariamente a la práctica generalizada de servirse cada vez más de los de consumo y sobre la propiedad.

Por la íntima conexión que, con los impuestos, ofrece el tipo de amortización de los bienes fijos en las empresas industriales, hemos de referirnos al inconveniente de que las disposiciones fiscales no permitan siempre una perfecta concordancia entre el valor real y el contabilizado de aquellos bienes, o se liquiden las utilidades a base de un beneficio fiscal superior al realmente calculado de acuerdo con el resultado de una concienzuda valoración del activo y pasivo de la empresa. “El economista — dice WEBER ⁽⁵⁾ — debe exigir amortizaciones que basten para la conservación de la substancia de la explotación y de su duradera fuerza productiva dentro del marco de la conveniencia económiconacional.”

De ello nos hemos ocupado en otra parte ⁽⁶⁾ con alguna extensión, pero el asunto fué, hace poco, estudiado por BROWN y PATTERSON ⁽⁷⁾, con aplicación a las construcciones realizadas con fines de guerra y cuyo coste resulta prohibitivo para los particulares. Es evidente que en este caso debe el Estado

⁽⁴⁾ *The Quarterly Journal of Economics*, febrero de 1944, página 157.

⁽⁵⁾ *Compendio de Política Económica*, página 28.

⁽⁶⁾ *Valoraciones Industriales*, página 38 y sig.

⁽⁷⁾ *The Quarterly Journal of Economics*, agosto de 1943, página 630.

pagar, junto con el importe de sus pedidos, la “amortización acelerada” del equipo industrial; aunque se ha discutido si la diferencia entre esta amortización acelerada y una amortización corriente debe satisfacerla el Estado como cliente o como una de tantas “inversiones gubernamentales”. Las amortizaciones urgentes, por lo demás — hasta en sesenta meses, — están admitidas, a los efectos del impuesto sobre beneficios extraordinarios, en la *Revenue Act* de 1940.

También GARAU ⁽⁸⁾, al tratar de “El Estado y las Empresas”, se ocupa de los límites de la tributación, advirtiendo que “en un estado de progreso tal que no permitiera a ningún ser humano producir mayor cantidad de lo que sus necesidades primarias exigen, sería imposible ninguna organización colectiva, es decir, no podrían organizarse para la producción de los servicios públicos que el progreso exige”; y de ello resulta que “sin beneficio absoluto la existencia del Estado es imposible”.

Por lo demás, “teóricamente, el impuesto debería representar un porcentaje del producto neto nacional, calculado de manera que los servicios producidos mediante el mismo repercutieran favorablemente a la colectividad, facilitando su desarrollo económico progresivo, con lo cual se impone un límite al indicado porcentaje puesto que más allá de él, el sacrificio impuesto al contribuyente no queda compensado por el servicio recibido”.

Y terminaremos este apartado, recordando que, según LEÓN XIII ⁽⁹⁾, el Estado obraría “injusta e inhumanamente, si de los bienes de los particulares extrajera, a título de tributo, más de lo que es justo”.

Acerca de los empréstitos, poca cosa hemos de añadir a lo consignado en capítulos anteriores, aparte del hecho de representar una contribución impuesta a las generaciones futuras;

⁽⁸⁾ *Las Empresas*, página 339 y siguientes.

⁽⁹⁾ *Rerum Novarum*, IX.

por lo que deberían reducirse a contrapartida de gastos reproductivos o destinados a finalidades beneficiosas para aquéllas. Se destinan, también, con frecuencia, a atender gastos extraordinarios, aunque algunos autores prefieren para este caso, a ser posible, la imposición, por una sola vez, de contribuciones extraordinarias.

Un empréstito puede, por lo demás, representar la contrapartida de la capitalización de una renta o de una subvención garantizada; y así como es frecuente que la Banca haga anticipos con la garantía expresada, no es tampoco raro que la misma cubra el servicio financiero de empréstitos que permitan, por ejemplo, la ejecución de obras públicas de utilidad nacional. Con el producto de la venta del resguardo acreditativo de la garantía de interés, creado por R. D. de 22 de septiembre de 1917, o, mejor, mediante la colocación en el mercado de las cédulas emitidas con garantía de dicho resguardo — finalidad de la Caja de Emisiones, cuyos Estatutos fueron aprobados por Rs. Os. de 17 de julio y 19 de agosto de 1918 — ha podido costearse la construcción de algunos ferrocarriles. Y descontando el Banco de España las aportaciones a que se comprometieron los industriales laneros, pudieron reconstruirse las fábricas devastadas en el curso de la guerra de 1936-39 ⁽¹⁰⁾.

Pero se lee en un editorial de *El Financiero* ⁽¹¹⁾, que “los intereses de las nuevas deudas se agregan a las cargas, ya excesivas, del Estado, y luego, o mejor dicho, al mismo tiempo, el Estado organiza y sostiene el hambre de capitales y condena, en consecuencia, a la economía nacional a la decadencia”; y la idea ha sido recientemente reproducida por ROBERT ⁽¹²⁾ al decir que en caso de “insuficiencia económica del país... la absorción del ahorro a través de empréstitos lanzados con tal fin, aparte de que puede hacerse difícil, entrañará

⁽¹⁰⁾ *La Vanguardia Española*, 23 de noviembre de 1939.

⁽¹¹⁾ 19 de mayo de 1935.

⁽¹²⁾ *Un problema nacional. La industrialización necesaria*, página 90.

la detracción de esos capitales de otras inversiones más productivas, contribuyendo a retardar el proceso de racionalización económica”.

Es precisamente desde este punto de vista que las emisiones de Deuda pueden considerarse como una de las intervenciones estatales en materia económica, aun sin llegar al monopolio de las emisiones por parte de un Servicio Nacional de Ahorro y Capitalización ⁽¹³⁾ que recogiendo todo el ahorro privado y, en caso necesario, anticipos del Banco de Emisión, proporcionase los créditos a largo plazo y de capitalización, necesarios al Estado para Obras Públicas, y a la agricultura, la vivienda y la industria.

Con la aplicación de esta idea — afirma PARÍS EGUILAZ — “el crédito a largo plazo, de instrumento de especulación en manos de Bancos y usureros, pasa a ser una función pública accesible a todos los particulares y empresas laboriosas, el ahorro empleado hoy en inversiones de estabilidad dudosa, queda bajo la garantía completa que proporciona el nuevo sistema, pudiendo sufrir únicamente fluctuaciones en el tipo de interés anual, y el desarrollo de empresas privadas que hoy sólo es posible contando con el apoyo de las grandes organizaciones financieras (Bancos), quedará facilitado extraordinariamente al poder ser dotadas de una base financiera toda una serie de iniciativas particulares”.

Aunque este sistema “nada tiene que ver — según su autor — con las utópicas concepciones marxistas”, podría ser muy discutido; pero no creemos necesario ocuparnos más de él, ya que “no hay que pensar — añade — ... que pueda ser implantado inmediatamente”.

Volviendo a la posible influencia de las emisiones estatales en perjuicio de las privadas, hemos de descartar el caso en que éstas no aparecen por otros motivos, pues entonces, como dijo LARRAZ, a la sazón ministro de Hacienda, a un redactor de

(13) PARÍS EGUILAZ, *El Estado y la Economía*, páginas 311 a 315.

Ya, con motivo de una conversión voluntaria de Deuda ⁽¹⁴⁾, “no hay razón alguna para que el tenedor de Obligaciones del Tesoro se incline por el reembolso”, pues “precisamente el problema que se le plantea es el de la inversión”, debido a que “la demanda de fondos públicos supera con creces a la oferta”. Y hemos de notar, también, el hecho que la Deuda pública dispone con frecuencia de una clientela especial, distinta de la que suscribe valores industriales.

Variante de los empréstitos, o como empréstitos forzosos a suscribir por el Banco de Emisión, pueden considerarse los anticipos al Tesoro por parte de este último, tanto si vienen consignados taxativamente en la ley que otorga el privilegio, como si se imponen más tarde para hacer frente a circunstancias excepcionales.

Dejando para más adelante su posible influencia inflacionista — ya que, en definitiva, su contrapartida en el Balance del Banco no puede ser otra que la emisión de billetes para necesidades no mercantiles — no ha de perderse de vista que dichos anticipos pueden considerarse como una compensación al privilegio otorgado al Banco por el Estado.

Este peligro de inflación puede, por lo demás, evitarse o al menos reducirse con medidas acertadas; y así, al proceder POINCARÉ, en 1926-28, al saneamiento de las finanzas francesas y consiguiente estabilización del franco, reformó los Estatutos del Banco de Francia en el sentido de no permitirle “las intervenciones en el mercado libre” y de limitar “severamente los créditos que el Banco puede conceder al Estado” ⁽¹⁵⁾.

En el concepto general de monopolio pueden considerarse incluidos los privilegios derivados de la propiedad industrial o de las concesiones administrativas; pero desde un punto de

(14) *Diario de Barcelona*, 27 de septiembre de 1942.

(15) *Després*, 19 de enero de 1935.

vista más concreto, hemos de referirnos exclusivamente a los llamados fiscales, o sea a los servicios o actividades industriales que el Estado — o el Municipio en su caso — se reservan, manteniéndolos fuera de la libre concurrencia.

Afirman sus partidarios que con los monopolios se favorece al consumidor en cuanto el ahorro de gastos de propaganda permite una reducción en el precio de venta, se evita fácilmente la sobreproducción, y se estimulan los inventos de los que podrían llamarse *substitutivos* del producto monopolizado.

Otros economistas, en cambio, niegan todas estas ventajas, y particularmente la primera y la última, ya que la reducción de precios no es cosa frecuente, como demuestra la experiencia, y los substitutivos del producto monopolizado cuando no vienen también incluidos desde un principio o no se incluyen más tarde en el monopolio, son gravados con frecuencia con impuestos especiales. Ejemplo de ello son los encendedores.

La verdadera ventaja consiste, como se ha hecho notar, en permitir un incremento en los ingresos estatales.

Por lo demás, a casi todos los monopolios podrían atribuirse los conceptos que, con referencia al de petróleos, figuran en la Enciclopedia Espasa ⁽¹⁶⁾: “Como todo monopolio, el de que se trata es contrario a la libertad de comercio. Ciertamente que, como decía en su preámbulo el R. D.-Ley de 28 de junio de 1927, los comerciantes y las empresas particulares se confabulaban para poner precios excesivos; pero esto tenía remedio con una acción enérgica de las autoridades, mientras que ahora es el Estado el que encarece el producto.”

“La gasolina — prosigue — ha subido desde 52 céntimos el litro a 76. Para juzgar de lo abusivo del precio, basta considerar que la gasolina costó al Monopolio, en 1929, 83 millo- nes de pesetas y la vendió (en la misma cantidad comprada)

(16) Apéndice 8, página 416, palabra Petróleo.

en 254 millones, lo que representa un encarecimiento del 200 por 100. Esto es tanto más odioso cuanto que se trata de un artículo de primera necesidad para la calefacción y los transportes, contribuyendo a elevar el costo de la vida y dificultando el desarrollo de muchas industrias. Todavía sería explicable — termina — este Monopolio si España fuera un país productor de petróleo, mas, a pesar de los trabajos realizados, no se ha conseguido resultado alguno.”

Peligro de los monopolios — cuando se llega de hecho a una estatificación — es el que pone de manifiesto ETEELE ⁽¹⁷⁾ al sentar que “la experiencia ha demostrado que las empresas de Estado y la administración del Estado sólo son compatibles con negocios de carácter rutinario” y, más abajo, refiriéndose a la banca, que “la experiencia de las industrias controladas por el Estado durante la guerra, considerada desde el punto de vista de su practicabilidad, de los gastos y de la eficacia, no permite creer que hubiese ventajas en transferir al Estado una empresa que por su naturaleza es mejor y más económicamente dirigida por la organización privada”.

Y considerado el asunto desde este último aspecto, ha dicho MORRISON ⁽¹⁸⁾ que “todo argumento en favor de las empresas socializadas carece de base si tales empresas no acusan un rendimiento superior al de los organismos privados”.

“Una de las felicidades que esperamos de Nueva York — escribe PAUL MORAND ⁽¹⁹⁾ — es el vivir donde ni el gas, ni la electricidad, ni el telégrafo, ni el teléfono, ni los medios de comunicación, ni la educación, son monopolios del Estado o de la Municipalidad, y, gracias a ello, funcionan.”

⁽¹⁷⁾ *Manchester Guardian Commercial*, 7 de diciembre de 1922, página 720.

⁽¹⁸⁾ *Socialisation and Transport*. Crítica bibliográfica en el *Bulletin de l'Institut International d'Organisation Scientifique du Travail*, diciembre de 1933, página 188.

⁽¹⁹⁾ *New-York*, página 264.

II. DEFENSA DE LA COTIZACIÓN DE LA MONEDA

Dijo RIST en la conferencia inaugural del curso 1935-36 en la Sociedad de Economía Política de Bélgica ⁽²⁰⁾ que “al terminar la gran guerra se sacrificó la moneda al comercio y ahora — en 1935 — se está sacrificando el comercio a la moneda; pero es lo cierto que el resultado de estos sacrificios alternativos y recíprocos lo que ha hecho no es resolver la crisis monetaria o la crisis comercial, sino lograr que marchen a la par una y otra”.

“Los Gobiernos — añadió, — queriendo salir del paso, han perturbado las monedas y en vez de preocuparse de una estabilización internacional, se han consagrado a la práctica de un nacionalismo económico exagerado, llevando a cabo devaluaciones de sus divisas con el fin de disponer de un instrumento con el que poder incrementar las exportaciones. Y como en la defensa contra tales métodos se ha llegado al aumento de las barreras arancelarias, a los contingentes, a los supercontingentes, al trueque de mercancías y al bloqueo de divisas, el resultado ha sido que después de perturbarse la moneda se ha perturbado el comercio internacional.”

Desaparecido prácticamente el patrón oro y, por tanto, la regulación automática del cambio internacional a que aquél daba lugar, ha sido preciso buscar otro sistema regulador, ya disponiendo de una masa de maniobra, llamada “fondo de igualación”, para comprar o vender divisas según convenga, ya estableciendo un monopolio de las mismas por intermedio de un organismo oficial que cede las necesarias para las importaciones, después de habérselas procurado mediante exportaciones de mercancías o servicios.

El primer sistema exige saber a qué cambio debe estabilizarse, de conformidad con lo que aconsejen las circunstan-

(20) *Diario del Comercio*, 13 de noviembre de 1935.

cias del caso, y fijar en consecuencia las cotizaciones máxima y mínima admisibles para la moneda nacional con referencia a la extranjera tomada como tipo, y que ha sido con frecuencia el dólar o la libra.

“Los resultados hasta ahora obtenidos con los fondos de igualación — escribe TALLADA ⁽²¹⁾ — demuestran que los grandes medios de que disponen estos organismos y el secreto con que pueden operar, permiten obtener resultados beneficiosos para movimientos pasajeros de la tensión monetaria. Pero para movimientos bruscos e intensos, sobre todo en los pánicos tan frecuentes en los últimos años, la actuación del fondo no basta y las grandes cantidades de oro que en tales casos deben proporcionárseles para luchar contra la corriente, más bien precipitan la evolución. Y es que los fondos actúan solamente sobre los síntomas del mal y no sobre las causas.”

En estas intervenciones lo más difícil es, como se ha dicho, fijar un tipo de estabilización que pueda mantenerse, para no correr el peligro a que se refieren unas manifestaciones del MARQUÉS DE ESTELLA, al decir, con referencia a la intervención en el cambio practicada por el Gobierno de la Dictadura, que “el acierto... hubiera estado en comprar muchas libras y dólares al tipo de 27, 28, 29 y hasta 30 la libra, forzando nosotros mismos el alza de esta moneda, y al llegar a ese punto tomar medidas para estabilizar la nuestra..., pero, desgraciadamente, la libra empezó a subir por sí misma y muy rápidamente, y entonces se nos ocurrió contener su alza, en defensa del valor de nuestra moneda, comprando pesetas al precio que salían, es decir, vendiendo o comprometiendo libras, y ya metidos en ese camino, como pasa al jugador que pierde y va al desquite, es difícil detenerse” ⁽²²⁾.

Con el monopolio de divisas la finalidad perseguida puede conseguirse con mayor facilidad, aunque la instauración y mantenimiento de aquél no deje de ofrecer dificultades. Por me-

⁽²¹⁾ *La Política económica en los tiempos de crisis*, página 119.

⁽²²⁾ *La Vanguardia*, 24 de diciembre de 1929.

dio de “la fiscalización de los contingentes y de las asignaciones de cambio exterior... — afirma CONDLIFFE ⁽²³⁾ — la industria puede ser impulsada... en la dirección que desee el propio Gobierno, fomentándose así una organización industrial controlada” e “incluso, llegarse a disciplinar a los productores individuales”; y “los recursos intervencionistas del Estado son tantos y tan potentes — dicen IRURZUN y RUBIO ⁽²⁴⁾ — que pueden mantener permanentemente un desequilibrio de precios (interiores con los exteriores) que en un régimen liberal serían totalmente imposibles. Falta sólo saber — añaden — si esto puede o no ser provechoso para la nación”.

El monopolio de divisas, en efecto, repercute aun mucho más que el régimen de contingentes — de cuyas consecuencias nos hemos ocupado — en contra de la expansión del comercio internacional, que puede llegar también a ser prácticamente monopolizado. “Las relaciones económicas entre las naciones — dice VIRGINIO GAYDA ⁽²⁵⁾ — se han convertido en relaciones entre los Estados más bien que entre individuos o grupos” y “los Estados intervienen directamente para plasmar en gran parte las condiciones de la economía nacional, y también las corrientes de los intercambios internacionales en las discusiones y en los valores.”

De este modo, “no se abandonan los intercambios de las mercancías a las variables contingencias de los mercados y de las estaciones, a intereses de grupos, sino que se armonizan con las necesidades fundamentales de la economía nacional. El comercio exterior y la actividad económica interna que participa en él son substraídos a la accidentalidad. Se crea un régimen de relaciones internacionales más estable y seguro. Y en él se condensa también la voluntad de una economía más sana, de un comercio más moral”.

⁽²³⁾ *La reconstrucción del comercio mundial*, página 188.

⁽²⁴⁾ *Política Arancelaria Nacional*, página 115.

⁽²⁵⁾ *El mañana económico de Europa*, páginas 38 y 39.

Pero con el monopolio a que acabamos de referirnos, “los propios asuntos regulares del intercambio se convierten así en cuestiones de política internacional”, dice ROBBINS ⁽²⁶⁾; y “en lugar de que la consignación de sardinas de Utopía a Ruritania sea un asunto privado entre comerciantes de ambos países, sujeto a la sanción de las leyes de ambas naciones, se convierte en transacción entre representantes de Estados soberanos, sujeta a los nebulosos preceptos de la ley internacional carente de sanción... Si el asunto falla, por cualquier motivo, es mucho más probable que conduzca a fricciones políticas que si solamente interviniesen comerciantes privados”.

III. DEFENSA DEL VALOR INTERNO DE LA MONEDA

“Hace muchos años — dicen IRURZUN y RUBIO ⁽²⁷⁾ — se definía la inflación como un sistema cuyas últimas consecuencias consistían en procurar un beneficio progresivamente disminuído a los exportadores, a costa de la reducción del valor de los bienes de fortuna nacionales.”

En esta frase quedan, en efecto, aquéllas resumidas, ya que, si en un principio puede favorecer la exportación, en cuanto los precios internos resultan inferiores a los externos al desvalorarse la moneda nacional, ello no puede mantenerse por mucho tiempo; y en definitiva se produce un encarecimiento de la vida, pero sin que todos los precios suban en igual proporción — contrariamente a lo que parece habría de resultar de una perfecta aplicación de la teoría cuantitativa de la moneda, — lo que da lugar a que unos individuos salgan más perjudicados que otros.

De la intervención estatal en pro del abaratamiento de la

⁽²⁶⁾ *La planificación económica y el orden internacional*, página 98.

⁽²⁷⁾ *Política Arancelaria Nacional*, página 115.

vida nos hemos ocupado al tratar de la política de tasas y racionamientos; pero hemos de insistir en el hecho que no son para ello suficientes los llamados por VIRGINIO GAYDA ⁽²⁸⁾ “precios políticos”, por grandes que sean, según este autor, sus ventajas sociales. Es preciso, además, que estos precios puedan mantenerse, lo que exige que exista entre ellos la necesaria armonía, y que los costes no vengan encarecidos por una política tributaria o social en discordancia con la deflación perseguida.

Es por este motivo que en algunas reglamentaciones de salarios, se fijan no sólo las retribuciones mínimas en defensa del trabajador, sino también las máximas en defensa de la economía nacional. Nos hemos referido ya a Alemania; y en Portugal ha sido adoptada esta modalidad en la construcción naval en madera para pesqueros de bacalao ⁽²⁹⁾, en cuya reglamentación se establecen ambos topes para cada categoría profesional, edad del operario, coste de la vida en la localidad, etcétera.

La inflación, por lo demás, como resultante de una circulación monetaria superior a lo que requieren las necesidades del país, puede ser consecuencia — como hacía notar CARCELLER en las Cortes el 2 de diciembre de 1943 ⁽³⁰⁾ — de un exceso de exportaciones, o sea sin una importación de mercancías correlativa, en la que se invierta el dinero importado a cambio de aquéllas. Es lo que hace cuatro siglos había dicho LÓPEZ GÓMARA, con referencia a lo ocurrido en la España de su época, que la elevación de los precios fué debida a “la mucha plata y oro que de las Indias a nos han venido” ⁽³¹⁾.

Y terminaremos este apartado recordando que del solo examen de la circulación fiduciaria no puede deducirse la existen-

(28) *El mañana económico de Europa*, páginas 224 y 225.

(29) RICO, *Diario de Barcelona*, 2 de mayo de 1943.

(30) *Ya*, 3 de diciembre de 1943.

(31) CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*, página 92.

cia de inflación, pues, como dice SARDÁ ⁽³²⁾, “hay política de plena ocupación mientras cualquier eventual aumento del dinero o del crédito consigue aumentar las inversiones productivas y aumentar el número de obreros ocupados”, al paso que “hay inflación cuando todo aumento de circulación fiduciaria se traduce sólo en aumento de precios”.

En otras palabras, es consecuencia de todo aumento en capital-dinero sin contrapartida en un mayor volumen de bienes económicos. Es el aspecto estudiado por RODRÍGUEZ SASTRE ⁽³³⁾ refiriéndose a los aumentos de capital en las Sociedades anónimas, aumentos cuyo control por parte del Estado puede proponerse no otra cosa que evitar prácticas inflacionistas.

⁽³²⁾ *Revista Financiera del Banco de Vizcaya*, enero-febrero de 1945, página 5.

⁽³³⁾ *El Economista*, 22 de septiembre y 6 de octubre de 1945, páginas 1185 y 1250.

CAPÍTULO IX

LÍMITES DEL INTERVENCIONISMO

Si difícil es analizar objetivamente las ventajas e inconvenientes del intervencionismo estatal en las actividades económicas, la dificultad sube de punto cuando — para llegar a una conclusión — se intenta fijar unos límites al intervencionismo expresado, aun prescindiendo de que — como dijimos que recuerda ROBBINS ⁽¹⁾, — “se apreció durante la guerra, que si el Estado asumía el control de una pequeña sección de la industria, se veía rápidamente obligado a extenderlo a todas las demás ramas conectadas con ella, aunque fuera remota la relación”, y así “la aplicación completa del plan en industrias determinadas, implica, más o menos tarde, la planificación de las demás”.

“Hemos de empezar, no obstante, sentando que dicho límite es necesario”, ya que “cada sector de la producción” — afirma AREILZA ⁽²⁾ — posee un “límite de resistencia a la intervención estatal, pasado el cual el propio rendimiento disminuye, la eficacia desaparece, y lo que se utiliza como medio, resulta contraproducente para alcanzar los fines perseguidos”. Y “la finalidad de una política intervencionista — dice ROBERT, comentando a BURNS ⁽³⁾ — ha de ser el acrecer la renta nacional y mantener la adecuada y justa distribución de la misma entre todas las clases de la población”.

(1) *La planificación económica y el orden internacional*, páginas 40-41.

(2) *La Vanguardia Española*, 2 de marzo de 1939.

(3) *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 131.

Para BRESCIANI — dice NAHARRO ⁽⁴⁾ — “una política económica ortodoxa sólo debe procurar alcanzar el equilibrio que las dificultades reales impiden obtener”, o sea “ayudar al conjunto del organismo de la economía nacional a conseguir el equilibrio que sus datos determinarían sin la existencia de condiciones perturbadoras”.

En una conferencia que pronunció en la Cámara de Comercio de Madrid, dijo MARIANO MARFIL ⁽⁵⁾ que “lo que debe hacer el Estado en la vida económica no es cruzarse de brazos ni encogerse de hombros, pero tampoco es actuar como un Estado tentacular que en todo se inmiscuye... La labor del Estado en la vida económica es sencillamente una labor de corrección para actuar en caso de impotencia de la economía privada o en caso de que se cometan injusticias sociales”.

“Sería una insensatez — había dicho antes ⁽⁶⁾ — interpretar hoy como economía liberal una libertad de fisiócratas, y creer que el Estado no tiene otra misión que la de intervenir en las infracciones jurídicas.” No, “el Estado... tiene un fin permanente que es la realización del Derecho, y unos fines históricos que debe realizar en la medida que no los realice la sociedad... Nada de economía anárquica y suelta a fuerza de ultraliberalismo”.

“La economía — continúa — tiene que organizarse, lo cual equivale a decir que hay que disciplinarla y jerarquizarla; pero eso se debe aspirar a que lo haga preferentemente la sociedad. Son las mismas fuerzas económicas, con la organización que a sí mismas se den, las que han de procurar la ordenación económica nacional.” Es la idea que ha presidido más tarde las organizaciones paraestatales, sindical o corporativa, para conseguir — con palabras de PEREIRA ⁽⁷⁾ — “una

(4) Ídem, ídem, páginas 151 y 152.

(5) *Diario del Comercio*, 24 de mayo de 1934.

(6) *Ahora*, reproducido en *Diari Mercantil*, 2 de marzo de 1933.

(7) *Diario da Manhã*, 1.º de enero de 1937. *La batalla del futuro*, páginas 172 y 173.

economía en gran parte autodirigida que substituye, con evidente ventaja, a los inevitables inconvenientes de la economía estatista”.

Y es que “mientras el Estado limite sus intervenciones a lo necesario, sin ahogar las iniciativas personales, su actividad se mantendrá dentro de los confines del cumplimiento de su misión fundamental, y su obra, por lo tanto, será fecunda en resultados fructuosos”. Pero “el fracaso... se produce de una manera rotunda cuando absorbe todas las actividades nacionales y se erige en único director y administrador de las mismas” ⁽⁸⁾.

“El deber del Estado — continúa — es gobernar y la noción de servicio que implica el ejercicio de esta facultad soberana, exige que las actividades nacionales sean encauzadas y ordenadas, a través de organismos adecuados, cuyo desarrollo impulse y fomente las iniciativas de los sectores económicos interesados para acoplarlas y articularlas en un vasto plan de continua perfección moral y material, encaminado hacia el bien común del país.”

“Substituir la economía liberal — se lee en otro comentario ⁽⁹⁾ — y no llegar al intervencionismo absoluto en que el Estado sea un monstruo cuyas fauces muerdan todas las iniciativas, situarse en el centro de una concepción económica, que por un lado regula las iniciativas que sólo tienden a un excesivo lucro y consiente por otro el desarrollo de toda tendencia individual, dentro de las líneas de protección nacional, es el verdadero juego de un Estado totalitario.”

Dentro del mismo criterio, FUENTES IRUROZQUI preconiza “la limitación de la intervención del Estado a la fijación a normas y a la propulsión de los rendimientos económicos; es decir, a lo que se llama intervención conforme, en lugar de la que denomina la escuela de Lausana... no conforme y siste-

⁽⁸⁾ *Diario de Barcelona*, 3 de junio de 1942.

⁽⁹⁾ *Ídem*, 2 de junio de 1942.

mática, reservando pequeños sectores a la verdadera economía sistematizada" ⁽¹⁰⁾.

"Esta postura del intervencionismo — continúa — tan completamente alejada del Estado policía como del Estado bienhechor, y, por consiguiente, de la idolatría del propio Estado, da verdadero sentido político a la economía, eludiendo la tiranía democrática del mercado y la substitución de los valores morales de la vida económica de un modo poderoso."

Y CARCELLER, que al inaugurar recientemente, en su calidad de ministro de Industria y Comercio, la Feria de Muestras de Barcelona ⁽¹¹⁾, ha afirmado que "es deseo de todos que en el plazo más breve posible se pueda iniciar con claridad el camino de la libertad económica" y que ésta "es precisamente" la "posición clarísima" de España, había dicho en el Instituto de Estudios Políticos ⁽¹²⁾ que "el Estado debe de dar programas" y que "se debe orientar un plan metódico para las fuerzas productoras sin tocar la iniciativa individual, sin usar la fuerza, ni suprimir la ganancia", pues "la economía dirigida que sacrifica al individuo por la colectividad es la economía marxista fracasada en Rusia".

La necesidad de alejarse tanto de la economía liberal en el sentido preconizado por los fisiócratas, como del intervencionismo a ultranza de los marxistas puede decirse que es cosa aceptada por todos los autores solventes; pero en lo que no están todos de acuerdo es en determinar exactamente la posición del punto medio, ya que en ello influyen los prejuicios de escuela, muy difíciles de superar en las cuestiones económicas, y más todavía en las sociales.

"La determinación de salarios mínimos y la ayuda a los desafortunados ha sido aceptado desde antiguo" — dice CON-

⁽¹⁰⁾ *Tres ensayos acerca del Nuevo Orden Económico*, página 127.

⁽¹¹⁾ *El Noticiero Universal*, 9 de junio de 1943.

⁽¹²⁾ Ídem, 27 de febrero de 1940.

DLIFFE ⁽¹³⁾ — y “la intervención de la comunidad destinada a proporcionar una igualdad de oportunidades económicas..., en la educación, sanidad y recreo de los ciudadanos considerados en su conjunto, se acepta ahora por lo general en todos los países.”

Hemos reproducido ya, en el capítulo VI, autorizadas opiniones acerca de los límites que el mismo bien colectivo impone en la legislación social, límites determinados por “el mismo fin porque se pide el auxilio de las leyes: esto es, que no deben éstas abrazar más ni extenderse más de lo que pide el remedio de estos males o la necesidad de evitarlos” ⁽¹⁴⁾.

Análogamente podríamos recordar que en las intervenciones de carácter tributario, el Estado obraría “injusta e inhumanamente, si de los bienes de los particulares extrajera, a título de tributo, más de lo que es justo” ⁽¹⁵⁾; que, en todo caso, “es necesario que la autoridad suprema del Estado reserve a las asociaciones inferiores los negocios y atenciones de menor importancia... de conformidad al principio de la función supletiva de la actividad social” ⁽¹⁶⁾; y que, en cuanto a las relaciones internacionales, “los pueblos... no están destinados a romper la unidad del género humano, sino a enriquecerlo y embellecerlo con la comunicación de sus peculiares dotes, y con el recíproco intercambio de bienes” ⁽¹⁷⁾.

Pero si bien “la Iglesia establece normas sobre un conjunto de cuestiones directa e íntimamente relacionadas con la cuestión social y con la económica”, dice MARTÍNEZ MARÍ ⁽¹⁸⁾ que “estas normas y principios ilustran acerca de por dónde hay que orientarse y andar en la formulación de principios, pero dejan margen al entendimiento humano para resolver la forma de organizar una economía y una política social que

⁽¹³⁾ *La reconstrucción del comercio mundial*, página 429.

⁽¹⁴⁾ LEÓN XIII, *Rerum Novarum*, VI.

⁽¹⁵⁾ Ídem, ídem, IX.

⁽¹⁶⁾ Pío XI, *Quadragesimo Anno*, II, 5.

⁽¹⁷⁾ Pío XII, *Summus Pontificatus*.

⁽¹⁸⁾ *Cristiandad*, 15 de marzo de 1945, página 130.

beneficien justamente la gran masa de olvidados del mundo”.

Y es que “la Iglesia — escribe MESEGUER en *Razón y Fe* (19) — no ha de comprometer su autoridad descendiendo a pormenores de ejecución, patrocinando tales o cuales fórmulas económicas o sociales”, ya que, “por razones particulares unas pueden salir bien y otras fracasar”, y en caso de producirse “esos fracasos” se correría el “peligro de envolver en el descrédito valores sacratísimos cuya guarda le fué confiada”.

Ha dicho FRANCO al inaugurar las radioemisiones normales para América, el 21 de junio de 1945 (20), que “el orden económico no es un capricho, sino un proceso alcanzado por la aportación de siglos y basado en los principios de la propiedad y de la iniciativa privada”. El intervencionismo del Estado debe respetar, pues, la propiedad privada y la iniciativa individual, lo que exige que sean suspendidas sus actuaciones tan pronto como una y otra resultan perjudicadas en sus derechos reconocidos.

Estos límites, sin embargo, son también sumamente variables en la práctica, ya que el concepto de propiedad ha evolucionado con el tiempo, de un modo especial al subordinarse el interés del individuo al de la sociedad, y “todas las formas de propiedad”, concretamente, “al interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado” (21). Y en cuanto a la iniciativa individual, ya hemos visto que los mismos que la defienden también la limitan por el propio motivo; pues, por ejemplo, al establecer en las Normas Programáticas del Nuevo Estado Español, que “el Estado Nacionalsindicalista permitirá toda iniciativa privada”, añade que en tanto sea “compatible con el interés colectivo” (22).

(19) Noviembre de 1942, pág. 375.

(20) *El Noticiero Universal*, 21 de junio de 1945.

(21) Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, III, 3.

(22) Punto 8.

Si el derecho de propiedad ha de subordinarse, pues, al interés supremo de la Nación, y si la iniciativa privada sólo debe ser permitida mientras sea compatible con el interés colectivo, habremos de concluir que, contrariamente a lo que insinuábamos, ni una ni otra podrán exigir que sea limitada la expresada intervención, ya que la finalidad de esta última es precisamente — aunque no siempre lo consiga, como RAS ⁽²³⁾ insinúa, — defender el interés nacional o colectivo contra las posibles extralimitaciones de la propiedad y de la iniciativa privadas.

De lo que antecede, resulta que si bien el intervencionismo limita los derechos de la propiedad privada y de la iniciativa individual, esta limitación no siempre — a juicio de sus partidarios — debe subordinarse a otras consideraciones. No llegaremos, pues, por este camino, a fijar límite alguno en el deseo de implantar o mantener la intervención expresada.

Hemos dicho que había de distinguirse entre las intervenciones transitorias y las permanentes, ya que aquéllas pueden venir impuestas por las circunstancias, al paso que las segundas son siempre consecuencia de llevar a la práctica un criterio fundamentado en razones a menudo más políticas que económicas. Y hemos de distinguir, también, entre las relacionadas con la defensa nacional y las que afectan a la totalidad o a gran parte de la industria y comercio del país.

En este último aspecto, las intervenciones del primer grupo — aun llegando a la estatificación de las empresas que fabrican armamento — no son incompatibles en modo alguno con la libre iniciativa individual y la propiedad privada, en los otros órdenes de actividad económica. Y ello tanto en tiempo de guerra — cuando con carácter transitorio, es frecuente la incautación o una fuerte intervención estatal, en las empresas cuyas actividades puedan contribuir a la marcha de la misma

(23) *Reflexiones sobre la Economía*, página 30.

— como en tiempo de paz por lo que afecta a las fábricas de armas propiedad del Estado. El límite útil del intervencionismo viene fijado, por lo demás, en esta clase de actividades, más por razones políticas que económicas, y por ello prescindiremos de su discusión.

En cuanto a las intervenciones transitorias, es también difícil, en general, de prever los límites a que habrán de reducirse tanto por lo que afecta a su extensión como a su intensidad; y lo cierto es que a menudo no han sido voluntariamente buscadas. “La dirección de la economía por el Estado — ha dicho FRANCO en la clausura del III Consejo Sindical Industrial ⁽²⁴⁾ que es — exigencia ineludible de los tiempos difíciles y de las economías enfermas”; y por ello, había dicho antes que “el Estado actual no puede ser juzgado a través de las molestias que a los productores causan las múltiples e improvisadas intervenciones obligadas por la anormalidad en que vivimos”, pues “nosotros — añade — no aspiramos a perpetuar un centralismo ni a multiplicar el viejo funcionarismo del Estado” ⁽²⁵⁾.

Y CARCELLER, de quien reiteradamente hemos reproducido conceptos, manifestó a un redactor de *Pueblo* que no creía “que dentro de una civilización cristiana, el intervencionismo estatal pueda ser considerado como una medida política de porvenir”, ya que — añadió — “solamente atendiendo las circunstancias y con el pensamiento y el deber cristiano de proteger a los más débiles, entiendo justificado y necesario el intervencionismo estatal” ⁽²⁶⁾.

Esto nos lleva a recordar — con NAHARRO, comentando a BRESCIANI ⁽²⁷⁾ — que “MILL, y sobre todo WALRAS, han aclarado que en tanto la producción se rige por leyes naturales

⁽²⁴⁾ *Diario de Barcelona*, 24 de enero de 1945.

⁽²⁵⁾ Ídem, 19 de julio de 1943.

⁽²⁶⁾ *La Vanguardia Española*, 26 de julio de 1944.

⁽²⁷⁾ *Revista de Economía Política*, enero-marzo de 1945, página 159.

(Economía pura), la distribución lo hace por leyes morales (Economía social)” y que mientras “la primera Economía se dirige a conseguir una producción lo más grande posible..., la segunda, una distribución lo más igualitaria posible”.

Y esta distinción, aplicada al intervencionismo estatal, nos indica que es más fácil actuar sobre la distribución que sobre la producción; sin perder de vista, no obstante, que es precisa esta última para que pueda darse la primera. Las intervenciones en la distribución — tanto por lo que afecta al aspecto social como al tributario, y no menos las recomendaciones de una aportación más o menos voluntaria que las obligaciones estrictas — tendrán, pues, como límite, no sólo lo que pueda estimarse de justicia, sino además sus repercusiones sobre la producción, si el empresario ve mermado su beneficio por debajo de lo que conceptúe necesario para impulsar sus actividades. No todos los autores admiten, en efecto, que puedan, por ejemplo, aumentarse indefinidamente los tipos del impuesto progresivo sobre la renta o sobre las utilidades, sin peligro de estancamiento en la economía nacional.

Por lo que se refiere a las intervenciones en la producción, hemos de recordar la frase de ROBERT transcrita al principio de este capítulo, y análogamente a la máxima de SAN BERNARDO — “perversa cosa sería, si lo que se ordenó para la caridad, se guardase contra la ley de la caridad” ⁽²⁸⁾ — podremos establecer que tales intervenciones tendrán un límite — reconocido por AREILZA, como hemos dicho — cuando con ellas se reduzca, en vez de acrecerse, la renta nacional.

Pero, además, siguiendo a SUMNER ⁽²⁹⁾, hemos de distinguir entre tener necesidad de una industria y tenerla de sus productos; y “el problema principal — como afirma ROB-

⁽²⁸⁾ GRANADA, *Guía de Pecadores*, libro II, capítulo XX, § II.

⁽²⁹⁾ MANOÏLESCO, *Teoría del proteccionismo y del comercio internacional*, página 89.

BINS ⁽³⁰⁾ — no es si puede construirse la fábrica y mantenerse en funcionamiento con cierta eficiencia técnica, sino si se utilizan los recursos de la comunidad en forma más conveniente al construir esas instalaciones y mantenerlas posteriormente en funcionamiento”; ya que, a su juicio, el criterio de una planificación racional ha de ser “utilizar los factores no solamente en la producción de cualquier artículo, sino en el lugar en el cual rindan remuneraciones máximas”.

Estas ideas pueden servir de guía para fijar un límite a las intervenciones estatales en el campo de la producción, aparte de la necesidad de evitar tanto el burocratismo a ultranza, como el peligro de contribuir con aquéllas a la perpetuación de monopolios de hecho o al estancamiento del progreso industrial.

Y también ha de evitarse, como recomienda PARÍS EGUILAZ ⁽³¹⁾, el solo afán de “imitar e imponer sistemas que aun implantados con éxito en otros países, podrían no dar resultado... por no tener en cuenta” las “características económicas, sociales y temperamentales” del de que se trata; pues “se cometería una gravísima imprudencia sometiendo una vez más a un pueblo... a la tortura de improvisaciones económicas, que no podrían dar otros resultados que el de producir perturbaciones”.

No por otro motivo, se ha insistido repetidamente en España, por parte de los más altos elementos directivos, en que el nacionalsindicalismo es de pura raigambre española, y nada tiene que ver con doctrinas implantadas en países extranjeros y, de un modo especial, ni con el fascismo ni con el nacionalsocialismo. Y ya había dicho MUSSOLINI — no recordamos exactamente las palabras — que el fascismo no era artículo de exportación.

⁽³⁰⁾ *La planificación económica y el orden internacional*, página 199.

⁽³¹⁾ *El Estado y la Economía*, página 12.

Aplicaciones a la política industrial

Nuestro propósito sería dar aquí por terminado este ensayo, pero quizá alguien se sentiría defraudado si no hallara en su lectura ideas más concretas que aceptar o rechazar. Y, aunque al exponer nuestra opinión personal, forzosamente hayamos de apartarnos del plan primitivamente concebido, en obsequio a tales lectores nos decidimos a exponer nuestro punto de vista acerca de los límites de una política industrial, si bien hemos de advertir que no descenderemos a detalles propios de un reglamento, ni nos proponemos, en manera alguna, invadir el campo de la política en su exposición. Vamos, pues, a aplicar las consideraciones anteriores — ampliadas en lo preciso — al caso particular de referencia.

Una política industrial involucra — en sentido lato — toda la política económica, ya que si se fabrica es para vender — y, a menudo, para exportar; — de los beneficios de la industria viven la mano de obra, los empresarios y los capitalistas poseedores de valores industriales, y los impuestos que, directa o indirectamente, satisface, constituyen un buen porcentaje en los ingresos del Estado. Prescindiendo, no obstante, de la política comercial, de la monetaria, de la fiscal, y hasta de la social en términos generales, nos concretaremos a las disposiciones que afectan de un modo directo a la implantación y al funcionamiento de las industrias.

Y empecemos por distinguir entre las intervenciones que se traducen en un simple aumento del precio de coste y aquellas que involucran una limitación en las facultades del empresario; distinción que estimamos del mayor interés, ya que por la primacía del espíritu sobre la materia, estimamos que las últimas pueden ser más perjudiciales, o han de circunscribirse a límites más reducidos que las primeras.

Un aumento directo o indirecto en la retribución a la mano

de obra, la necesidad de cumplimentar determinadas normas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo o a alejar el peligro de explosiones, de incendios o de accidentes o enfermedades profesionales, y hasta la implantación de nuevos impuestos, son hechos cuya consecuencia para el empresario no es otra en definitiva que una elevación del precio de coste. Y siempre que quepa el compensar este aumento con reducciones equivalentes — gracias a una mejor organización, — o sea factible el repercutirlo en el precio de venta, no será preciso limitar la intervención expresada, cuyas consecuencias en otros órdenes podrán ser, por lo demás, muy convenientes.

Cuando la intervención, en cambio, afecta a la vida misma de la empresa, ya sea dificultando su implantación, ya limitando las atribuciones del empresario, puede dar lugar — como hemos visto — a un amortecimiento en las iniciativas, que exija, a su vez, nuevas intervenciones, hasta llegar a una estatificación total de la economía del país. Los organismos interventores deberán, pues, extremar su prudencia para no exceder en este caso los límites que el propio interés colectivo demanda sean respetados.

Ya nos hemos ocupado del peligro que ofrece, en este sentido, la política de regulación industrial, principalmente en el aspecto, que podríamos llamar negativo, al exigir tramitaciones burocráticas más o menos complicadas, largas y costosas para la implantación de una industria, para las ampliaciones o modificaciones, para disponer de energía o de primeras materias, etc., aun prescindiendo de los permisos de importación y exportación.

Pero las tramitaciones a que acabamos de aludir, a menudo transitorias o circunstanciales, son en gran parte obligada consecuencia de la escasez de energía o de primeras materias; y si bien es posible que — al menos en casos determinados — pudiesen ellos simplificarse — aun sin llegar a un nuevo enfoque de todo el problema de abastecimientos — para proponer esta simplificación sería preciso un estudio a fondo de cada

clase de asunto, que nos apartaría del plan propuesto y alargaría desmesuradamente este ensayo.

Consideración especial merece la autorización previa para nuevas instalaciones o para la modificación de industrias. Ya hemos visto que dichas autorizaciones, en una u otra forma — aunque sólo fuese a los efectos del Censo Industrial — son cosa corriente en aquellas cuyo funcionamiento puede ser peligroso para la salud y seguridad de sus obreros o de los vecinos del lugar de trabajo. Y el condicionar la autorización expresada al hecho de cumplimentarse lo dispuesto en reglamentos acerca de seguridad e higiene en el trabajo, calderas de vapor y aparatos sujetos a presión, instalaciones eléctricas, ascensores, grúas y montacargas, etc., sólo debe tener por límite, a nuestro juicio, el hecho de que dichos reglamentos hayan sido técnicamente estudiados en relación con las características del establecimiento industrial de que se trate.

Estimamos, pues, que en manera alguna debe considerarse extralimitación del Estado o del Municipio, ni el exigir un proyecto inicial debidamente estudiado y autorizado con la firma de un técnico competente, proyecto que, confrontado luego por los facultativos oficiales, habrá de servir de base para la correspondiente concesión administrativa, ni el obligar a las empresas a que el mismo u otro técnico competente responda no sólo del cumplimiento por parte de aquéllas — en período de explotación — de cuantas disposiciones y normas garanticen la mayor seguridad e higiene en el trabajo, sino también, en ciertos casos, de las garantías técnicas del producto.

Lo que debe evitarse es que ello degenerase en sólo un pretexto para el cobro de unos derechos u honorarios no justificados técnicamente, y también que el obligado cumplimiento de las expresadas disposiciones o normas, llegase a constituir una rémora para el progreso industrial. Tanto los técnicos proyectistas o directores, como los facultativos del Estado o del Municipio, habrán de estar, pues, al corriente de los

últimos adelantos en la materia y poseer la necesaria alteza de miras para interpretar más el espíritu que la letra de los reglamentos, e incluso para instar su reforma cuando las circunstancias lo aconsejaren.

Las intervenciones que acabamos de propugnar por parte de un Estado “buen gendarme” — según la clasificación de TALLADA — no son incompatibles — a nuestro juicio — con la libertad económica a que se refería CARCELLER, ya que si limitan la libertad de unos individuos — empresarios — no es para otra cosa que para hacerla compatible con la de otros — obreros, vecinos, usuarios — a quienes un exceso incontrolado de aquélla puede irrogar perjuicios en su persona o en sus legítimos intereses.

Pero, como hemos hecho notar en el lugar correspondiente, el llamado “condicionamiento industrial” no se limita a tener en cuenta en sus resoluciones el aspecto técnico de la industria y los peligros que, en el caso particular de que se trate, pueda ofrecer para la seguridad e higiene públicas. Con las denegaciones, principalmente, se ha tendido a una “industrialización dirigida” y a regular la concurrencia, de un modo especial por lo que afecta al reparto de materias primas y a la colocación de productos.

En este segundo tipo de intervenciones, el Estado — con la colaboración, aunque sólo sea informativa, de corporaciones o sindicatos — ¿puede decirse que actúa sólo de “buen gendarme” o corre el peligro, con sus resoluciones denegatorias, de matar iniciativas o de perpetuar monopolios de hecho cuya subsistencia no está siempre debidamente justificada, desde el punto de vista del interés colectivo?

Imposible conceptuamos una respuesta categórica de carácter general; y sumamente aventurado el formularla, aun cuando, en casos concretos, el conocimiento de las circunstancias permita un mayor acierto. Y es que en la política eco-

nómica, y hasta en la economía autodirigida por organismos paraestatales, las consideraciones políticas prevalecen a menudo — aun en los regímenes en que dicha preeminencia no se tenga por postulado — sobre las económicas.

Hemos dicho que no invadiríamos, en este ensayo, el campo de la política. Nos abstenemos, pues, de contestar la pregunta; si bien haremos notar que, a nuestro juicio, las intervenciones de este tipo han de llevarse a la práctica con la mayor circunspección. Pues ya hemos recordado los males que atribuye LARRAZ a la “posposición total de lo económico” y a querer actuar “sin una política acorde con la economía”.

BIBLIOGRAFÍA

(Es tan extensa la Bibliografía acerca del tema de este ensayo, que forzosamente la lista consignada ha de ser deficiente. Nos concretaremos, pues, a indicar las principales obras y revistas o publicaciones periódicas que hemos tenido oportunidad de consultar para su redacción.)

ABOLLADO (CARLOS). — *La Industria química y la Química industrial*. (Conferencia en el Instituto de Ingenieros Civiles.) A. N. I. I., Madrid, 1945.

ALARCÓN DE LA LASTRA (LUIS). — *El triunfo nacional y su repercusión en las orientaciones de la industria y el comercio*. (Conferencia en el Instituto de Estudios Políticos.) Madrid, año 1940.

ANTOINE (CH.). — *Cours d'Economie Sociale*. Aclan, París, 1921.

AREILZA (JOSÉ M.^a). — *La Economía Española y la Sindicación Industrial*. (Conferencia en el Instituto de Estudios Políticos.) Madrid, 1940.

AZPIAZU (J.). — *¿Corporativismo o Nacionalsindicalismo?* Editorial Navarra, Pamplona, 1938.

B. I. T. — *Durée de travail et chômage*. Ginebra, 1933.

BALMES (JAIME). — *Obras Completas*. Gustavo Gili, Barcelona.

BORRELL (JOSÉ). — *Reorganización de Empresas Industriales*. Gustavo Gili, Barcelona, 1939.

BORRELL (JOSÉ). — *Instalación y Modificación de Industrias*. Bosch, Barcelona, 1943.

BORRELL (JOSÉ). — *Economía y Organización Industrial*. Bosch, Barcelona, 1944.

BORRELL (JOSÉ). — *Valoraciones Industriales*. Bosch, Barcelona, año 1945.

BOSCH AYMERICH (ALFONSO). — *El Paro obrero*. Instituto de Investigaciones Económicas, Barcelona, 1941.

- BOTTAI (GIUSEPPE). — *L'Ordinamento Corporativo*. Mondadori, Milán, 1938.
- CAMBÓ (F.). — *La valoració de la pesseta*. Catalònia, Barcelona, año 1929.
- CARANDE (RAMÓN). — *Carlos V y sus banqueros*. Revista de Occidente, Madrid, 1943.
- CASSEL (GUSTAVO). — *El problema de la estabilización*, traducción de Enrique Rodríguez Mata. Labor, Barcelona, 1932.
- CONDLIFFE (J. B.). — *La Reconstrucción del Comercio mundial*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1944.
- DEAT (MARCEL) y otros. — *Un Plan francés de Economía dirigida*, traducción de Antonio Riaño. Aguilar, Madrid, 1936.
- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA. — *La Política industrial en la Nueva España*. Madrid, 1942.
- DONALDSON (JOHN). — *Relaciones Económicas Internacionales*, traducción de Manuel Vallvé y Evenor Hazera. El Consultor Bibliográfico, Barcelona, 1930.
- DUBOIN (JACQUES). — *La grande relève des Hommes par la Machine*. Les Éditions Nouvelles, París, 1932.
- ECONOMIST (THE). — *La experiencia Roosevelt*, traducción de S. Ferrándiz. Editorial Española, San Sebastián, 1939.
- FERRER CALBETÓ (FELIPE). — *Capacidad económica de España para superar las dificultades del momento actual*. (Conferencia en el Fomento del Trabajo Nacional.) Barcelona, 1941.
- FUENTES IRUROZQUI (MANUEL). — *Abastecimientos, Tasas y Racionamientos*. Veritas, Madrid, 1942.
- FUENTES IRUROZQUI (MANUEL). — *Precios y Salarios*. Dirección General de Comercio, Madrid, 1942.
- FUENTES IRUROZQUI (MANUEL). — *Tres Ensayos sobre el Nuevo Orden Económico*. Dirección General de Comercio, Madrid, año 1942.
- GAY DE MONTELLÁ (RAFAEL). — *L'Estat Corporatiu* (Conferencias en Unió Catalana). Barcelona, 1934.
- GAY DE MONTELLÁ (RAFAEL). — *Autarquía*. Bosch, Barcelona, año 1940.
- GAYDA (VIRGINIO). — *El mañana económico de Europa*, traducción de Alfonso Palacio y E. Arizu, Vicesecretaría de Educación Popular. Madrid, 1943.

- GIDE (CHARLES). — *Cours d'Economie Politique*. Recueil Sirey. París, 1930-1925.
- GRAELL (GUILLERMO). — *Historia del Fomento del Trabajo Nacional*. Barcelona.
- GUAL VILLALBÍ (PEDRO). — *Ante una transformación del concepto de mercado*. (Conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial.) Madrid, 1941.
- HITLER (ADOLFO) y otros. — *El Nuevo Orden Económico de Europa*. Aguilar, Madrid, 1942.
- IRURZUN (PÍO M.) y RUBIO (ÁNGEL). — *Política Arancelaria Nacional*. Bosch, Barcelona, 1940.
- KEMMERER (EDWIN WALTER). — *El ABC de la inflación*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1944.
- LARRAZ (JOSÉ). — *La época del mercantilismo en Castilla*. Atlas, Madrid, 1943.
- LIST (FRIEDRICH). — *Sistema Nacional de Economía Política*, traducción de Miguel Parades. Aguilar, Madrid, 1944.
- LOMBROSO (GINA). — *La tragedia del progreso*, traducción de Salvador Quemades. Aguilar, Madrid, 1932.
- LORENTE ZARO (MANUEL). — *Economía de Guerra de los Países Neutrales Europeos*. Dirección General de Comercio, Madrid, año 1942.
- MANOILESCO (MIHAIL). — *Teoría del Proteccionismo y del Comercio internacional*, traducción de Manuel Fuentes Irurozqui. Dirección General de Comercio, Madrid, 1943.
- MARÍN LÁZARO (RAFAEL). — *La actuación de las Economías nacionales dentro de la Vida económica internacional*. (Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.) Madrid, 1930.
- MASSÓ (CRISTÓBAL). — *La Guerra europea (1914-1918) en sus aspectos financiero y económico*. Bosch, Barcelona, 1940.
- NAPOLITANO (GAETANO). — *Instituciones de Economía Corporativa*, traducción de C. Massó. Bosch, Barcelona, 1941.
- PARÍS EGUILAZ (HIGINIO). — *El Estado y la Economía*. Ediciones FE, Burgos, 1939.

- PEREIRA (PEDRO THEOTONIO). — *La batalla del futuro. Organización Corporativa portuguesa*. Bosch, Barcelona, 1942.
- PÉREZ URRUTI (M.). — *España en números*. Aguilar, Madrid, año 1942.
- PUGÉS (MANUEL). — *Cómo triunfó el Proteccionismo en España*. Editorial Juventud, Barcelona, 1931.
- QUINTANA (JAIME). — *Hacia la Paz social*. Barcelona, 1930.
- RAHOLA (FEDERICO). — *El Trust del capital y el Sindicato obrero*. (Discurso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación.) Barcelona, 1910.
- RAS (AURELIO). — *Reflexiones sobre la Economía*. Beltrán, Madrid, 1944.
- REPACI (F. A.). — *La Finanza italiana fascista*. Mondadori, Milán, 1939.
- RICARDO (DAVID). — *Principios de Economía Política y de Tributación*, traducción de Valentín Andrés Álvarez. Aguilar, Madrid.
- ROBBINS (LIONEL). — *La planificación económica y el Orden internacional*, traducción de J. Prados Arraste. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1943.
- ROBERT (ANTONIO). — *Un problema nacional. La industrialización necesaria*. Espasa-Calpe, Madrid, 1943.
- RUIZ AMADO (RAMÓN). — *La leyenda del Estado Enseñante*. Suñer, Barcelona, 1903.
- RUIZ PONSETI (ESTANISLAO). — *Les empreses collectivitzades i el nou ordre econòmic*. Barcelona.
- RUTTEN (G. C.). — *La doctrina social de la Iglesia*, traducción de Fr. Cándido Fernández. Poliglota, Barcelona, 1935.
- SANTOS (ERNESTO). — *Las materias primas*. Bosch, Barcelona, 1944.
- SARDÁ (JUAN). — *La intervención monetaria y el comercio de divisas en España*. Bosch, Barcelona, 1936.
- TALLADA (JOSÉ M.^a). — *Economía Política*. Montesó, Barcelona, año 1937.
- TALLADA (JOSÉ M.^a). — *La Política económica en los tiempos de crisis*. Bosch, Barcelona, 1940.
- TALLADA (J. M.). — *Economia Monetària Espanyola*. Barcelona, año 1930.

TALLADA (J. M.). — *L'Organització econòmica a la Rússia soviètica*. Barcelona, 1935.

TORRENTS MONNER (ANTONIO). — *Curso de Economía Política*. Bayer, Barcelona, 1915.

UNIÓ CATALANA. — *Conferència sobre l'Atur forçós*. Barcelona, año 1933.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. — *Problemas técnicos de importancia económica en la Nueva Organización de España*. Barcelona, 1940.

VANDELLÓS (JOSEP A.). — *La immigració a Catalunya*. Concursos Patxot, Barcelona, 1935.

VENTOSA CALVELL (JUAN). — *La permanencia de las leyes económicas*. (Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.) Madrid, 1944.

VITO (FRANCESCO). — *Las Uniones de Empresas en la Economía fascista*, traducción de L. P. Castro y L. Horno Liria. Bosch, Barcelona, 1941.

WEBER (ADOLF). — *Compendio de Política Económica*, traducción de Enrique López Bosch. Labor, Barcelona, 1945.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Ahora, Madrid.

Arriba, Madrid.

Boletín Industrial, Madrid.

Boletín Oficial del Estado, Madrid.

Boletín Oficial del Obispado de Barcelona.

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Bulletin de l'I. I. O. S. T., Ginebra.

Cemento, Barcelona.

Cristiandad, Barcelona.

Després, Barcelona.

Diari Mercantil, Barcelona.

Diario de Barcelona, Barcelona.

Diario del Comercio, Barcelona.

Documentación Económica, Madrid.

Dyna, Bilbao-Madrid.

Economía, Madrid.
El Economista, Madrid.
El Español, Madrid.
El Financiero, Madrid.
El Noticiero Universal, Barcelona.
El Sol, Madrid.
Heraldo de Madrid, Madrid.
Il Popolo d'Italia, Milán.
Información Económica de la Embajada de Alemania, Madrid.
La Paraula Cristiana, Barcelona.
La Vanguardia, Barcelona.
La Vanguardia Española, Barcelona.
La Ven de Catalunya, Barcelona.
Le Petit Journal, París.
Levante, Valencia.
Manchester Guardian Commercial, Manchester.
Moneda y Crédito, Madrid.
Pueblo, Madrid.
Razón y Fe, Madrid.
Revista de Economía Política, Madrid.
Revista de Organización Científica, Madrid.
Revista de Trabajo, Madrid.
Revista Financiera del Banco de Vizcaya, Bilbao.
Solidaridad Nacional, Barcelona.
Ya, Madrid.

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Aberraciones arancelarias, 46, 146.
 Abollado (Carlos), 10, 56, 84, 104,
 106, 108, 110, 127, 154, 162, 201.
 Acuerdos obligatorios, 52, 159.
 Admisiones obligatorias, 35, 140.
 Agell (José), 46.
 Ahorro, 22, 58, 128, 165.
 Alarcón de la Lastra (Luis), 86,
 150, 201.
 Alcázar (Octavio de), 166.
 Álvarez de Sotomayor (Germán),
 110.
 Amortizaciones, 173.
 Andrés Álvarez (Valentín), 204.
 Antoine (Ch.), 19, 201.
 Areilza (José M.^a), 54, 82, 89, 106,
 119, 186, 194, 201.
 Arizu (E.), 202.
 Arrese (José L. de), 94.
 Augusto, 159.
 Aunós (Antonio), 20.
 Autarquía, 29, 88, 89, 115, 145.
Ayuntamiento de Barcelona, 141.
 Aznar (Manuel), 67.
 Azpiazu (Joaquín), 123, 201.
- Balmes (Jaime), 123, 167, 201.
 Bancos, 15, 22, 49, 50, 128.
 Bancos de Emisión, 23, 67, 78, 177.
 Bausili (Andrés), 139.
 Beltrán (Lucas), 8, 110.
 Bernardo (San), 194.
 Bolsa, 16, 40, 129, 143.
 Borrrell (José), 27, 112, 126, 152,
 160, 163, 164, 173, 201.
 Bosch Aymerich (Alfonso), 168,
 201.
 Bottai (Giuseppe), 82, 202.
 Bresciani (Constantino), 117, 155,
 187, 193.
 Brown (E. C.), 173.
- Bugallal (Gabino), 57, 151.
Bureau International du Travail,
 141, 201.
 Burns (Arthur R.), 186.
- Caballero (Fernán), 165.
*Caja de Compensación del Paro
 por escasez de Energía Eléctri-
 ca*, 32.
Caja de Emisiones, 175.
 Cajas de Ahorros, 16, 22, 128.
*Cámara Oficial de la Propiedad
 Urbana de la Provincia de Bar-
 celona*, 31, 151.
 Cambó (Francisco), 87, 107, 111,
 149, 151, 157, 158, 202.
Campsa, 178.
 Capitalización dirigida, 42, 58, 61,
 165, 185.
 Carande (Ramón), 184, 202.
 Carceller (Demetrio), 91, 104, 108,
 110, 184, 189, 193, 199.
Carta del Lavoro, 84.
 Cassel (Gustav), 72, 75, 202.
 Castro (L. P.), 205.
*Catálogo Oficial de la Producción
 Industrial de España*, 51.
Central Nacional Sindicalista, 36,
 141.
*Centro Oficial de Contratación de
 Moneda*, 76.
*Centro Regulador de las Opera-
 ciones de Cambio*, 76.
 Centros de estudio e investigación,
 55, 161.
 Cervantes (Miguel de), 13, 103.
 Circulación fiduciaria, 78.
 Circulación obligatoria del billete,
 16, 41, 143.
 Ciriacy Wamtrup (S. V.), 173.
Clearing, 71.

- Coaliciones obligatorias, 26, 53, 57, 159.
 Colectivizaciones, 98, 101.
Comisión Interministerial de Comercio Exterior, 70.
Comité Interventor del Cambio, 76.
Comité de Moneda Extranjera, 77.
Comité Regulador de la Producción Industrial, 54.
Compañía Argentina de Electricidad, 120.
Compañía Telefónica Nacional de España, 66.
 Competencia desleal, 16, 26, 161.
 Competencia extranjera, 45.
 Concentraciones industriales, 25, 26, 159.
 Condicionamiento industrial, 53, 85, 154, 199.
 Condliffe (J. B.), 105, 109, 182, 190, 202.
Consejo de Economía de Cataluña, 24.
Consejo Económico Sindical, 108.
Consejo de Industria, 22.
Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S., 107, 144.
Consejo Sindical Industrial, 5, 193.
Consejo Superior Bancario, 50.
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 24.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 5, 56.
Consorcio del Plomo, 50.
 Contingentes, 47, 69, 147.
Contrôle budgétaire, 28.
 Cooperativas, 101.
 Correa (Antonio F.), 83, 108, 140.
 Deat (Marcel), 122, 166, 170, 202.
 Depuración política de elementos directivos, 94.
 Despilfarro, 164.
 Deudores hipotecarios o pignoratícios, 27.
 Diocleciano, 134.
Dirección General de la Contribución de Usos y Consumos, 172.
Dirección General de Industria, 58, 85, 150, 154, 202.
 Donaldson (John), 120, 202.
 Duboin (Jacques), 143, 158, 202.
Dumping, 27, 146, 147.
 Echávarri (Víctor G. de), 113.
 Emisiones de valores, 24.
 Empréstitos, 65, 174.
 Enseñanza profesional, 161.
 Estabilización, 181.
 Estatificación de empresas, 55, 96.
 Estella (Marqués de), 181.
 Estímulos a la industria, 32, 36.
 Estraperlo, 134.
 Eteele (F. E.), 179.
 Exenciones a parados, 30.
 Exenciones tributarias, 34, 57, 150.
 Expropiaciones, 99.
 Fascismo, 82, 94, 96, 98, 109, 111, 195.
 Fernández (Cándido), 204.
 Fernando de Antequera, 19.
 Ferrándiz Luna (S.), 11, 202.
 Ferrer Calbetó (Felipe), 29, 202.
 Ferrocarriles, 48, 49, 50, 65, 175.
 Figuerola (Laureano), 38.
Firestone Hispania, S. A., 8.
 Fisher (Irving), 63, 79.
 Flandin (Etienne), 27.
 Fondo de igualación, 180.
 Font Puig (Pedro), 60, 103.
 Franco (Francisco), 5, 107, 108, 111, 144, 191, 193.
 Fuentes Irurozqui (Manuel), 5, 73, 120, 132, 135, 136, 165, 188, 202, 203.
Fuero del Trabajo, 28, 84, 111, 191.
 Funk (Walter), 71, 74, 117, 118.
 Gallart (Alejandro), 20.
 Garantía de consumo, 51.
 Garau (Miguel), 158, 174.
 Garlot (Marcel), 152.
 Garnica (Pablo), 111.
 Garriga (Ramón), 36.
 Gay de Montellá (Rafael), 90, 96, 202.
 Gayda (Virginio), 116, 117, 118, 182, 184, 202.
 Gide (Charles), 59, 165, 203.
 Girón (José A.), 83, 93, 102.
 González (Félix), 155.
 Graell (Guillermo), 39, 203.
 Granada (Fray Luis de), 124, 194.

- Grandes almacenes, 26, 161.
Grandes Espacios Económicos, 71, 118, 145.
Gual Villalbí (Pedro), 6, 67, 131, 132, 133, 134, 144, 171, 203.
- Hazera (Evenor), 202.
Harmel (Léon), 20.
Hegel (Georg), 81.
Hitler (Adolf), 203.
Horno Liria (L.), 205.
Hortal, 158.
Hubbard (J. C.), 139.
Hull (Cordell), 119.
Hunke (Heinrich), 83.
- Impuestos, 42, 64, 171.
Industrialización dirigida, 85, 150, 199.
Industrias de armamento, 92.
Industrias de interés nacional, 51, 86.
Inflación, 63, 79, 128, 183.
Instituto Español de Moneda Extranjera, 77.
Instituto de Estudios Políticos, 82, 86, 89, 91, 104, 106, 110, 150.
Instituto Nacional de Industria, 56.
Instituto Nacional de Previsión, 23.
Interstate Commerce Commission, 25.
Intervención en los cambios, 72.
Irurzun (Pío M. de), 46, 47, 73, 182, 183, 203.
Isabel de Inglaterra, 38.
Illas y Vidal (Juan), 47.
- Jouhaux (Léon), 37.
- Kemmerer (Edwin Walter), 61, 203.
Keynes (John Maynard), 33, 61, 139.
- Lactancio (Lucio C. F.), 134.
Landfried (H.), 118.
Larraz (José), 115, 119, 176, 200, 203.
Lasplazas (Francisco), 19.
Legislación social, 15, 18, 122.
Legorduru, 102.
- Lenin (Wladimiro Ulianov), 98.
León XIII, 122, 174, 190.
Licencias de importación y exportación, 48, 71.
Limitación de beneficios, 16, 42, 167.
Limitación de despidos, 34.
Limitación de gastos, 59.
List (Friedrich), 46, 118, 146, 165, 203.
Lombroso (Gina), 38, 203.
López Bosch (Enrique), 205.
López de Gomara (Francisco), 184.
Lorente Zaro (Manuel), 203.
Lorenzo Pardo (Manuel), 32, 150.
- Madariaga (César), 40.
Manoilescu (Mihail), 46, 145, 194, 203.
Marfil (Mariano), 10, 33, 151, 187.
Margaret (J.), 66.
Marín Lázaro (Rafael), 105, 147, 156, 203.
Martínez Marí (José M.^a), 190.
Massó (Cristóbal), 41, 65, 203.
Melchett (Lord), 26.
Meseguer (Pedro), 191.
Michelis (Giuseppe de), 37.
Migraciones, 39.
Mill (John Stuart), 193.
Mises (Ludwig von), 160.
Monopolio de divisas, 77, 182.
Monopolios, 55, 68, 177.
Montes de Piedad, 27, 130.
Morand (Paul), 179.
Moratorias, 16, 41, 143.
Morrison (Herbert), 179.
Multiplicador, 36.
Mussolini (Benito), 80, 92, 94, 98, 109, 111, 195.
- Nacionalsindicalismo, 82, 83, 96, 109, 110, 111, 112, 191, 193, 195.
Nacionalsocialismo, 83, 112, 154, 195.
Nacionalización de empresas, 55, 93.
Naharro (José M.^a), 117, 155, 187, 193.
Napolitano (Gaetano), 83, 157, 203.
New Deal, 24, 26, 53, 159.
Normalización, 58, 163.

- Nueva política económica (N.E.P.), 97.
- Obras públicas contra el paro, 32, 137.
- Obras sociales, 20.
- Olariaga (Luis), 34.
- Oliveira Salazar (Antonio), 107, 109.
- Olivetti (Adriano), 158.
- Olóriz (Juan A.), 84, 112.
- Orbaneja (A. Gómez), 172.
- Organización Científica del Trabajo, 56, 163.
- Otero (Armando de), 147.
- Owen (Robert), 20.
- Palacio (Alfonso), 202.
- Pánico, 16, 40, 143.
- Paredes (Miguel), 203.
- París Eguilaz (Higinio), 8, 60, 69, 168, 176, 195, 203.
- Paro forzoso, 16, 30, 136.
- Participación en los beneficios, 20.
- Patterson (G.), 173.
- Pauwels (Henri), 158.
- Pedro el Cruel, 19.
- Penella de Silva (Manuel), 128.
- Pereira (Pedro Theotonio), 8, 96, 106, 107, 109, 123, 124, 187, 204.
- Pérez Urruti (M.), 90, 204.
- Pío XI, 119, 123, 190.
- Pío XII, 113, 118, 190.
- Poincaré (Raymond), 177.
- Platón, 81, 115.
- Policia industrial, 21, 125.
- Polimorfismo monetario, 78.
- Política industrial, 196.
- Política monetaria, 63.
- Prados Arraste (J.), 204.
- Préstamos sin garantía prendaria, 28, 130.
- Prohibición de despidos, 140.
- Propiedad industrial, 52, 153.
- Protección a la industria, 48, 144.
- Pugés (Manuel), 46, 47, 144, 145, 146, 204.
- Quemades (Salvador), 203.
- Quintana (Jaime), 113, 204.
- Racionamientos, 16, 26, 131, 135.
- Rahola (Federico), 25, 204.
- Ras (Aurelio), 6, 114, 192, 204.
- Readmisiones obligatorias, 140.
- Recargo por moneda depreciada, 147.
- Reducción de jornada, 36, 141.
- Reeducación profesional, 40, 142.
- Reformas agrarias, 99.
- Regulación de la competencia, 26, 54, 161.
- Regulación del cambio, 180.
- Regulación del crédito, 79.
- Regulación industrial, 153.
- Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit*, 56.
- Répaci (F. A.), 82, 204.
- Reservas obligatorias, 42, 59.
- Riaño (Antonio), 202.
- Ribó (Javier), 33, 138.
- Ricardo (David), 116, 204.
- Rico (Marino), 60, 184.
- Rist (Charles), 180.
- Robbins (Lionel), 6, 8, 183, 186, 195, 204.
- Robert (Antonio), 33, 60, 61, 84, 88, 92, 105, 114, 146, 149, 157, 159, 163, 165, 166, 175, 186, 194, 204.
- Rocha (Ramón de la), 38.
- Rodríguez Mata (Enrique), 202.
- Rodríguez Sastre (Antonio), 185.
- Roosevelt (Franklin D.), 12, 26, 53, 151, 159.
- Rubio (Ángel), 46, 47, 73, 182, 183, 203.
- Ruiz Amado (Ramón), 81, 204.
- Ruiz Ponseti (Estanislao), 101, 204.
- Rutten (G. C.), 111, 113, 204.
- Sabatés (Antonio), 24, 129.
- Santos (Ernesto), 116, 204.
- Sanz Orrio (Fermín), 109, 112.
- Sardá (Juan), 76, 185, 204.
- Schacht (Horacio H.), 78.
- Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera*, 32.
- Securities and Exchange Commission*, 24.
- Seguro contra el paro, 31, 136.
- Seguros, Empresas de, 16, 23, 128.
- Seguros sociales, 20, 59, 124.
- Sindicato de Fabricantes Resineros*, 51.

- Sindicato Local de Transportes Marítimos*, 32.
Smith (Adam), 118.
Sociedad Española a Precios Únicos, 26.
Sociedad de las Naciones, 145.
Société d'Études et Informations Économiques, 124.
Sócrates, 115.
Solá Cañizares (Felipe), 70.
Solares, Venta forzosa, 100.
Sorel (Georges), 101.
Stahlenberg (Príncipe), 113.
Suances (Juan A.), 115.
Subcomisión Reguladora del Algodón, 115.
Subsidio familiar, 20.
Subsidio de paro, 30, 136.
Sucedáneos, 91, 119.
Sumner (Louise), 46, 194.
Suspensión de progresos técnicos, 38.

Tácito (Publio C.), 158.
Tallada (José M.^a), 11, 14, 34, 67, 68, 78, 79, 104, 112, 116, 128, 129, 137, 139, 167, 169, 181, 199, 204, 205.
Tasas, 16, 28, 131, 184.

Taylor Society, 126.
Técnicos responsables, 22, 127.
Tiberio, 158.
Toreno (Conde de), 21.
Torrents y Monner (Antonio), 64, 205.
Trabajo de extranjeros, 39.
Truman (Harrig S.), 137.

Universidad de Barcelona, 84, 90, 112, 205.
Usura, 16, 27, 130.

Vallvé (Manuel), 202.
Vandellós (José A.), 39, 205.
Ventosa (Juan), 117, 119, 134, 152, 205.
Villaverde (Raimundo Fernández), 68.
Vito (Francesco), 9, 147, 160, 205.
Volt, 95.

Walras (Léon), 193.
Weber (Adolf), 116, 135, 136, 167, 168, 173, 205.

Zeeland (Paul van), 116.
Zorrilla de Gándara (J.), 141.
-